

SOCIEDAD BLOQUEADA
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, DESIGUALDAD Y
DESPERTAR DE LA SOCIEDAD CHILENA

RIL editores
bibliodiversidad

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ

Sociedad bloqueada
*Movimiento estudiantil, desigualdad
y despertar de la sociedad chilena*



RiL editores

Sociedad bloqueada
Movimiento estudiantil, desigualdad
y despertar de la sociedad chilena

Primera edición: marzo de 2012

© Jorge Rojas Hernández, 2012
Registro de Propiedad Intelectual
N° 213.822

© RIL® editores, 2012
Alfárez Real 1464
750-0960 Providencia
Santiago de Chile
Tel. (56-2) 2238100 • Fax 2254269
ril@rileditores.com • www.rileditores.com

Composición, diseño de portada e impresión: RIL® editores

Impreso en Chile • *Printed in Chile*

ISBN 978-956-284-XXX.X

Derechos reservados.

ÍNDICE

Palabras previas	11
I. PRESENTACIÓN.....	13
II. LA SOCIEDAD NEOLIBERAL	17
Las grandes transformaciones	17
Sociedad neoliberal	18
Individuos flexibles y emprendedores	21
Macrotransformaciones neoliberales.....	24
Inverosimilitud de lo chileno, humillación y vaciamiento de identidad	30
Estado-nación diluido frente a la globalización.....	35
Crecer hacia afuera y deconstruir hacia adentro.....	38
La sociedad de los negocios y el absolutismo de la competitividad desolada.....	41
La calidad desigual de la educación neoliberal	45
Problemas ambientales y de sustentabilidad	50
Falta de voluntad de cambio	52
Lucha ciudadana por la democracia, por sí mismo y el respeto	54
III. POLÍTICA SOCIAL EN TIEMPOS NEOLIBERALES: PASIVOS SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA	57
Los sueños de la sociedad.....	57
Transformaciones con desigualdad.....	57
Transformación social	60
La capitalización individual como sistema de (in)seguridad social.....	64
IV. EL MOVIMIENTO PINGÜINO: POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y LA IGUALDAD	73
Hijos del progreso mal distribuido	73
Ser «particular subvencionado»: individuos subsidiados	74
Están ahí para ser protagonistas de su propio destino	76

La división social de la LOCE	78
¿Cómo salir de la crisis?	80
V. CHILE DE CARA AL SIGLO XXI: SOCIEDAD BLOQUEADA	85
Grandes desafíos de país	85
Crisis del sistema político e impactos sociales.....	85
Sociedad en transformación: la competencia individual.....	91
Sociedad bloqueada	93
Sociedad neoliberal y vulnerabilidad socioambiental.....	95
Malestar social y nuevos movimientos juveniles	97
Movimiento universitario: inclusión ahora.....	99
Movimiento social mapuche y su lucha por el reconocimiento como pueblo sujeto de derechos	103
A manera de conclusión: los desafíos del desarrollo	105
VI. DESPERTAR CIUDADANO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA IGUALDAD. LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES Y LA SOCIEDAD EMERGENTE QUE CONMOCIONAN A CHILE Y AL MUNDO	107
Introducción.....	107
Crisis del sistema actual de educación superior en Chile.....	108
El capitalismo de «letra chica»	109
Endeudamiento de las generaciones.....	112
La insoportable desigualdad	113
Sistema heredado	122
Consecuencias del modelo actual desregulado y desfinanciado.....	123
Motivos de las movilizaciones: cambios ahora	125
Emergencia de la sociedad: Ser y hacer sociedad reconstruyendo lo público.....	129
Creatividad y transversalidad social en las calles	131
Es posible un sistema de educación superior público	133
¿Cómo se financiará la reforma educacional?.....	137
Lucrar con la pobreza y con aval del Estado	139
Mundo convulsionado: desigualado y en crisis de representación	141
El despertar ciudadano: democracia participativa	147
Gobierno cautivo de su ideología	151
Conclusiones preliminares: lo ganado y lo que falta por avanzar	154

VII. EPÍLOGO: BÚSQUEDA DE ALIADOS Y PROPUESTAS	
PARA EL CAMBIO	165
Gabriel Boric (FECH): «Las instituciones no dan el ancho»	173
Noam Titelman (FEUC): «Este movimiento debe abarcar a todos»	177
Recaredo Gálvez (FEC): «Más que una Federación vamos a ser un movimiento»	180
 BIBLIOGRAFÍA.....	 189

PALABRAS PREVIAS

ESTE LIBRO ES EL PRODUCTO DE MI PARTICIPACIÓN activa, en mi calidad de profesor de la Universidad de Concepción, en la crítica y discusión al modelo de sociedad y de educación privatizador y clasista heredado de la dictadura militar, por parte de los estudiantes secundarios y universitarios. Mis reflexiones han pasado por al menos cinco estaciones históricas: i) el descubrimiento a comienzo de la década de los ochenta del modelo de sociedad neoliberal o de mercado –centrado en el paradigma de lo privado y el individualismo– que el capitalismo neoliberal militar impuso por la fuerza al país y que marcaría la senda del desarrollo futuro de la sociedad; ii) la participación en la discusión sobre el largo y complejo proceso de transición política chilena a la democracia, sobre todo por eliminar los enclaves autoritarios; iii) el movimiento de los secundarios conocido como de los “Pinguinos» que estremeció al país por su inteligencia, madurez y masividad (2006); iv) las movilizaciones de los estudiantes contra el costo de los aranceles (2009), antesala de las protestas del 2011 por la educación pública gratuita, especialmente visible en la Universidad de Concepción; y v) las movilizaciones recientes de estudiantes secundarios y universitarios que colocaron definitivamente en la opinión pública el tema de la calidad de la educación, la necesidad de desterrar el lucro de la enseñanza y el imperativo de construir un sistema de educación pública y gratuita que termine con el endeudamiento de los jóvenes y sus familias y cree reales oportunidades de igualdad en el acceso a la formación profesional y al conocimiento.

Este libro es también el resultado de muchas conversaciones con dirigentes estudiantiles, profesores y autoridades de la universidad. Estos espacios de conversaciones son propios de la vida universitaria. Como símbolo de las buenas conversaciones, rindo, por este medio,

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ

homenaje póstumo a la calidad y humanismo de nuestro querido colega y amigo periodista Hugo Olea Morales, quien lamentablemente ya no está con nosotros.

Reconozco y valoro el apoyo profesional y la dedicación esmerada de Oscar Lermenda a la presente obra.

Agradezco de manera especial el apoyo de mi familia, que comprende el tiempo extra dedicado a la pasión personal de escribir, en medio de otras responsabilidades.

Agradezco el patrocinio y respaldo de la Universidad de Concepción para la publicación del presente libro. Dejo constancia que las opiniones expresadas en él son de entera responsabilidad de su autor, y no representan necesariamente el pensamiento de la institución.

Finalmente, dedico este trabajo a los miles de jóvenes que luchan por cambiar el sistema educacional y crear una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ

Concepción, 10 de marzo de 2012

I. PRESENTACIÓN

LA SOCIEDAD CHILENA SE ENCUENTRA CONVULSIONADA por el movimiento estudiantil. Es algo inédito en la historia de Chile, un fenómeno diferente a todos los movimientos sociales que han marcado al país. No es el producto del Estado, de los trabajadores ni de los partidos políticos, como ocurrió en el pasado. Es de los jóvenes estudiantes, pero al mismo tiempo, de la sociedad entera que se siente representada por sus demandas y movilizaciones.

Chile ha experimentado un fuerte crecimiento económico en las últimas décadas. Curiosamente, al mismo tiempo ha representado también un ejemplo de implementación de políticas de equilibrio macroeconómico. Lo que el mundo desconocía –y parte importante de la clase política y empresarial ignoraba o callaba– eran las enormes asimetrías existentes a nivel micro, la profunda desigualdad social en que se sustentan los éxitos económicos y la fuerte concentración de la riqueza. Las estadísticas reflejaban estas desigualdades, pero aún faltaba la conciencia ciudadana para hacerlas patentes y visibles. Existían muchos mecanismos que permitían ocultar y manipular la realidad, haciendo creer a la mayoría de la población que el sistema imperante era el mejor para alcanzar objetivos personales. Mientras permanecían, en el fondo invisible, el sistema de crédito ilimitado, la política del «chorreo», las eficientes campañas de marketing, las políticas de concertación, el miedo al retorno autoritario pinochetista, el sistema político binominal que consagra el empate entre Gobierno y oposición, el proceso de despolitización y el consumismo.

La transición a la democracia se realizó de acuerdo a las condiciones estipuladas por la dictadura, bloqueando desde un comienzo la posibilidad de establecer una democracia plena. No se convocó a una asamblea constituyente para revertir o transformar el orden heredado, introduciendo reformas de fondo a favor de los ciudadanos.

La transición duró mucho tiempo, y se hizo sin la participación del pueblo. De allí la acumulación de problemas y malestar ciudadano y, sobre todo, el hecho que la economía neoliberal –los grandes grupos económicos– asumiera el comando del país, con las consecuencias sociales y políticas que se explican en el presente trabajo.

Pero la conciencia sobre las debilidades del modelo neoliberal –sus enormes pasivos sociales y ambientales– y los déficits de la transición política, solo llegaron con el movimiento estudiantil. Esta es el producto de la acumulación de malestar e insatisfacción social, de la frustración provocada por un discurso que prometía el éxito personal pero que en realidad termina en decepción, endeudamiento y engaño. Primero surgieron protestas particulares, para luego crecer y universalizarse en el movimiento estudiantil, aún vivo y remeciendo nuestra sociedad y sus instituciones.

El movimiento estudiantil aún no ha logrado sus objetivos. El cambio de modelo, el fin del lucro y el advenimiento de un sistema de educación gratuito, de calidad, pluralista y público, demorará aún más tiempo, pues implica cambios en la correlación de fuerzas y conformación política. Sin embargo, es posible y deseable que se logren importantes conquistas en la agenda pública, traduciéndose en avances reales en la gratuidad y aportes basales entregados a las universidades públicas y tradicionales. Ello impediría una mayor radicalización del movimiento y el uso desproporcionado de la represión policial, como se observó durante las movilizaciones de 2011. La radicalidad del movimiento y la obsesión oficialista por el orden público ponen en peligro la gobernabilidad.

Diferentes contextos socioculturales y políticos en crisis han visto surgir movimientos de indignados. Un escenario es el de los países desarrollados, también diferenciados en modelos de mercado y de iniciativa individual, como es el caso de Estados Unidos, donde los ciudadanos se encuentran menos protegidos y, por lo tanto, la crisis impacta más fuertemente la vida personal y las instituciones son puestas duramente a prueba. En Europa, en cambio, la existencia de Estados de bienestar social brinda un mayor blindaje a sus habitantes, ayudándolos a enfrentar de mejor forma los riesgos.

Mientras en los países desarrollados la crisis es de declinación estructural, representando un peligro para el desarrollo y el progreso

y, por consiguiente, impactando de manera negativa en la calidad de vida de la población, en los países emergentes la crisis es de redistribución de la riqueza, de inclusión de los trabajadores y de la clase media. Ellos cuentan con recursos y, por lo tanto, la crisis se podría resolver con más equidad, democracia e inclusión social, si se tiene la voluntad política necesaria para generar los cambios estructurales requeridos. Mientras en los países desarrollados –Estados Unidos y Europa– los Estados se encuentran sobreendeudados y necesitan adquirir recursos, redistribuyendo los déficits entre los diferentes segmentos de la población (operación sumamente riesgosa en lo político y social), los Estados de países emergentes y, sobre todo, sus grandes grupos económicos, cuentan con excedentes que pueden –y deben– redistribuir, para lograr mayores niveles de justicia social y participación ciudadana en el bienestar nacional.

A la luz del seguimiento crítico y sistemático de la evolución de la sociedad chilena, de sus estructuras, personas e instituciones, el autor se ha ocupado de investigar el modelo social en que vivimos desde mediados de la década de los setenta, momento en que se inició su implementación forzada, en dictadura. Los primeros estudios los realizó durante su larga permanencia en Alemania. El trabajo culmina con un análisis del surgimiento del movimiento social estudiantil en el contexto complejo de las conmociones que agitan y preocupan al mundo. Constituye un aporte para la reflexión necesaria de un fenómeno nuevo que, sin duda alguna, influirá en la configuración de la sociedad del futuro.

Cambiar el modelo de economía neoliberal que ha impregnado e influido al conjunto de la sociedad resulta una tarea compleja. Cambiar el sistema educacional también lo es. El destacado sociólogo Zygmunt Bauman plantea el desafío del cambio educacional de la siguiente manera:

«La educación adoptó muchas formas en el pasado y llegó a ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes, estableciendo nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero, repito, el presente cambio no es como los cambios del pasado. En ningún punto de inflexión de la historia humana los educadores se han enfrentado a un desafío estrictamente comparable con el que plantea el momento actual. Sencilla-

mente, nunca hemos estado en una situación similar. Aún no hemos aprendido el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Ni tampoco el arte, inconcebiblemente difícil, de preparar a los seres humanos para esa vida» (Bauman, 2011).

Nuestro modelo económico, social, ambiental y educacional no está hecho para la vida humana. Su centro capital es el negocio, el lucro, y no la vida. El sistema educacional chileno, junto con ser precario, clasista, desarticulado y discriminador, es de mala calidad y caótico. El sistema universitario no tiene nada en común; es un conjunto de establecimientos, de muy diferentes calidades y estatus jurídicos, que luchan por conquistar «clientes» en el mercado educacional. No cuenta con ninguna capacidad de regulación ni de adaptación a los requerimientos de la sociedad en proceso de cambio. Menos tiene la capacidad de preparar a los seres humanos para la vida en comunidad, para la confianza, la responsabilidad y la realización personal.

Este modelo económico, político y social basado en el mercado y en la desigualdad se ha agotado en lo humano, ambiental y ético. ¿Qué modelo lo reemplazará? ¿Quiénes lo construirán? Analizando lo que pasa en Chile y el mundo podemos estar seguros que la sociedad, los ciudadanos conscientes, estarán presentes y activos en su diseño y construcción.

II. LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS por la sociedad chilena en las últimas décadas han producido también graves problemas, los que constituyen, al mismo tiempo, los grandes desafíos de desarrollo que se le presentan en el presente y en el futuro al país. De estos problemas todo el mundo habla actualmente en Chile. Los analistas, incluidos los políticos de las diferentes tendencias ideológicas, coinciden en que de la resolución de estos problemas depende el paso de Chile a la siguiente etapa de su desarrollo. Implicaría transitar del crecimiento económico inequitativo y depredador, al desarrollo con justicia social y sustentabilidad, transfiriendo también los indicadores positivos de nivel macro al ámbito de las microestructuras y actividades de la sociedad y las personas. Su no-resolución puede significar el estancamiento, e, incluso, una posible regresión de los logros alcanzados en materia económica.

Mala distribución del ingreso, calidad de la educación, calidad del trabajo, acceso democrático a la salud, incremento de la participación ciudadana en asuntos de relevancia social, política y ambiental, mejoras de la vivienda y cuidado del medio ambiente, son los grandes temas a resolver. Todos ellos se encuentran estrechamente vinculados a la agregación de valor a los bienes y a las personas. Si bien es cierto que la pobreza ha disminuido significativamente, como consecuencia de las políticas sociales y la creación de empleos, también lo es que la estructura desigual del ingreso prácticamente se ha mantenido al mismo nivel de 1990.

El neoliberalismo practicado se ha traducido en una privatización desregulada de las actividades económicas y de la vida social. A continuación nos ocuparemos, precisamente, del significado, profundidad, mecanismos de realización y contradicciones de la hegemonía del neoliberalismo en la sociedad chilena.

SOCIEDAD NEOLIBERAL

¿Es posible calificar a una sociedad de «neoliberal»? ¿Qué es una sociedad neoliberal? ¿Cómo se caracteriza?

Últimamente ya casi no se habla de sociedad. Mucho más se menciona al mercado, dando la impresión que éste ha reemplazado a la colectividad y sus instituciones políticas y estatales. La omnipresencia del mercado ha reducido la vida humana a meros intercambios comerciales, donde todo parece contaminado por la rentabilidad y viabilidad económica. El lenguaje político y cotidiano refleja esta nueva realidad. Lo mismo ocurre con el trabajo y la educación y, en general, con el comportamiento individual y social. ¿Se puede transformar tan profundamente una sociedad? ¿Se puede borrar su historia y eliminar sus tradiciones y cultura política? No es posible borrar todo, siempre quedan «huellas» históricas, susceptibles de redescubrir y volver a caminar. No obstante, cuando han ocurrido rupturas institucionales y sociales como las acontecidas en Chile, el nuevo tránsito requiere de tiempo y de nuevos actores sociales y políticos.

El neoliberalismo defiende teóricamente la libertad, sobre todo, se entiende, la económica, no necesariamente la social ni tampoco la política. Además, el neoliberalismo en la periferia de la globalidad no es lo mismo que en el centro o norte del capitalismo. En los países desarrollados, el neoliberalismo se enfrenta con una sociedad más organizada: con sindicatos, partidos políticos, organizaciones ciudadanas, gremios y con mayor conciencia social. En esos países el mercado ha sido históricamente «enjaulado», socialmente cercado, políticamente negociado entre el capital y el trabajo (Estado de Bienestar social) y jurídicamente regulado. El capitalismo organizado o «tardío», en la acepción de Jürgen Habermas, funciona con compromisos y consensos, lo que dificulta el desenvolvimiento arbitrario del capital. Es cierto que esta forma de capitalismo también se encuentra en crisis, pero tiene otras opciones de salida.

Refiriéndose a la situación actual que vive Alemania, Ulrich Beck señala que

«la demanda por trabajo disminuye (como consecuencia de la aplicación de tecnología inteligente), mientras que la

oferta de trabajo aumenta (debido a la globalización). Ambos indicadores de la disminución del trabajo formal –aumento de la desocupación y del trabajo informal– encienden alarmas. Ya no se trata más del tema de la distribución del trabajo. La tarea central es la superación de la desocupación. El caso es que cada vez menos personas, altamente calificadas y con movilidad global, están en condiciones de incrementar su rendimiento y prestar más servicios. El crecimiento económico ya no es más condición necesaria para disminuir la desocupación, sino que, por el contrario, supone como condición la eliminación de puestos de trabajo. Se trata de un capitalismo sin trabajo, en un país de bienestar social como Alemania, que no está en condiciones de competir con países con salarios e impuestos bajos» (Beck, 2005: 37).

Para Beck la superación de la crisis que vive el Estado social alemán pasa especialmente por tomar conciencia del proceso de globalización que también afecta al país y que ha producido una gran transformación a escala mundial. Ya no es posible actuar desde los límites del viejo Estado nacional (a fines de julio del 2005 Alemania alcanzaba la cifra record de desocupación: 4 millones 700 mil personas, cerca de un 10 % de la población activa). Ahora, en el mundo globalizado, «los problemas nacionales sólo pueden resolverse en el marco de una política transnacional» (Beck, 2005: 89). La solución se encuentra no en la «integración al mercado global» existente, sino en una «integración social global, al compromiso con la justicia social y la democracia social» (Beck, 2005: 123), todo lo cual presupone un «nuevo pacto global». Por cierto que los países desarrollados tienen mejores posibilidades de renovar sus sistemas económicos, sociales y políticos, en un mundo globalizado, en que sus corporaciones internacionales ejercen gran influencia y, por lo tanto, pueden participar decididamente en la definición de un pacto global que garantice una estabilización de su democracia y renovación (a otro nivel, menor) del sistema de bienestar social.

En cambio el capitalismo «salvaje» o «desorganizado» pasó por encima de los actores, instaló la desregulación total, las privatizaciones y hoy se rige por las «leyes del mercado». Rechaza rotundamente los «amarres», sean éstos sociales o políticos. Aboga por la libertad absoluta del capital, libre de todo tipo de consensos «colectivizantes»

o restricciones legales, considerados como «enemigos» intrínsecos de la libertad económica y del progreso.

Una «sociedad neoliberal» funciona con poca democracia e injerencia ciudadana. Milton Friedmann y Fiedrich von Hayek –verdaderos profetas del neoliberalismo– proclamaron la libertad contra el Estado y la «servidumbre» de los sistemas colectivos o totalitarios, trátase indiferenciadamente del keynesianismo, intervencionismo estatal, de la economía socialista o «social de mercado» o del régimen de bienestar social socialdemócrata o socialcristiano. Todo lo que implique exceso o demasiada regulación del mercado atentaría, de acuerdo a estos autores, contra la libertad de los intercambios comerciales. Ciertamente que hay posiciones neoliberales extremas o fundamentalistas, que no dejan nada fuera del dominio del mercado, y otras más «moderadas», que salvan a algunas esferas públicas mínimas (por ejemplo, las Fuerzas Armadas) de la influencia del mercado. Pero, en general, se permite que desde las redes viales hasta las escuelas y universidades, pasando por la salud y la propiedad de los recursos naturales, estén en manos de los privados. En realidad, se prefiere y se promueve su paso a la esfera privada.

La sociedad neoliberal «pura», de existir en algún lugar desutopizado, surge de este duro y radical proceso de desestatización y privatización de las relaciones sociales, económicas y políticas. ¿Qué queda después de la «muerte del Estado» y la disolución social? Individuos dispersos, de baja intensidad subjetiva y ciudadana, «electores de supermercados» (los productos pueden ser bienes de consumo durable, perecibles, teleseries o candidatos políticos marketeados) provistos de tarjetas de créditos, ansias de consumo y bajo poder adquisitivo.

¿Advenimiento de la sociedad de masas? Podría ser, a un nivel inferior, el modelo para Chile. En su libro *La irrupción de las masas y el malestar de las élites* (1999), Eugenio Tironi retrató el «ascenso» de las masas al reinado de la sociedad de consumo instalada en el país. Por cierto, se trata de un ascenso muy limitado y diferenciado socialmente, puesto que alcanzar la democracia plena supone cambios profundos, no percibidos aún en el horizonte de la política nacional. Implica también superar la sociedad de masas.

Por su parte, Manuel Castells afirmaba:

II. LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

«Chile ha consumido buena parte de sus energías los últimos 15 años en una larga transición democrática. Creo que se puede decir que se ha cerrado ahora. Hay sistema de juego democrático en términos políticos, hay mucha más fuerza institucional y capacidad de dedicar energía de la acción de Gobierno y de la conexión con la sociedad civil a abordar problemas estratégicos en lugar de resolver los problemas del pasado» (Manuel Castells, en Careaga, R. *Diario Siete*, 11 de julio de 2005).

El análisis anterior fue y sigue siendo equivocado. La transición ha sido excesivamente larga en comparación con la de otros países como, por ejemplo, España. Por otro lado, el Estado ha sido reducido respecto de sus funciones tradicionales y, en forma paralela, la sociedad ha sido desorganizada mediante la implantación autoritaria del capitalismo neoliberal en las diferentes esferas de la vida económica, social, política y cultural.

La sociedad neoliberal se construyó con la violencia militar y el despotismo del mercado desregulado. Luego vino la transformación sociocultural: la creación del consumidor individual y desprotegido, sin derechos.

Esta larga y lenta transición ha caminado por una senda iluminada por principios neoliberales que, precisamente, resisten el surgimiento de un ciudadano socialmente blindado y de una sociedad articulada y cimentada en la justicia y basada en los principios de la solidaridad intergeneracional.

INDIVIDUOS FLEXIBLES Y EMPRENDEDORES

Para el caso chileno, se busca construir un orden social utópico basado en el «individuo individualista», considerado como un ente abstracto, sin sociedad y limitado a relaciones de tipo transaccionales. Para lograr este objetivo los militares desorganizaron violentamente a la comunidad, mientras que los economistas neoliberales sometieron las relaciones sociales al mercado. Estas dos dictaduras echaron las bases del tipo de sociedad actualmente existente en el país.

La filosofía neoliberal más refinada se refiere al individuo em-

prendedor y flexible, es decir, a aquella persona que desde sí mismo, desde su fuerza, se construye sin exigir demasiado a las instituciones públicas ni a la sociedad. Este «individuo individualista» representa la esencia de la libertad neoliberal. Un individuo sin «amarras», libre en sus relaciones de intercambio y flexible en su forma y precio de venta como fuerza de trabajo. No necesita de sindicatos ni partidos políticos que defiendan sus derechos, tampoco necesita de organizaciones intermedias. Los sindicatos, según los neoliberales, constituyen «monopolios» que atentarían contra la libertad contractual individual; mientras que los partidos populares practican el «clientelaje», prometiendo medidas de tipo «pacto social» que bloquean la libre iniciativa individual. Muchas veces se les denomina –peyorativamente– «populistas».

La flexibilidad debilita a los más débiles, cercena sus derechos y bloquea sus posibilidades. La regulación capital-trabajo ha sido, históricamente, producto de las luchas sociales tendientes a mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.

Bajo la dictadura de Pinochet, la desregulación se practicó en forma violenta. Permitió despedir trabajadores sin mayores problemas ni procedimientos legales; rebajar drásticamente los salarios; eliminar las conquistas sociales, la negociación colectiva y la actividad sindical; impedir la filiación a sindicatos; y suprimir los aportes empresariales al sistema de pensiones y seguridad social de los trabajadores. De esta manera, se permitió el control absoluto del trabajo por parte del capital, obligando a los trabajadores a adaptarse a las nuevas condiciones y a entrar en una larga fase defensiva y de reorganización, de la que aún no logran salir.

El individuo flexible carece de sociedad y de instrumentos de negociación. Su única posibilidad de sobrevivencia consiste en *autoemprenderse*, en desarrollar iniciativa individual. Su vida no tiene metas de largo plazo ni certezas, carece de futuro y de biografía. Debe vivir en el presente, con una vida discontinuada en proyectos que si fracasan es por responsabilidad propia y, por lo tanto, es él quien debe emprender nuevas iniciativas para salir adelante. El estrés y el fracaso están autoprogramados, pero la ideología de la flexibilidad y del emprendimiento las oculta, al darles existencia «natural». En la mayoría de los casos, los individuos sobreviven en medio de fra-

casos y pequeños éxitos. La desigualdad estructural existente impide a los más pobres y con menos recursos –económicos, sociales y culturales– el autoemprendimiento, que, en una sociedad con igualdad de oportunidades, constituye una forma de inyectar dinamismo al desarrollo humano y social.

Esta «sociedad de individuos» dispersos no está basada en la solidaridad colectiva, sino en la responsabilidad individual. Por lo mismo que el sistema social, si es que se le puede llamar así, está también basado en el esfuerzo individual. Los teóricos neoliberales lo llaman «sistema de capitalización individual»: los montos de las prestaciones sociales –de salud y pensión– dependen estrictamente de los montos de los aportes individuales, los que, a su vez, son administrados por empresas capitalistas privadas y sin injerencia alguna de los imponentes, salvo la «libertad» de cambiarse de vez en cuando de empresa prestadora de servicio.

Para Adorno (1991), la vida humana es esencialmente convivencia; el ser humano es prójimo antes que individuo; se relaciona con los demás antes que consigo mismo; existe gracias al otro; es lo que es gracias a ellos; y no existe primariamente definido por una indivisibilidad y particularidad, sino gracias a que él participa de otros con quienes puede comunicarse. El individuo es un momento de las relaciones en las cuales vive, antes que –quizás– decida por sí mismo. La determinación de un ser humano como persona implica que, al interior de las relaciones sociales en las que vive, siempre se encuentra desempeñando un rol social: es hijo de una madre y de un padre, hermano, alumno de un maestro, miembro de una tribu, portador de una profesión, amigo de alguien. Esta relación no es algo externo, sino algo propio, interno a él mismo; pues *al interior de las relaciones sociales la vida individual adquiere sentido*. Más aún, la biografía individual de cada persona es una categoría social.

Los planteamientos de Adorno tienen hoy plena validez, en un momento en que se fomenta el superindividualismo y se siembra la ilusión de que el individuo puede autosustentarse en el mercado, que no necesita del otro, que no requiere organizarse ni interactuar. Los ideólogos del mercado buscan construir un individuo solo, aislado del resto y del todo, puesto que un individuo desvinculado y desorganizado, «solo», resulta más fácil de controlar y dominar. Al capitalismo

«salvaje» neoliberal le molesta la comunidad porque implica compromiso, negociación y consenso, lo que frenaría y, por ende, encarecería el trabajo y el producto. Este individuo producido en el mercado es inhumano, agresivo, depresivo, física y psíquicamente enfermo, extraño a sí mismo. *El individuo entramado en sociedad* no solo se encuentra protegido, sino que, además, el mismo entramado social le permite desarrollar sus potencialidades, su subjetividad y libertad.

La vida humana es relación e interrelación, comunicación con el otro y con su medio. Cansado y enfermo de consumir, el ser humano busca a sus semejantes y se busca a sí mismo, dejando atrás el ensimismamiento y los intereses puramente materiales. Este proceso se da, reflexivamente, en el mismo momento en que se siente atrapado y cautivado por los encantos pasajeros del mercado.

MACROTRANSFORMACIONES NEOLIBERALES

Chile ha experimentado en las últimas décadas grandes transformaciones, especialmente en el ámbito económico, político, cultural y sociodemográfico. Estas transformaciones le han cambiado profundamente el rostro al país, a las regiones y a sus ciudadanos. El país ha entrado en un proceso de modernización, el que se ha manifestado, especialmente, en la actividad económica, en el fuerte impulso a la política de exportaciones y en la ampliación y mejoramiento de las redes viales. En otros ámbitos, como en la gestión del Estado, en la educación y en la administración de justicia, también han existido intentos –diferenciados y graduales– por modernizar, con resultados aún insuficientes y poco visibles respecto de su eficacia y profundidad. Lo mismo sucede respecto de la necesidad de descentralizar y crear regiones más autónomas en sus decisiones. Recientes conflictos en Magallanes y actualmente en Aysén muestran claramente el centralismo y la ausencia de regiones con mayor autonomía y calidad de vida.

Parte importante de estas transformaciones han sido realizadas por privados, con el respaldo activo del Estado y de los gobiernos de la Concertación, primero, y luego de la Alianza, lo que se ha traducido en una profundización del proceso de privatización iniciado bajo el régimen militar.

En lo económico, Chile ha adoptado una política neoliberal de mercado con impactos en diferentes esferas. El país ha mostrado niveles macro de eficiencia económica, especialmente a partir de 1990, fecha que marca el inicio del proceso de transición a la democracia. Ello se ha traducido en un crecimiento sostenido de la economía, en niveles adecuados de inversión, incremento y diversificación progresiva de las exportaciones, balanza comercial positiva, baja inflación, ordenamiento de las cuentas fiscales y del sistema financiero, etc. Esta política ha ido acompañada de una ampliación considerable de obras en infraestructura: carreteras, puentes, puertos, ampliación de aeropuertos, establecimientos educacionales, modernización vehicular de carga y pasajeros.

Los gobiernos de la Concertación, a partir de 1990 disminuyeron a menos de la mitad la pobreza: de 38,6 % en 1990 a 15,1 % en 2009; mientras que la extrema pobreza disminuyó de un 13 % en 1990 a un 3,7 % en 2009 (Encuesta CASEN, 2009). Ello ha sido posible gracias al crecimiento económico, al incremento progresivo del gasto público y a la aplicación de políticas sociales.

La población chilena también experimentó cambios del 1992 al 2002, creciendo de 13.348.401 habitantes en 1992 a 15.116.435 habitantes en 2002, lo que representa un crecimiento con una tasa anual intercensal de 1,2 % personas por cada cien habitantes. La tasa de crecimiento anual intercensal disminuyó en las últimas décadas. En efecto, en 1960 creció a una tasa anual de 2,6 respecto de 1952; en 1970 creció a una tasa anual de un 2 % respecto de 1960; en 1982 experimentó un crecimiento anual de un 2,1 % respecto de 1970; en 1992 creció a una tasa anual de 1,6 % en relación con 1982 (INE, 2002). En otras palabras, a partir de la década del 70 se observa una disminución constante del crecimiento de la población, situándose en 2002 entre los cuatro países de menor crecimiento poblacional de América Latina.

Estos resultados son la consecuencia de una baja sostenida de la mortalidad y, sobre todo, de la fecundidad. Ello significa que Chile se encuentra en un proceso de transición hacia el envejecimiento demográfico de la población, con todas las consecuencias sociales y políticas que ello implica. Las políticas privatizadoras, la incorporación creciente de la mujer al mundo del trabajo, la carestía de la vida,

la inseguridad laboral, los sentimientos modernos de independencia e individualismo, impactan negativamente la natalidad. Por su parte, el envejecimiento de la población plantea nuevas exigencias a las instituciones y a la sociedad, relacionadas con la atención a la tercera edad, para lo que el país aún no se encuentra preparado en ningún ámbito (sanitario, habitacional, social, cultural ni psicológico). Los cambios demográficos impactan también la estructura familiar, las costumbres y las formas individuales de vida, lo que por ejemplo se manifiesta en el incremento de los hogares individuales.

El Censo del año 2002 muestra también importantes avances materiales en la vida de los chilenos, en comparación con el Censo de 1992. Así, por ejemplo, en el 2002 un 78,8 % tenía lavadora en su hogar (en 1992: 48,2 %): un 82,1 % tenía refrigerador (en 1992: 54,6 %); un 87 % tenía TV color (en 1992: 52,6 %); un 51,5 % tenía teléfono red fija (en 1992: 23,6 %); un 20,5 % tenía computador y un 10,2 % conexión a Internet. Muchos de estos artículos se consiguen mediante créditos.

El capitalismo neoliberal chileno practica una política agresiva de conquista del consumidor, ofreciendo una gran diversidad de productos y, sobre todo, enormes y múltiples facilidades de compra y pago. Diferentes productos, caros y baratos, se pueden adquirir mediante generosos sistemas de créditos. Las grandes tiendas comerciales, malls y supermercados, controlan crecientemente el ámbito de la distribución de bienes y productos, poseen sus propios sistemas crediticios y encantan con una atractiva publicidad a sus clientes.

En la década intercensal 1992-2002, la población chilena incrementó sus niveles de alfabetismo: subió en 1,2 puntos, alcanzando a un 95,8 % (en 1992 era un 94,6 %). Se mantienen, eso sí, diferencias entre la población alfabeta urbana (96,8 % en 2002 y 94,3 % en 1992) y la rural (89,16 % en 2002 y 85,97 % en 1992). (INE, 2002). La población chilena envejece, pero al mismo tiempo los adultos mayores son, entre otros factores negativos, golpeados por altos niveles de analfabetismo, lo que afecta su calidad de vida.

Estas cifras deben ser relativizadas desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo el país ha incrementado su alfabetismo. Sin embargo, estudios y comparaciones internacionales señalan altísimos niveles de analfabetismo con relación a la incapaci-

dad de la mayoría de la población chilena para entender aspectos y elementos esenciales de la vida moderna (Brunner y Elacqua, 2003).

En relación con la composición de los ocupados, es importante destacar el crecimiento espectacular del sector terciario: 43,1 %. Este es el único sector de la economía que creció entre 1992 y 2002, mientras que la ocupación en el sector primario disminuyó en un 20,5 % y en un 1,1 % en el sector secundario (INE, 2002). Estos datos indican la tendencia al crecimiento terciario de la economía chilena en la última década. Los aumentos más significativos en el sector terciario correspondieron a las ramas económicas inmobiliaria, empresarial y de alquiler, a la intermediación financiera, enseñanza y restaurantes y hoteles, las que en conjunto incrementaron la ocupación en 73,5 %.

Por su parte, la fuerza de trabajo femenino creció significativamente durante la mencionada década, aumentando a un 35,6 % respecto a 1992 (29,5 %), cifra que representa un crecimiento de 50,1 %. Mientras, la fuerza masculina sólo creció en un 17,6 %. Cabe señalar que este crecimiento ha ampliado de manera importante los niveles de participación de la mujer en la vida económica, social, política y cultural del país. Ello se manifiesta también en el surgimiento de fuertes liderazgos políticos femeninos—como lo señalaba Eugenio Tironi (2004)— y en la elección de la primera Presidenta mujer de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010).

A pesar de estos cambios persisten aún fuertes formas de discriminación de la mujer tanto en el trabajo como en otras actividades. Así por ejemplo, la mayoría de las mujeres siguen realizando trabajos que socialmente se consideran como femeninos: en el comercio, hogares privados con servicio doméstico, enseñanza, actividades comunitarias, servicios sociales y de salud, industria manufacturera, etc. En el grupo ocupacional ejecutivos, sector público y privado, se desempeña solo un 32,7 % de mujeres; en agricultores, opera apenas un 6,2 % de mujeres; en operadores de máquinas, un 8,3 %; en operarios y artesanos, un 10% de personas del sexo femenino (INE, 2002).

Respecto al tamaño medio de los hogares, éste a nivel nacional es de 3,6 personas, menor al valor de 1992 (3,9 personas). El hogar nuclear representa un 57 % del total de hogares (1992, 57,9 %), el unipersonal 11,6 % (1992, 8,3 %), el extenso 21,9% (1992, 23,4 %). Los datos indican una disminución de los hogares extensivos

y un aumento de los hogares unipersonales. Se ha producido una estabilización de los hogares de carácter nuclear, los que se sitúan prácticamente en el centro de las sociedades modernas, dejando atrás las familias extensas. Por otra parte, los hogares unipersonales crecen significativamente en el período intercensal. Ello es la expresión también de tendencias existentes en las sociedades avanzadas, que muestran el desarrollo de procesos crecientes de individuación. Lo anterior estaría reflejando un proceso de transición hacia una sociedad conformada por individuos con mayores grados de independencia y libertad, lo que en gran medida está dado por la influencia liberal del mercado. Dadas las características de la sociedad chilena actual, esta tendencia profundizará aún más la ruptura de lazos comunitarios, incrementará los procesos de aislamiento y alienación social y la inclinación a descomprometerse y desentenderse del otro. Ciertamente estas tendencias pueden revertirse si median otros procesos sociales, si surgen movimientos sociales que unan en la acción el desarrollo de la subjetividad con la ciudadanía.

El Censo del 2002 también muestra indicadores negativos como la pérdida de ruralidad y el incremento del proceso de urbanización. En efecto, en 1992 un 83,5 % de la población vivía en áreas urbanas y un 16,5 % en áreas rurales, mientras que para el año 2002 estos valores son de un 86,6 % y un 13,4 %, respectivamente. De las 13 regiones en que entonces estaba dividido el país, 6 de ellas superaban el 90 % de población urbana (INE, 2002). Diversos estudios concluyen en el crecimiento de las ciudades intermedias y la Región Metropolitana de Santiago, con los consiguientes nuevos problemas de infraestructura y cambios de uso del suelo de rural a urbano. El crecimiento de la Región Metropolitana y de la ciudad de Santiago, se basa sobre todo en su desarrollo económico. Es así como parte importante de las inversiones extranjeras recibidas por el país, en las últimas décadas, se han concentrado en dicha región. Sin embargo, en la actualidad, es posible observar también importantes inversiones en las regiones del norte de Chile, principalmente en la gran minería, y en la zona centro sur del país, vinculadas especialmente a la industria forestal y a la salmonicultura.

La falta de planificación territorial, la privatización de los recursos naturales y la desigualdad social se ha traducido en una ocupa-

ción desregulada y asimétrica del territorio. Las ciudades grandes –como el Santiago metropolitano–, pero también las intermedias –como Concepción, Chillán y Los Ángeles de la Región del Biobío–, se expanden, invadiendo suelo agrícola y áreas verdes; el primero, destinado en el pasado a la producción y el segundo, a la recreación. Ambas funciones son de carácter estratégico para el sustento de la vida económica y social.

La información del Censo del 2002 nos permite afirmar que la situación de la mujer ha experimentado cambios positivos, como su mayor nivel de incorporación al trabajo, sus mayores niveles de escolaridad y mayor incursión en el ámbito de la política; pero al mismo tiempo muestra aspectos negativos como discriminación laboral, discriminación en los sistemas de salud y remuneraciones, mayores responsabilidades en la mantención del hogar, aumento de su participación en la vulnerabilidad y pobreza, etc. En general, se puede afirmar que han mejorado sus relaciones de género, pero aún se mantienen fuertes grados de discriminación, desigualdades y falta de oportunidades frente al acceso a diferentes servicios y calidad de vida.

En síntesis, aún subsisten en nuestra sociedad graves problemas que impiden que el país de saltos cualitativos en su desarrollo. Se trata de problemas de carácter estructural, como la modernización de la sociedad y el desarrollo de las regiones. Aquí están algunas de las zonas oscuras del desarrollo del país.

La salud constituye otro de los problemas graves que afectan a la población chilena, en un doble sentido: su acceso y calidad. En este ámbito resulta destacable la inclusión de más de 50 enfermedades «catastróficas» en los programas de las Isapres (Institutos de salud y prestaciones) y FONASA (sistema público de salud), introducidas el 2005 por la reforma al sistema sanitario realizada por el Gobierno de Ricardo Lagos. Estas reformas mejoraron en parte el acceso de los chilenos a la salud, que ha hecho crisis en la última década de funcionamiento privado, con escasa regulación y pocas prestaciones.

Por otra parte, la fuerte concentración de los ingresos ha ido acompañada del surgimiento de nuevos segmentos sociales que buscan diferenciarse socialmente, construyendo sus viviendas en lugares geográficos de alto valor paisajístico, alejados del centro urbano e

industrial, separados físicamente de los sectores medios empobrecidos y clases sociales bajas y marginales. Por razones de seguridad o de búsqueda de «calidad de vida» (distantes de los graves problemas de contaminación), se aíslan o protegen en territorios «cerrados» o en condominios, vigilados por guardias privados. De esta manera, se produce una fragmentación y expansión inorgánica del territorio urbano, con crecientes muestras de polarización socioespacial. La vida urbana y las ciudades pierden su capacidad y función de integración social. Los procesos de dispersión y fraccionamiento del territorio impactan negativamente la compactación de las ciudades y de la vida urbana, generando problemas de identidad urbana, problemas ambientales y fuertes demandas en infraestructura, suelos, transportes y en general, servicios públicos.

INVEROSIMILITUD DE LO CHILENO, HUMILLACIÓN Y VACIAMIENTO DE IDENTIDAD

Chile enfrenta su ingreso al nuevo siglo como un país territorialmente fraccionado, diluido en el consumo y vacío de sentido (PNUD, 2002). En el pasado los chilenos tuvieron un fuerte sentido de pertenencia, dado, entre otros aspectos, por la continuidad de sus instituciones y sus tradiciones democráticas, el afán de progreso, la solidaridad, la lucha por la libertad y la justicia social. La dictadura militar y el mercado ultraliberal destruyeron la solidaridad y el «nosotros», mediante la estrategia de refundar el país desde un individuo solo, sin valores ni normas colectivas. Un individuo sin capacidad de negociación, vacío de sentido, separado y desconfiado del vecino, en competencia con el compañero de trabajo, presto a ser ocupado por el mercado y la variedad de sus productos, símbolos y cadenas crediticias. Las privatizaciones de servicios, educación, salud y seguridad social apuntaban precisamente a generar un marco social apto para la construcción individual de la sociedad y, de esta forma, asegurar la dominación del capital y el alejamiento definitivo del peligro de la revolución social. Los estados de sitio y de emergencia, la prohibición de la acción sindical y de la política, las detenciones masivas, la tortura y los desaparecimientos, formaron parte de esta estrategia refundacional.

Durante la historia republicana del país la política contribuyó de manera fundamental a crear imaginarios sociales colectivos mediante la difusión de utopías y reformas, arraigadas en diferentes segmentos y actores sociales. Lo militar (represión, autoritarismo y temores internalizados) y el mercado (transacciones) dominaron la sociedad, desplazando y deslegitimando a la política. Al iniciarse la transición a la democracia «la política parecía tener una relevancia menor para las prácticas y representaciones de la convivencia social» (PNUD, 2002). Efectivamente es así, y ello se explica también por los cambios experimentados en los partidos políticos y por la nueva cultura social imperante. El informe del PNUD constataba un bajo nivel de adhesión del chileno al régimen democrático (45 %) y una relativa baja adhesión a un régimen autoritario (18 %), lo que, sin duda, era positivo. Todo ello se mezclaba con un fuerte sentimiento de impotencia, es decir, de sentirse instrumentalizado por los poderosos (63 %), marginado de lo que pasa a su alrededor (37 %), de que su opinión no cuenta para nada (65 %) y que los políticos no están en absoluto preocupados de sus problemas (13 %). Impotente «es la expresión subjetiva de los pobres, y consiste en sentirse no solo explotado y excluido en lo económico, sino además humillado y despreciado» (PNUD, 2002).

En el ámbito del trabajo, y a pesar del crecimiento económico importante experimentado por el país desde mediados de los años ochenta, tampoco se perciben grandes beneficios por parte de la población trabajadora¹. En efecto, para un 74% de las personas entrevistadas el sistema económico chileno representa sentimientos negativos, relacionados con inseguridad, enojo y pérdida. Para un 58% el trabajo representa únicamente un medio para conseguir recursos económicos, y solo para un 29% constituye una posibilidad para realizarse como persona. Un 54% evalúa en forma negativa los cambios laborales ocurridos en el país (PNUD, 2002).

Mientras en el pasado el trabajo constituyó un importante factor de cohesión e integración social como constructor de valores e identidad personal, el sistema neotaylorista y su precarización impiden toda identificación con él, lo que, a su vez, influye negativamente

¹ Al respecto, cabe destacar que el fuerte crecimiento de la economía chilena comenzó a mediados de los años ochenta y que los niveles de pobreza se mantuvieron elevados hasta el año 1997.

en los bajos niveles de productividad que presenta actualmente el trabajo en nuestro país.

Junto a la cadena interminable e incontrolada de sistemas perversos de subcontratación, que externalizan costos, existen las auto-ocupaciones de «salario cero», es decir, el ocupado está obligado a hacerse su propia remuneración según lo que produzca o lo que venda. Si no vende en la gran tienda comercial elegante, donde aparentemente trabaja, viste bien y debe sonreír a los clientes, no gana nada y sufre por dentro su autoexplotación.

La calidad del trabajo depende no solo del mejoramiento de las remuneraciones, sino que, sobre todo, de la calificación (aún muy escasa), de la permanencia y de mayores niveles de regulación y control público. Si se enfatiza la agregación de valor a los bienes que se producen, ello debería reflejarse en mayor calidad laboral y mejor protección de los recursos naturales. Ello implica superar el modelo económico actual basado en la exportación de materias primas de escasa elaboración, que gozó en el pasado de «ventajas comparativas», pero hoy no: el nicho de exportaciones de productos no elaborados se ha reducido en el mercado mundial, mientras que, al mismo tiempo, surgen nuevos competidores. El país está obligado a superarlo agregando valor a sus productos, si desea seguir el camino hacia el desarrollo. Para ello es imprescindible capacitar a los trabajadores, los que, según el Informe de la OECD, se encuentran, en promedio, por debajo de la enseñanza media, lo que constituye una base precaria para enfrentar el paso hacia un nuevo modelo y los desafíos que nos presenta el desarrollo sustentable.

El informe del PNUD incursiona también en la realidad de la familia, constatando que tan sólo para un 15 % de los entrevistados la familia es «un lugar de amor», para un 24 % «un refugio frente a los problemas», mientras que para un 28 % la familia constituye «una fuente de tensiones y problemas» y, finalmente, para un 31 % las familias entrevistadas se revela como «una institución en crisis» (PNUD, 2002). Este preocupante panorama familiar constituye otra «zona oscura» del Chile actual.

En este contexto, caben las siguientes preguntas: ¿Cómo se integra y cohesionan la sociedad chilena? ¿Con la identidad en crisis, la familia desintegrada, el trabajo precario, el territorio fraccionado

por megaproyectos, la inseguridad e impotencia personal y la falta de adhesión a la política y a la democracia?

No se trata en absoluto de desmerecer los avances en materia de política económica y de mejoramiento de la infraestructura del país, así como de la reducción de los índices de pobreza experimentados bajo los gobiernos de la Concertación. Son logros importantes, pero hoy ya no son suficientes para asegurar el tránsito del país hacia un desarrollo más igualitario y sostenible.

La integración, si es que realmente existe, se ha dado en las últimas décadas mediante el consumo y la participación privada en la adquisición de bienes materiales y culturales. Este proceso de integración es, por lo tanto, gradual e inseguro, sujeto a los niveles de satisfacción con la participación en la oferta comercial diversificada y su sistema de créditos y formas de pago. En este sentido, Halpern (2002) afirma que «los nuevos ciudadanos tienden a agruparse en torno a pequeñas tribus y el consumo es una de las herramientas más poderosas de cohesión colectiva». De igual modo, Hopenhayn señala:

«Una novena paradoja que afecta a todos los grupos de edad, pero con mayor intensidad a los jóvenes, es la creciente desproporción entre consumo simbólico y consumo material. Por un lado, la ampliación del acceso de símbolos, mensajes, imágenes, información y conocimiento ha sido exponencial para los jóvenes en las últimas décadas, no solo por la expansión de la cobertura escolar, sino sobre todo por el aumento de consumo audiovisual y de conexión a redes virtuales» (Hopenhayn, 2005: 151).

Este autor analiza un conjunto de paradojas que marcan la realidad juvenil en América Latina: los jóvenes gozan de más acceso a la educación y menos acceso al trabajo; más acceso a la información y menos al poder; más destreza para la autonomía y menos posibilidades de realización; más cohesionados hacia adentro, pero más segmentados en grupos y más permeables hacia fuera; más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de él; creciente autodeterminación juvenil en contextos de precariedad y desmovilización juvenil. Estas paradojas se observan claramente en la realidad juvenil chilena.

Este nuevo sistema de integración pretende superar el viejo concepto de clase social, estableciendo una especie de chileno «natural» abstraído de su condición sociocultural. Funciona con una actividad política de baja intensidad, separada de la sociedad y consensuada entorno a las políticas macroeconómicas. Se trata, en definitiva, de una política desutopizada y pragmática, hacedora de cosas, en la medida que lo permitan los recursos fiscales. En realidad se trata de la *antipolítica*, de la que renuncia al cambio social.

Para que el consumo se transformase en un verdadero vehículo de cohesión social, el mercado tendría que democratizarse, lo que requeriría de una verdadera revolución social y política. Sin embargo, la tendencia actual apunta más bien a la concentración del ingreso, de la propiedad y del consumo. Por otra parte, el consumo es algo pasajero, factor causal de que «lo chileno se ha vuelto poco creíble», «que lo chileno no exista fuera de las experiencias, los triunfos y los fracasos cotidianos de los habitantes del país» y que «la identidad y la pertenencia que parece desvanecerse es la de un Chile largamente prometido y esperado, definido por una forma de relaciones sociales: integración e igualdad», como lo afirmaba el citado Informe del PNUD. La «inverosimilitud de lo chileno», que traba la sociabilidad y el vaciamiento de una identidad colectiva, impide que surja un verdadero proceso de integración y cohesión social que abra las puertas hacia un futuro con desarrollo e igualdad social.

Esta realidad también explica el desinterés de la clase política en la gente, y la escasa o nula participación que se le permite en los asuntos importantes que le atingen. La escasa adhesión al régimen democrático también encuentra su explicación en la carencia de un proyecto de país en el que creer y por el que luchar. Este problema no se superará mientras la política –los partidos– no retome el camino abandonado de las utopías, mientras no muestre estrategias nuevas de solución a los problemas de injusticia social, de integración, de igualdad, ambientales, de calidad de vida y de identidad nacional y regional.

Pese a lo anterior, observamos el surgimiento de una nueva ciudadanía. Se trata de un proceso no siempre perceptible, pero con señales claras de querer mostrar nuevos caminos de desarrollo social. Las señales en política están representadas por la cercanía ciudadana, la mayor capacidad y disposición a escuchar a las personas, y el

mayor sentido de justicia, de construcción de lazos, de comunidad y horizontalidad en las relaciones humanas que proponen los nuevos liderazgos femeninos.

La indiferencia, agresividad y racionalidad del mercado hacen surgir la necesidad de resignificar los valores de la vida, el respeto, la humildad, la solidaridad, la igualdad, la sinceridad y la justicia social. Probablemente sea esto lo que explique la revalorización de lo femenino en la vida social, cultural y política. Pensamos que estas señales anuncian importantes cambios en la sociedad chilena, todavía no previsible pero crecientemente visibles.

ESTADO-NACIÓN DILUIDO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN

El Estado-nación constituyó el fundamento territorial, jurídico, político, social y cultural de las sociedades modernas. A través de sus instituciones ha navegado –con muchas dificultades y diferencias regionales– el proyecto histórico de la modernidad y sus consiguientes procesos de modernización. Al interior de territorios delimitados, política y socialmente organizados, transcurriría el tránsito de la vida dependiente y alejada de la racionalidad soberana de ciudadanos ilustrados, democráticos y libres. Al menos este fue el sueño y proyecto utópico de la Ilustración. Los resultados visibles no son demasiado alentadores. Las fronteras han marcado enormes desigualdades e injusticias. No solamente fuertes guerras han ensombrecido el proyecto moderno, también hambrunas, represión y formas modernas de esclavitud se han interpuesto como barreras insuperables para alcanzar las mínimas condiciones de vida humana a miles de millones de personas en el mundo. El siglo XXI, mas allá de las discusiones posmodernistas o de posdesarrollo, se seguirá enfrentando a la miseria y subdesarrollo de mayoría de la población, en medio de crecientes conflictos socioétnicos y regionales, que harán uso de modalidades cada vez más radicales de confrontación.

El Estado-nación en América Latina, y en general en el llamado tercer mundo, constituyó –a la largo de su zigzagueante e intrincada historia– una especie de «muro de contención» de, por una parte, las

demandas populares por mayor participación en el progreso social y, por otra, de defensa precaria de los recursos naturales, necesarios para construir alguna semejanza u aproximación de país moderno o semi-moderno. Las naciones latinoamericanas –salvo las indígenas– no existían antes de la Conquista y, por lo tanto, fueron un producto directo de las Encomiendas, Virreinos y Capitanías hispano-portuguesas, consolidados posteriormente en los Estados autoritarios surgidos de los procesos de Independencia. Estos Estados construyeron las naciones a la fuerza, reprimiendo a los pueblos indígenas y frenando permanentemente las aspiraciones populares por mayor justicia y distribución de las riquezas. En muchos casos se frenaron también los afanes liberales y democráticos de la intelectualidad y de las capas medias progresistas de las sociedades. Esta historia de represiones y exclusiones aún no finaliza, entrando en el siglo XXI.

La relación entre economía, política y progreso social e individual han sido demasiado asimétrica en los Estados y sociedades latinoamericanas. Los Estados no han sido capaces de configurar plenamente las naciones, integrando a todos sus miembros, mediante la facilitación de oportunidades igualitarias para todos sus miembros. En este sentido, se constata que el proceso de globalización acelerado que actualmente se vive en el mundo ha sorprendido a nuestros países con enormes déficit –en todos los ámbitos de la convivencia social, de la actividad económica, política y cultural– dificultando y, en gran medida, vulnerabilizando aún más la entrada a los intersticios de la mundialización sin retorno.

La cultura política egoísta, dependiente, autoritaria y fuertemente paternalista impuesta y asumida por las clases dominantes latinoamericanas se ha transformado en un factor inhibitorio y negador de la integración social y del progreso para todos. Sin Ilustración ni proyectos propios de desarrollo, nuestras sociedades quedaron a la deriva de la historia, buscando –sin muchos éxitos– incorporarse a la modernidad ofreciendo sus recursos naturales y humanos, sin grandes aspiraciones ni esfuerzos transformadores propios. Hemos vendido o regalado nuestros recursos naturales para obtener tecnología, saber industrializado y, de esta manera, participar periféricamente del progreso de los países industrializados.

Cuando tuvimos Estado, éste fue burocrático, autoritario, inefi-

ciente, en muchos casos sobredimensionado y corrupto, como sucedió en diferentes países latinoamericanos. El Estado ha cumplido siempre a medias su papel histórico. Nunca se construyó, por ejemplo, un Estado de bienestar social propiamente tal en América Latina, a semejanza de los europeos. Países incluso ricos, como Argentina, no construyeron en sus momentos de apogeo económico un sistema social basado en la solidaridad intergeneracional –base del Estado de Bienestar Social europeo– que le hubiese evitado caer en niveles tan degradantes de miseria y hambre, como sucede actualmente.

El *Estado prebendario, clientelista* y represivo, heredado de la formación social colonial, impide el surgimiento de una racionalidad institucional profesionalizada, en el sentido weberiano. Impide el surgimiento de instituciones sólidas, con continuidad histórica e instituciones democráticas. Impide el surgimiento de ciudadanos provistos de derechos y deberes, con sentido de autorresponsabilidad y respeto a los demás. Las instituciones estatales se transformaron en lugares de repartición de favores, de manipulación de la voluntad ciudadana, en feudos personales de los políticos o partidos de turno. El Estado avanzó en resolver algunos problemas básicos: alfabetizar, crear escuelas y hospitales, urbanizar, construir infraestructura, organizar a parte de la población; avanzó incluso en fomentar la industrialización de centros urbanos –especialmente de las metrópolis–, pero estas tareas no se cumplieron a cabalidad. Hubo etapas importantes de apoyo al desarrollo –la llamada fase sustitutiva de importaciones, entre la década de los treinta y fines de los sesenta–, pero luego todo se deshizo, se deconstruyó violentamente, como consecuencia de la clausura o fin del desarrollo, de declarar, por muchos intelectuales y políticos, como agotada la vía de desarrollarse «hacia adentro».

Nuestros proyectos de desarrollo quedan siempre inconclusos. Se agotan, se declaran agotados u obsoletos. O se destruyen violentamente, dando paso a nuevos modelos, vinculados a una nueva división internacional de trabajo.

Las sociedades latinoamericanas no alcanzaron a desarrollarse satisfactoriamente «hacia adentro». La reforma ha sido siempre un problema. Siempre ha resultado difícil reformar las estructuras de las sociedades, sin provocar inmediatamente una reacción violenta de las clases dominantes y de los guardianes norteamericanos. Al

respecto, existen abundantes ejemplos de revoluciones fracasadas o abortadas en América Latina. Al fracasar o declararse fracasada una estrategia de desarrollo «hacia adentro», inmediatamente se mira «hacia fuera». Entonces, los países vuelcan todos sus esfuerzos en producir para el mercado internacional. Es lo que empezó a ocurrir a partir de comienzos de la década de los setenta, sin parar hasta hoy. Se abren las economías al mercado mundial. Se abren los recursos naturales, las actividades económicas, los servicios, el país en general, a las inversiones e intereses extranjeros. Crecer hacia afuera, reza el eslogan. Se piensa y se cree firmemente, por parte de las elites empresariales y políticas, pero también por una parte importante de los intelectuales y de la población, que ahora solo se puede vivir y progresar vendiendo hacia fuera, transformando en cosa exportable y vendible todo lo que sea posible.

Brasil representa probablemente otra cara del modelo latinoamericano, diferente en muchos aspectos. Un país que se ha industrializado, que ha reducido de manera importante la pobreza (20 millones de personas habrían salido de la pobreza durante los Gobiernos de Lula) y avanzado en la ampliación de la democracia, que invierte en educación, investigación, tecnología y en la formación profesional. Brasil se ha transformado, como consecuencia de su desarrollo económico, político, social y cultural, en un referente mundial, en un *país emergente* que, sin duda, está llamado a jugar un papel decisivo en América Latina y el mundo globalizado.

CRECER HACIA AFUERA Y DECONSTRUIR HACIA ADENTRO

Chile es el mejor ejemplo entre los países que creen que pueden crecer «hacia fuera». Es el prototipo y modelo de cómo es posible globalizarse exitosamente. Para ello se desarticuló la sociedad, reduciéndola a individuos desorganizados y atomizados; se privatizaron los recursos naturales y los servicios; el Estado mermó al máximo su tamaño, funciones y actividades regulatorias; los precios, tanto de los bienes como del trabajo, fueron liberados al mercado; la acción colectiva fue eliminada y sancionada, bajo el pretexto neoliberal de intromisión o distorsión del libre mercado. Por la misma razón los

sindicatos fueron destruidos, prohibidos y luego –en democracia– permitidos mientras sean pequeños y estén divididos y desarticulados (hoy existen más de 15.000 mini sindicatos). En este contexto las negociaciones colectivas no pueden funcionar, son una mera ficción jurídica. La flexibilidad laboral imperante consiste en dejar al trabajador «libre» frente al arbitrio del capitalista y flexible frente al salario, al contrato, a la extensión de la jornada (Chile tiene una de las jornadas laborales más extensas del mundo), a las posibilidades de despido, etc. El capital, por su parte, es fuerte, bien organizado y protegido en sus garantías, mientras la llamada sociedad civil es débil y el trabajo es precario, de escasa calidad y está desprotegido.

El mercado disuelve la sociedad en individuos consumidores, generando nuevos patrones culturales y sociales. El Estado neoliberal se reduce a lo mínimo, se desprende de toda forma de «intervencionismo» en la vida económica y reduce considerablemente sus funciones sociales, por lo tanto, ya no socializa, no crea valores ni cultura nacional, simplemente «deja hacer» a los privados y regula escasamente. Por lo mismo que tampoco construye nación. El Estado ya no media intereses *intrasociedad*, entre diferentes clases y capas sociales, más bien media mínimamente la propiedad y el uso de los recursos naturales y sociales del país frente a las multinacionales, dueñas de las riquezas, otrora nacionales. En este sentido, se podría sostener el *inicio del fin de los Estados-nación en América Latina*, proceso ya bastante avanzado en algunos países.

Por cierto existen aún los gobiernos nacionales, y cada país latinoamericano tiene el suyo. Pero estos gobiernos no tienen suficiente poder –y muchas veces, cuando lo tienen, no lo utilizan por falta de voluntad o de decisión– como para regir los destinos del país. En países privatizados los gobiernos carecen de los recursos para resolver los conflictos, incluso no cuentan con el personal idóneo o las instituciones adecuadas para encarar los problemas elementales que afectan a su población. Así, por ejemplo, el dramático problema de la pobreza y exclusión social, que se ha expandido masivamente en la mayoría de los países de América Latina en las últimas décadas, sigue creciendo sin que los gobiernos puedan hacer algo para frenar su crecimiento o avanzar en superarla. Mucho se habla del tema, es fuente de debates electorales, seminarios y discusiones internacion-

les, pero el asunto no se resuelve. Se señala incluso, sin demasiada fuerza ni insistencia, sobre la necesidad de distribuir la riqueza, de recuperar los niveles de distribución existentes en la década de los setenta, pero no se hace nada esencial que apunte a redistribuir. Por el contrario, el conservadurismo en boga –de derecha e izquierda– aconseja más bien bajar los impuestos, a redistribuir en un sentido inverso, es decir, a proporcionar mayores ingresos a los sectores de mejores ingresos, como lo demuestran las estadísticas en la mayoría de los países latinoamericanos.

Una y otra vez nos asaltan las preguntas: ¿Cuánto de Estado real nos queda? ¿Qué pueden realmente hacer los gobiernos? ¿Qué relación posible existe entre ciudadanos y Estado en América Latina? ¿Cuál es el futuro de nuestras instituciones? Con la expropiación o autoexpropiación de los recursos naturales, de las industrias y de los servicios, se ha procedido a expropiar al Estado y, por consiguiente, a debilitar el poder de gestión y decisión de los gobiernos. De manera que éstos han limitado al máximo sus funciones, quedándose sin poder ni voluntad para formular y llevar adelante programas de desarrollo propiamente nacionales.

Los gobiernos se limitan, política y técnicamente, a colocar los recursos del territorio en los nichos del mercado internacional. Unos tienen más éxito que otros en el cumplimiento de estos limitados objetivos. Cuando fracasan, colocan a su territorio y, por ende, a su población, en situaciones graves y perversas, en espirales de crisis y desmoronamiento institucional y descomposición social, como ocurrió en Argentina en la crisis de 2000 y 2001. Otros, como Chile, cuidan como «hueso santo» sus éxitos macroeconómicos –baja inflación y equilibrios fiscales– pero no avanzan en equidad, manteniendo enormes desequilibrios y una pésima distribución del ingreso. Se ignora que estos equilibrios macroeconómicos son frágiles, que, en definitiva, dependen también de la reacción de la población, la que experimenta importantes niveles de insatisfacción producto de las altas expectativas de consumo y participación frustradas.

La lógica neoliberal que recorre la mayoría de nuestros países latinoamericanos amenaza con erosionar su sentido e identidad. Desarrollarse «hacia afuera» significa externalizarse, desnacionalizarse y dar

la espalda a las obras, pensamientos, culturas y fuerzas que constituyeron los pilares fundamentales de las naciones modernas; significa especialmente abandonar los esfuerzos de inclusión y progreso que se anidaron en su seno durante los siglos XIX y XX. Significa, en el fondo, apostar a dejar la periferia para entrar al imperio sin rostro propio ni soberanía. La lógica neoliberal despoja a los países de alma y nación.

LA SOCIEDAD DE LOS NEGOCIOS Y EL ABSOLUTISMO DE LA COMPETITIVIDAD DESOLADA

En el centro de la sociedad y de las relaciones sociales está el negocio, constituyendo, junto a las relaciones comerciales, el fundamento de la sociedad. La contractualidad precaria, de corto, mediano o largo plazo, regula la vida cotidiana de los chilenos; la salud del cuerpo y del espíritu pasa por las leyes de oferta y demanda del mercado y la escolaridad se adquiere con recursos económicos o con créditos otorgados según la rentabilidad del capital humano.

Los medios de comunicación han jugado un importante papel en la difusión e incremento de los negocios. Los programas de TV se venden y tienen «éxito» de acuerdo al rating y solo se ve y se escucha lo que es rentable. Se ha producido una especie de cadena trófica entre las redes de la industria del consumo y los consumidores, cuya construcción retroalimentadora de flujos energéticos ha originado un proceso vertical/autoritario de colonización de la vida cotidiana de las personas.

Para que estos mecanismos funcionen casi automáticamente ha sido necesaria una verdadera transformación biocultural de los individuos, la que en Chile empezó a producirse a fines de la década de los setenta, una vez que se impuso por la fuerza el modelo económico neoliberal y empezó a tener éxito². Los economistas de la escuela de Chicago, conocidos como «Chicago-Boys», acuñaron en aquel momento el concepto «boom económico» para destacar las tasas positivas de crecimiento. En dicho contexto alabaron e implantaron

² Estas tendencias mercantilistas e individualistas actualmente presentes en la sociedad chilena y destacadas especialmente por los Estudios del PNUD, fueron observadas tempranamente, a comienzos de la década de los ochenta, por investigaciones realizadas en Alemania, por ejemplo en Rojas, Jorge (1986). *Die chilenischer Gewerkschaftsbewegung 1973-1984*. Alemania: Campus Verlag.

un mercado «purificado» o «libre» de presiones sociales e intervencionismo estatal. Al mismo tiempo proclamaron que, bajo el reinado del mercado, Chile llegaría a ser desarrollado en una década. Ya han transcurrido varias décadas sin que aún llegue el desarrollo.

La competitividad se ha transformado en una idea mágica del sistema económico y social. La competitividad decide sobre muchas cosas relacionadas, no solo con la economía y el trabajo, sino que también con el ámbito privado; en las posibilidades de encontrar o no trabajo, de mejorar o empeorar la remuneración; en la determinación del costo de los estudios universitarios según carrera profesional elegida; etc. Por lo mismo que se ha transformado en una verdadera *trampa*, útil para explicar éxitos y fracasos. Aquello que en la vida no resulta es responsabilidad de la competencia.

En la sociedad del mercado, que también ha llegado a la universidad y ha entrado a las aulas, el profesor es un mero «prestador de servicios». Para incrementar su valor debe competir por desarrollar proyectos, cuyos fondos son siempre escasos. La calidad no es garantía de triunfo, ya sea por la limitación de los recursos o por la falta de transparencia de los procedimientos que rigen los concursos. Esta realidad frustra, pero igual se sigue concursando, por si un día funciona la lógica errática del «chorreo». Lo que falta es que los muchos proyectos diseminados se transformen en un gran proyecto de apoyo al desarrollo de las universidades y del quehacer académico. Calidad e inteligencia existen con abundancia en las universidades, el problema es la escasez de recursos destinados investigar, innovar, crear ciencia y tecnología. Como ya se acostumbra a decir en nuestro país, aquí también sufrimos problemas de equidad y de mala distribución de los ingresos. La privatización de los aranceles universitarios significa privatizar la enseñanza y los académicos, privatizando el conocimiento, la ciencia y tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Vivimos una especie de absolutismo de la competencia, traducida en la lucha de todos contra todos. Este tipo de competencia no incrementa necesariamente la productividad, ni mejora las condiciones de vida de la población. En esta lucha todo está permitido: el robo de ideas, la explotación, la precarización del contratado, la violencia y el atropello permanente al otro. El respeto, tan lúcidamente analizado

por Sennett³, es algo que falta en la sociedad chilena. Los negocios no conocen el respeto ni moral alguna y la competencia neoliberal destruye el respeto y la decencia humana. La sociedad neoliberal se constituye a partir del egoísmo, la indiferencia, el engaño y la lucha individual desolada.

Por lo demás, una tal competencia no existe. Es un constructo más ideológico que real. En efecto, la falta de control y de aplicación de la llamada ley antimonopolios se ha traducido en una creciente concentración de la riqueza y de la actividad económica. Un reciente estudio indica, por ejemplo, que cerca del 60 % de las ventas en supermercados en Chile lo comercializan dos grandes cadenas (D&S/Lider, del Grupo Ibáñez [hoy de la estadounidense Walmart] y Cencosud/Jumbo, de Horst Paulmann); tres AFP controlan cerca del 73 % del total de los fondos de pensiones (Provida, Habitat y Cuprum); los cuatro mayores banco concentran en 65,5% del mercado financiero (Banco Santander Santiago, Banco de Chile, Banco Estado, Banco de Crédito e Inversiones), LAN concentra cerca del 80% del tráfico aéreo nacional; tres cadenas de farmacias controlan prácticamente el 100% de la venta de medicamentos (Salcobrand, Fasa y Cruz Verde); Copec, del grupo Angelini, controla el 53 % del mercado de combustible; Telefónica CTC (de capitales españoles) controla el 75,4 % de la telefonía residencial; la telefonía móvil esta controlada en un 100% por tres empresas (Movistar, Entel y Smartcom [hoy Claro]) (Sáez Rojas, 2005). Estos procesos de concentración se observan en otros ámbitos de la producción y, en general, de la actividad económica nacional, como en el sector pesquero, forestal, energético, etc.

Voces de alerta contra la concentración económica surgen incluso desde el propio empresariado chileno. Es el caso del empresario Felipe Lamarca, ex presidente de la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril),

³ «La falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo, puede adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se le ve como un ser humano integral cuya presencia importa. Cuando la sociedad trata de esta manera a las masas y solo destaca a un pequeño número de individuos como objeto de reconocimiento, la consecuencia es la escasez de respeto, como si no hubiera suficiente cantidad de esta preciosa sustancia para todos. Al igual que muchas hambrunas, esta escasez es obra humana; a diferencia del alimento, el respeto no cuesta nada. Entonces, ¿por qué habría de escasear?» Sennett (2003: 17).

quien hace algunos años generó fuertes polémicas en la derecha económica y política con sus declaraciones: sostenía la necesidad de “corregir el modelo» económico imperante en Chile.

«Cuáles son los efectos de la concentración? Primero, se restringe fuertemente la competencia y sus virtudes. Y segundo, se dificulta el empleo. Recientemente se publicó que el 1 % de las empresas tenían el 80 % de las ventas, y que las Pymes daban el 80 % del empleo. Tenemos entonces consumidores con más miedo y menos dinero. Ambas cosas no son buenos síntomas. Hoy nos encontramos con una actividad económica muy concentrada, donde los poderes son muy grandes: el poder de un productor grande contra uno chico, el poder de una empresa contra los consumidores, y de ésta con los proveedores, los trabajadores y los contratistas» (Felipe Lamarca. *Cómo podemos corregir el modelo. Qué Pasa* N° 1802. Santiago, 22 octubre 2005, pp. 10-14).

En el ámbito de la educación superior han proliferado las ofertas de carreras universitarias, sin que medien sistemas de control de calidad. En regiones o ciudades, lo normal es que, a parte de las 25 universidades tradicionales que pertenecen al Consejo de Rectores de Chile (ya de por sí más que suficientes para un país chico), muchas otras instituciones –llamadas universidades privadas– ofrecen las mismas carreras profesionales. La lucha por la captación del casi millón de estudiantes universitarios y de los varios miles que postulan año a año, se ha transformado en un lucrativo negocio. Como en otras actividades, aquí el negocio parte de la oferta, sin que existan mayores estudios de demanda. Simplemente se ofrece, si concurren suficientes interesados se sella el negocio, de lo contrario, la carrera no se abre y se deja a los jóvenes sin posibilidades de estudiar. Cuando funciona, los profesores laboran en condiciones de precariedad (sin contratos estables, a veces incluso sin oficinas para trabajar o atender estudiantes), los planes de estudio son mínimos (para ahorrar) y, sobre todo, gastan muchísimos recursos en marketing, para vender sus bien empaquetados productos universitarios. El consumidor ciudadano es encantado por tanta oferta, pero carece aún de derechos. Sin embargo, progresivamente aprende a imponerse en el mercado salvaje.

LA CALIDAD DESIGUAL DE LA EDUCACIÓN NEOLIBERAL

La reforma educacional impulsada por los gobiernos de la Concertación abarcó los niveles básico y medio. Pendiente quedó el tema de la calidad de la enseñanza, la que hoy depende de dar un giro fundamental: centrarse en el alumno. Esto, a su vez, requiere de una nueva concepción de la educación y de la implementación de programas de perfeccionamiento de los docentes, pasando de realizar cambios cuantitativos a cambios cualitativos: vincular la educación a las necesidades de realización creativa de los alumnos/as y al impulso innovador del desarrollo productivo, cultural y social del país y sus regiones. El ámbito universitario es todavía deficitario en cuanto a respaldo estatal y gubernamental. Cerca del 80 % de la nueva demanda por vacantes universitarias (también a centros e institutos de formación profesional) provienen de hogares pobres y de escasos recursos, que no están en condiciones de solventar gastos por pago de matrículas y, por lo tanto, dependen del apoyo estatal. El sistema de financiamiento ha hecho crisis, repercutiendo en la calidad de la formación universitaria.

Los signos de la crisis han sido visibles con las masivas movilizaciones y protestas estudiantiles ocurridas durante la **última década**, incluso apoyadas por académicos y algunas autoridades universitarias. Las protestas ocurren de año en año, siempre por las mismas causas. En el 2005 el motivo central fue el rechazo a la promulgación de una ley de financiamiento privado (mediante créditos) de la educación superior que, estando orientada a estudiantes de universidades no pertenecientes al Consejo de Rectores⁴, fue percibida, por la mayoría de los estudiantes y académicos, como la puerta de entrada hacia una total privatización de las universidades tradicionales. En su época, así lo expresaba un dirigente estudiantil universitario:

«El movimiento estudiantil hoy no es coyuntural. No es el déficit del fondo solidario, no es la Ley de Financiamiento contra lo que luchamos. Es contra la forma de concebir la

⁴ El Consejo de Rectores está compuesto por 25 universidades tradicionales, entre ellas: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Santa María, etc., las que reciben apoyo financiero parcial del Estado.

Educación Superior, que se entiende como un contrato entre privados» (Felipe Melo, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 2005).

La demanda por educación superior se ha expandido considerablemente en Chile. En los próximos años se superará el millón de estudiantes universitarios (incluidos los de los centros de formación técnica y de institutos profesionales) y ni el Gobierno ni la oposición de hace algunos años pensaban que fuese responsabilidad del Estado responder por esta expansión. Por su parte, la oferta no pública ha crecido, aspirando a contar con nuevos mecanismos privados de financiamiento de sus negocios universitarios, contando con un aval estatal en caso de no pago por parte de sus endeudados estudiantes. Efectivamente, políticas de financiamiento de la educación superior se basan en el principio de un «contrato entre privados», como lo destacaba Felipe Melo. Esta fórmula neoliberal choca con la dura realidad de la mala distribución del ingreso: la inmensa mayoría de los jóvenes que hoy ingresa a la universidad es de escasos recursos, mientras que las incertidumbres del mercado laboral no permiten garantizar una devolución de los préstamos.

La buena calidad de la educación es otro indicador fundamental de desarrollo. No obstante los esfuerzos realizados con la Reforma Educacional, el país adolece aún de *graves problemas de calidad educacional*, especialmente en el ámbito de la educación pública y del sistema educacional en general, como lo muestran todos los estudios internacionales (OCDE, 2004). Es difícil superar problemas de calidad que se arrastran por años sin dar una solución adecuada a problemas estructurales del sistema educativo, entre los cuales podemos mencionar: la postergación del magisterio, la controvertida municipalización de la educación, las fuertes diferencias en infraestructura y calidad pedagógica existentes entre escuelas municipales de diferentes comunas, así como su separación significativa con la educación privada. Estos problemas se agravan en la medida que nos alejamos de las grandes ciudades, que incursionamos en las regiones, en las comunas pobres y en zonas rurales. En tal sentido, no deberían existir diferencias sustanciales entre una escuela rural, una urbana de una ciudad media o las de la metrópoli de Santiago o de las regiones.

II. LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

Incluso cuando alcancemos los doce años de educación obligatoria, que sin duda será un avance, otros países nos habrán superado en calidad. Por lo demás, los retornos de la educación básica y media en nuestro país son mínimos. En efecto, un año adicional en enseñanza básica tiene un efecto marginal sobre los salarios de un 6%, en la enseñanza media es de un 10 %, mientras que en la educación superior alcanza a un 22 %. En cambio, en 1960 los retornos privados marginales a la educación básica y media oscilaban en torno al 10 y 20 %, respectivamente, mientras que el retorno privado universitario era de un 13 % (Beyer, 2000). En otras palabras, doce años de educación hoy no generan mayor movilidad social. Ello explica los problemas de deserción escolar, así como la fuerte aspiración juvenil por realizar estudios universitarios. Las sociedades actuales se definen como *sociedades del conocimiento*, lo que significa que la educación lo es todo. Se requiere, por lo tanto, muchos más conocimientos para agregar valor a nuestros productos, y a los ciudadanos.

Una importante discusión se ha desatado en Chile acerca de los reales impactos de la educación en el proceso de modernización social. José Joaquín Brunner, ex ministro y uno de los expertos educacionales más influyentes en el país, sostenía que «estamos invirtiendo a ciegas en Educación» y «el país no puede soportar más un número tan alto de escuelas inefectivas» (Brunner, 30 de mayo de 2003). En este mismo sentido, un estudio sobre capital humano en Chile concluía:

«Las habilidades, conocimientos y destrezas actuales que tienen los chilenos no alcanzan para que el país pueda seguir creciendo en el futuro al ritmo que se necesita. El volumen de capital humano, medido en años de escolaridad, es moderado, y se ha acumulado muy lentamente desde 1960 en adelante y está mal distribuido, tanto por edad y sexo de las personas, como por su condición socioeconómica. De hecho, la acumulación de este recurso en nuestro país ha sido muy lenta, ya que la escolarización promedio de la población ha crecido solo 0,7 años por década. A este ritmo, se necesitarían alrededor de 40 años para alcanzar el actual nivel de Corea y más de 50 años para equiparar a Nueva Zelanda» (Brunner y Elacqua, 2003).

Como ya se mencionó, el papel de la educación y de la escuela se ha deteriorado considerablemente en las últimas décadas y las

pequeñas reformas implementadas no han sido suficientes para hacer remontar su calidad. El sistema público de educación, que cubre un importante segmento de la demanda escolar, no está formando a los jóvenes con las capacidades y competencias necesarias para enfrentar los problemas y desafíos de la vida moderna y la globalización. Esta realidad ha sido constatada por diferentes investigaciones, incluidas algunas de comparación internacional. Uno de sus más preocupantes resultados indica que cerca del 90% de la población escolar chilena, finalmente, no logra posiciones de poder, al menos en el mundo corporativo. Según Rodríguez (2003), los líderes corporativos chilenos surgen de diez colegios privados pagados, de los cuales nueve se encuentran en Santiago y solo uno en Viña del Mar.

Pero la educación privada tampoco muestra rendimientos muy satisfactorios, como lo indican los resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza (SIMCE). Respecto a los resultados obtenidos con este instrumento de medición, Beyer señala:

«Los estudiantes de colegios privados contestan, en promedio, en la prueba de ciencias sociales del orden de 27 respuestas correctas netas sobre un máximo de 60. No nos puede extrañar, entonces, que en pruebas internacionales nuestros alumnos de altos recursos tengan un peor rendimiento que alumnos rusos o malayos de bajos recursos. Con este nivel de capital humano la diversificación de nuestras exportaciones y, por ende, el crecimiento del país, se hace cuesta arriba. El desafío es enorme y no da para mirar con complacencia el estado de nuestra educación... Se requiere, por tanto, un dinamismo en educación que ahora es inexistente. Si no se logra difícilmente crearemos el capital humano que necesitamos» (Beyer, 2003).

De no superarse estas carencias, el ciudadano chileno y el país en general no estarán en condiciones de enfrentar las necesidades de renovación tecnológica y de agregación de valor a sus productos que se le presentan, ni de insertarse de mejor manera en el mundo competitivo actual. Chile tendrá dificultades para responder a los enormes desafíos que le plantea la firma de los convenios con la Unión Europea, Corea y Estados Unidos, quedándose, de este modo, atrapado y atrasado en el intercambio desigual.

II. LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

«Este es el problema (la educación) más serio que tiene. Más aún, sin esto el modelo chileno no es sostenible. La dinámica del desarrollo chileno se sostiene en base de utilizar capacidades productivas y empresariales y de trabajar sobre recursos naturales. En estos momentos, si no hay un salto a una capacidad tecnológica y de procesamiento eficiente basado en conocimiento, en gestión de cualquier actividad, la competitividad de una economía como la china o la india o incluso la brasileña, va a ser imposible de alcanzar para Chile. Fue magnífica la oportunidad del salmón, pero hay que repetirlo con muchas cosas. El vino va muy bien, pero el australiano también y cuando el sudafricano consiga entrar al mercado... Chile necesita añadir valor a su producción y eso hoy día significa añadir conocimiento, tecnología y recursos humanos» (Castells, 2005).

El nicho internacional de la exportación de productos poco o nada elaborados se agotó para Chile. Los países con los que el país compite, especialmente los asiáticos, lo aventajan en la calidad e inversión en educación. Lo mismo sucede con otros países hacia donde suele orientar sus miradas, como Irlanda o Finlandia. Éstos se sitúan aún más lejos, en cuanto a la calidad de sus sistemas educacionales.

Durante los últimos años, en Chile se ha empezado a considerar el peso de las estructuras socioeconómicas y culturales en el rendimiento escolar. La escuela puede, efectivamente, contribuir a que un joven supere su situación de pobreza, como ocurre en países desarrollados. En décadas pasadas, con el modelo sustitutivo de importaciones, la escuela cumplió un papel activo como palanca de movilidad social, pero con el advenimiento del mercado y las privatizaciones la educación pública se deterioró y desvalorizó. El sistema público, en general, se empobreció, sus docentes y equipamientos también y la escuela pública, la educación para los pobres, perdió sentido y eficacia. La inversión pública se redujo drásticamente y, por lo mismo, su retorno disminuyó. El drama consiste en que a esta escuela pública empobrecida (incluida la particular subvencionada) asiste más del 90 % de los niños y jóvenes chilenos.

Lo anterior nos plantea un enorme desafío: comprender el proceso educativo en un sentido más amplio y en el cual, entre otros aspectos, la familia juega un rol fundamental. En esta perspectiva,

el nivel educacional de los padres, el tiempo que están los padres en la casa durante los días de trabajo, los libros y revistas de lectura presentes o no en el hogar, la estructura del núcleo familiar y la condición socio-económica de los hogares, son factores que contribuyen a lograr mayor calidad en educación (Casassus, 2003). Por lo tanto, mejorar la calidad de la educación pasa necesariamente por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, y por avanzar en forma decisiva en la superación de los problemas de desigualdad social.

PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

El tema ambiental se encuentra actualmente en el centro del debate nacional y regional. El Informe de la OCDE sobre el desempeño ambiental chileno destaca algunos progresos logrados en políticas ambientales (recordemos que bajo la dictadura militar no hubo política ambiental), pero al mismo tiempo define un conjunto de problemas y deficiencias que deben ser rápidamente enfrentadas y resueltas.

La organización internacional propuso al Gobierno cincuenta y dos medidas para hacer compatible la actividad económica con la protección de los ecosistemas y el medio ambiente. Ellas se refieren al perfeccionamiento de las regulaciones, fortalecimiento de la institucionalidad, cuidado y protección de los ecosistemas, definición de indicadores ambientales, inclusión de lo ambiental en las políticas económicas y ampliación de la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, y a la necesidad de instaurar una «democracia ambiental»⁵.

Nuestros problemas ambientales son el resultado de la implantación de una política económica neoliberal, basada en la desregulación del uso de los recursos naturales y humanos. Esta práctica ha generado graves problemas ambientales, como el ocurrido en Valdivia

⁵ La OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) realizó una evaluación de las políticas e instituciones ambientales de Chile entre 1990 y 2004, a petición del Gobierno chileno. Este informe constituye un hito importante en la corta historia ambiental del país. Al poco tiempo de su emisión surgió el escándalo ambiental de la planta CELCO, en Valdivia.

con el complejo celulosa CELCO⁶. Este caso es un buen ejemplo de la precariedad ambiental en Chile; refleja, por una parte, lo insuficiente de las normas y de la institucionalidad ambiental que autoriza la instalación de una empresa en las cercanías de un santuario de la naturaleza (Río Cruces) y, por otra, la irresponsabilidad ambiental de la empresa de situarse en tal lugar y no controlar sus emisiones tóxicas. El resultado ha sido la muerte y la emigración de varios miles de cisnes de cuello negro debido a la desaparición del lucheillo, su alimento natural, como consecuencia de las sustancias tóxicas emanadas de la producción de celulosa. Las protestas ciudadanas, junto a graves errores judiciales cometidos por la empresa, obligaron al Gobierno de la época (Ricardo Lagos) a cerrarla temporalmente.

Otro conflicto emblemático, por estar involucrada otra empresa transnacional, es el proyecto Pascua Lama, ubicado en la Tercera Región. La empresa canadiense Barrick Gold Co., dedicada a la extracción de oro en el mundo, planifica invertir cerca de US \$ 1.500 millones para explotar, durante veinte años, cerca de 17 millones de onza de oro en la Cordillera de los Andes (chilena y argentina). Para ello removerá glaciares provocando graves impactos ambientales, los que afectarán al ecosistema y al productivo valle del Huasco que hoy tiene sus ríos limpios y el aire libre de contaminación. La Comisión Nacional Ambiental (CONAMA) entregó un Informe de Impacto Ambiental, en el que se consignan el efecto de 48.000 toneladas diarias de material removido para la construcción de la mina, la contaminación con material particulado, las 16.000 toneladas diarias de cianuro, 80.000 kilos diarios de explosivos, así como los cambios culturales que dicha explotación implicará para las comunidades locales (Cabalín, 2005).

A igual que en Valdivia, donde se constituyó el movimiento «Acción por los Cisnes», en el norte se constituyó el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, y un Frente Ciudadano anti-Pascua Lama, para defender el valle promocionado como «El jardín de Atacama» por

⁶ La planta CELCO Valdivia es un macroproyecto de US \$ 1.045 millones cuyo objetivo es producir 550 toneladas anuales de celulosa Kraft blanqueada de pino radiata y eucalipto. Un estudio de la Universidad Austral de Valdivia estableció que la mortalidad y emigración de los cisnes observada está relacionada a la disminución y desaparición de su alimento primario, el lucheillo, y como resultado de la acumulación de tóxicos en sus tejidos debido a la magnitud del caudal del afluente y la diversidad de químicos de los riles de CELCO (Castillo, 2005).

el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

Estas son las empresas que han marcado el desarrollo económico del país. Por lo general, realizan grandes inversiones, pero se las arreglan para no pagar impuestos. El mejor ejemplo lo constituyen las empresas mineras del cobre: de 47 privadas en pleno funcionamiento, 42 prácticamente no pagan impuestos. No pagan, no porque la ley se los permita, sino porque conocen muy bien los intersticios y excepciones de la legislación minera, que les permite descontar gran parte de sus ganancias y, de esta manera, disminuir su carga tributaria. Luego de muchos años de discusión sobre estas regalías a la gran minería del cobre, recién en el 2005 el Parlamento aprobó aplicar una ley mínima de Royalty a la minería, para fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y las regiones mineras. Algo parecido sucede con el comportamiento de otras grandes empresas: realizan un escaso aporte al desarrollo de las regiones y del país, mientras explotan recursos no renovables y contaminan.

Por lo general, las comunidades locales –sus formas de producción, tradiciones, culturas y formas de vida– se han visto fuertemente afectadas por la instalación de diferentes megaproyectos a lo largo del país. Lo mismo sucede con los grandes proyectos de infraestructura y vialidad, que a menudo dividen y aíslan a las comunidades.

En el Chile del siglo XXI, los conflictos de intereses en torno al uso sustentable de los recursos y del territorio, la disminución de la contaminación y el control de las emisiones, la calidad de vida y la necesidad de la planificación ambiental estratégica, marcan y marcarán fuertemente la agenda política del desarrollo nacional y de sus regiones, así como las movilizaciones sociales y políticas.

FALTA DE VOLUNTAD DE CAMBIO

Toda vez que algo no funciona, no se hace o se manifiestan opiniones pesimistas sobre una determinada situación negativa –propias de la cultura chilena–, se argumenta «falta la voluntad», política o personal, es decir, no se quiere hacer. En realidad falta voluntad para hacer las cosas y resolver problemas. Falta voluntad de cambio. Pero también inciden el temor, los resabios autoritarios, la marginalidad

de quien disfruta una pequeña porción de poder, legalismos absurdos, inseguridades, indiferencia, prejuicios, discriminaciones, etc. También hay carencia de audacia, falta de deseo de salir adelante y de voluntad de romper con la política de los pequeños pasos. Falta generosidad para dar grandes pasos; generosidad para desprenderse de la riqueza y conceder bienestar a millones de pobres; generosidad para dar oportunidades reales a los jóvenes que quieren y merecen estudiar y a quienes el país los necesita formados, como profesionales, investigadores, técnicos o trabajadores calificados.

Falta generosidad de quienes, en forma directa o indirecta, están relacionados con el poder, de quienes circulan en sus esferas y, hablan de participación, pero no la practican. Falta desprendimiento desinteresado, solidaridad.

«En la sociedad, el ataque a los males de la desigualdad no puede por sí mismo producir respeto mutuo. En la sociedad, y particularmente en el Estado de bienestar, lo esencial del problema que abordamos es cómo los fuertes pueden practicar el respeto por los destinados a permanecer débiles» (Sennett, 2003: 256).

Es sabido que los empresarios chilenos no califican a sus trabajadores por egoísmo, pues temen que cuando sepan más se vayan de la empresa o les exijan mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. Aquí también hace falta la generosidad. A los profesores de la enseñanza media se les exige evaluarse –igual que a los universitarios–, pero se les niegan los recursos para perfeccionarse. Los profesores universitarios deben obtener grados académicos superiores –lo que es lógico y muy pertinente–, pero se les niega el tiempo y los recursos para lograrlos. A pesar de ello, muchos lo hacen. A los pobres se les exigen proyectos para superar su situación, pero, en su condición de tales no pueden hacerlo, permaneciendo pobres. Y otros le hacen sus proyectos. Los que disfrutan de suficientes recursos no necesitan hacerlo ni están expuestos a concursos permanentes; en cambio, a los pobres no se les proporcionan las herramientas eficientes para salir dignamente de su condición de excluido. Últimamente –incluso– se ha descubierto su capital social, pero el componente más importante aún permanece olvidado: su subjetividad, su carácter de actor y

ciudadano con plenos derechos. El abandono en que queda la población cada vez que se produce un desastre natural, como sucedió con el terremoto en el norte del país el 2005 y recientemente en las regiones del Maule y Bío-bío, muestra precisamente el otro «rostro» del Chile del siglo XXI: el que está en el suelo y que se cae a pedazos, el país de adobe, sin rascacielos, sin caminos ni agua, a pesar de las enormes riquezas e inversiones mineras. Es el Chile de las pequeñas comunidades abandonadas a su suerte, de los que por generaciones siempre se han reproducido como pobres. Son los que sobreviven gracias a la solidaridad de ellos mismos.

Falta voluntad política para resolver nuestros problemas sociales más importantes, para poner fin al elitismo y para superar el pensamiento perverso e ingenuo de que algunos son «mejores» y de que el resto simplemente «no quiere» o «no puede», fracasando en el mercado de oportunidades.

La generosidad tiene que ver también con la participación, mientras que la concepción tecnoburocrática imperante en el aparato estatal y en la política niega la participación ciudadana, no cree en el ciudadano moderno. La participación ciudadana puede impedir preventivamente muchos conflictos y, al mismo tiempo, resolver democráticamente los de fondo, ya que muchas veces se traducen en mejores alternativas de solución de un problema. La generosidad y participación son imprescindibles para construir un orden social justo, y para dar sustento, vitalidad y sentido de pertenencia a una comunidad.

LUCHA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA, POR SÍ MISMO Y EL RESPETO

La gestión democrática en el mundo moderno juega un papel decisivo: implica poner nuevos acentos, introducir nuevas iniciativas, motivar al conjunto de la comunidad. Los tiempos de la gestión autoritaria o del líder que reparte beneficios ya quedaron atrás: es improductivo, inconducente y antidemocrático. Lo mismo ocurre con el que promete y no cumple. Hoy las instituciones requieren de una gestión democrática, que escuche y respete a los miembros e instancias de la institución. En este sentido, es necesario poner fin a la «feudalización»

neoliberal de la sociedad, superar la nefasta cultura dominante de la incondicionalidad y de la mal entendida lealtad, responsable en gran parte de los altos niveles de desconfianza existentes en la sociedad chilena. Restaurar la confianza es imprescindible para incrementar la investigación, creatividad y el trabajo en equipo. Para generar confianza se requiere sobre todo consecuencia de los actos, hacer de la promesa realidad y respetar las capacidades de cada persona.

Lo mismo ha ocurrido con la participación ciudadana. En las políticas oficiales se declara la voluntad de fortalecer la sociedad civil y de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y privados, trátase de estudios sobre impacto ambiental de proyectos de inversión, en programas de renovación urbana y construcción de infraestructura, en la aprobación de planes reguladores comunales e intercomunales, en la gestión territorial, en las políticas de salud y educación, etc. Lamentablemente estas declaraciones no siempre se llevan a la práctica y, muchas veces, terminan en conflictos abiertos con la comunidad. De esta manera, la participación ciudadana se produce, en muchos casos, gracias al surgimiento de conflictos por participar. La no-participación conduce a la participación. Ello se explica por la falta de una cultura de participación ciudadana. En algunos casos, las tensiones sociales, la presión ciudadana vence y cambia el curso de los proyectos, mejorando su diseño y calidad. Esto significa que el tema del fortalecimiento de la sociedad civil y fomento de la participación ciudadana es central en la construcción democrática de la sociedad.

La participación ciudadana es esencial para desarrollar el país, para llenar la mitad «vacía» del vaso. El capitalismo neoliberal parece no ser compatible con formas avanzadas de democracia. Pero, ¿aceptamos un capitalismo sin democracia? No es aceptable. Las nuevas formas competitivas de producción y gestión recurren hoy a modalidades más amplias de democracia. Ello compete, como desafío, al conjunto de la sociedad. Queremos construir y vivir en la democracia de la solidaridad. Sin duda alguna, los Gobiernos deben regirse por normas y valores éticos-políticos de inclusión y participación democrática, en la resolución de los asuntos relevantes de la vida económica, política, social y cultural.

La democracia constituye la modalidad más eficiente de avan-

zar hacia el desarrollo y la libertad de las personas. Constituye una pluralidad de oportunidades y posibilidades de realización del género humano moderno. La democracia puede mejorar la gestión de los recursos humanos, administrativos y de la infraestructura. La democracia puede mejorar la investigación, la gestión pedagógica de las clases en las aulas y la productividad general del quehacer académico. La democracia no debe entenderse como algo meramente formal, sino sustantivo.

«El respeto es un comportamiento expresivo. Esto quiere decir que tratar a los demás con respeto no es algo que simplemente ocurra sin más, ni siquiera con la mejor voluntad del mundo; transmitir respeto es encontrar las palabras y los gestos que permitan al otro no sólo sentirlo, sino sentirlo con convicción» (Sennett, 2003: 213).

El respeto es algo que falta mucho en nuestra sociedad. Las quejas por el maltrato son frecuentes, como lo consigna el Informe del PNUD, anteriormente comentado. El mercado salvaje no tiene compasión con los sentimientos ni las necesidades humanas. En este sentido, puede concluirse que la sociedad neoliberal es cruel, deshumanizada y carente de respeto, especialmente para aquellos que sobreviven en las cuerdas flojas de la flexibilidad y en los márgenes de la competitividad sin reglas.

El respeto es la base para que se desarrolle la ciudadanía libre y democrática. La actual lucha por la democracia es una lucha por la ciudadanía, por adquirir derechos ciudadanos, por ser reconocido como persona independiente y soberana. La ciudadanía no se construye desde los partidos ni desde las instituciones, sino en las interrelaciones humanas, en la relación del yo consigo mismo, con el tú y el nosotros. Ser ciudadano de sí mismo es asumir el propio ser en el contexto complejo del entramado social local y global.

III. POLÍTICA SOCIAL EN TIEMPOS NEOLIBERALES: PASIVOS SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA

LOS SUEÑOS DE LA SOCIEDAD

CHILE HA SOÑADO SIEMPRE con llegar a ser un país desarrollado. Hemos tratado de desarrollarnos creciendo «*hacia fuera*», exportando materias primas; luego, cuando esta estrategia entró en crisis, intentamos crecer «*hacia adentro*», industrializándonos. En aquel entonces soñamos con la elaboración, con agregar valor a nuestros productos y distribuir la riqueza. Incluso pensamos que Chile podría llegar a ser un país más democrático e igualitario, un país solidario con cobertura educacional, sanitaria y social para la mayoría de la población. Aspiramos a parecernos a Europa, construyendo un Estado de bienestar periférico. Aspiramos a eliminar las causas estructurales que engendraban desigualdades y conflictos sociales agudos. El desenlace de esta historia –el golpe militar de 1973– es conocido. En el siglo XXI el sueño del desarrollo sigue vigente como el tránsito o el retorno al tronco de su huella histórica.

TRANSFORMACIONES CON DESIGUALDAD

El violento desmantelamiento estatal y la destrucción del sistema social público, ocurrido a partir de 1973, entroncó, en la década de los ochenta, con la globalización de la economía chilena. «Globalizarse» fue la consigna máxima de los economistas neoliberales quienes, bajo la mano de hierro de la dictadura militar, aplicaron sus políticas de ajuste estructural, externalizando la economía y el país. A partir de la década de los noventa, y hasta nuestros días, en democracia imperfecta, se ha sentido claramente la falta de Estado, la desnacio-

nalización del país, la fuerte presencia del capital internacional, la inequidad y los problemas de identidad que tenemos los chilenos.

La ausencia de Estado se observa en la falta de regulación y el aumento de los conflictos por el uso de los recursos, la mala calidad de la educación y la pésima distribución de la riqueza. Existe una gran incapacidad estatal para resolver los problemas más acuciantes que afectan a la sociedad chilena, pues carece de regulaciones adecuadas, de funcionarios, de competencias y de recursos suficientes para resolver problemas. En una sociedad en la que los privados controlan el 80% de la riqueza, el Estado tiene una existencia casi simbólica, manteniendo un fuerte poder desorganizador de la sociedad civil y reconstituyente del gran capital y sus lazos internacionales. Las transformaciones mundiales que experimenta el capitalismo amenazan el corazón mismo de los Estado-nación, generando desigualdades entre países ricos y pobres y al interior de las diferentes sociedades y grupos humanos que habitan en el planeta. Estos procesos de concentración ilimitada y perversa de la riqueza erosionan los ecosistemas, los sistemas democráticos y desestabilizan regiones y las relaciones internacionales.

Bajo la dictadura el Estado se militariza, colocándose despóticamente al servicio de la reconstrucción de la burguesía y del empresariado. Para ello se reprime a la oposición y se despolitiza la sociedad. En el tránsito hacia la democracia se articula en torno al Estado una nueva élite político-administrativa que circula, rotativamente, desde las cúpulas de los partidos políticos hacia las administraciones de empresas privadas, y a quien le conviene el desarrollo de una transición lenta, ordenada y con escasa participación ciudadana.

La transformación implicó también una redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad civil. En el pasado la participación ciudadana tenía rasgos corporativos y se encauzaba a través del Estado y los partidos políticos. En la actualidad, los procesos de individualización y la mercantilización de las relaciones sociales han atomizado la sociedad, dejando al ciudadano más solo que nunca frente al poder del mercado y las instituciones.

Por su parte, los partidos políticos, otrora articuladores de intereses sociales y portadores de utopías, también han visto disminuidas sus esferas de acción, reduciéndose en su función a la de meros reparadores o compensadores de las demasías del mercado,

sin cuestionar el orden económico y social imperante ni proponer nuevas formas equitativas y sostenibles de convivencia social. Ello explica el desencanto ciudadano con la política, especialmente el de los jóvenes.

La economía chilena crece, pero la sociedad no se desarrolla. La gran tarea pendiente del desarrollo es la modernización de la sociedad. Mientras ello no ocurra, nuestra modernización se mantendrá trunca. Más aún, la no modernización de la sociedad puede frustrar el proyecto más amplio de modernización del país. El Gobierno de Michelle Bachelet representó, en cierto sentido, una esperanza de cambio, de inclusión social, de desarrollo humano, de cercanía ciudadana y de distribución más equitativa del ingreso. Pero esta esperanza se frustró.

Según datos de la Encuesta CASEN, la riqueza del país se concentra en el 1 % de la población. En efecto, las 40.000 familias chilenas que conforman este 1 % registran, en el 2003, un ingreso familiar que va desde los 5,4 millones de pesos mensuales hasta los 99 millones de pesos mensuales. Al comparar estas cifras con las de 1990, se constata que el ingreso promedio familiar de este segmento aumentó, de 6,6 millones de pesos mensuales a 10,2 millones mensuales. En la Encuesta CASEN de 1990 no aparecían familias con ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales, mientras que en la Encuesta de 2003 aparecen 5.773 familias en esta categoría. En 1990 el 1 % de la población más rica participaba de un 16,2 % de los ingresos totales, mientras que en 2003 incrementó su participación al 19 % de los ingresos totales (Castillo, 2006).

Las políticas de mercado, con escasa regulación, concentran la riqueza y aumentan las desigualdades sociales. Este nuevo segmento de ricos establece nuevos patrones de vida, donde el lujo no tiene límites. Hace 10 años una casa considerada grande tenía alrededor de 400 metros cuadrados. Hoy son 700 metros cuadrados, donde se incluye una serie de requerimientos nuevos: cuatro o cinco estacionamientos, sala de cine con butacas para diez o quince personas, sala de pool, jacuzzi en las terrazas, gimnasio, etc. En el sector oriente de Santiago, en San Damián, el Mirador de San Damián o en los altos de Los Trapenses, se construyen casas exclusivas para este club de nuevos ricos, que cuestan cerca de un millón de dólares. En este

sentido, puede destacarse también el hecho de que, en los últimos años, el número de helicópteros privados (cuestan entre US\$ 350 mil y US\$ 1 millón) creció en un 30 %, alcanzado a cerca de 150 dueños que, dado los problemas de contaminación acústica que generan a sus vecinos, hoy buscan construirse, en las cercanías de sus casas y oficinas, un helipuerto (Castillo, 2006).

Si bien es cierto que la pobreza se ha reducido considerablemente desde comienzos de la década de los noventa (de un 43 % a un 15 %), la distribución del ingreso sigue siendo negativa. Los segmentos de extrema pobreza evolucionan a pobres o menos pobres, mientras importantes segmentos de clase media son «incluidos» en nuevos intersticios de la pobreza moderna.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La influencia incontrarrestable –incluso de encantamiento momentáneo– del mercado en la política y sociedad ha terminado por sobreeconomizar el mundo de la vida y las interrelaciones sociales, mostrando al mismo tiempo las contradicciones del sistema al producir profundas asimetrías en el acceso a los bienes y servicios. Las privatizaciones fueron entendidas como la columna vertebral y el fin supremo de las políticas neoliberales. No sólo los individuos deberían actuar como personas individuales, sino que también sus servicios básicos deberían funcionar privadamente. De esa manera se buscaba dar una especie de golpe fundacional, hacer que los ciudadanos olvidaran su historia y su pasado, aceptando un nuevo orden social. Sin embargo, resulta difícil prescindir totalmente de la historia, de lo que la sociedad ha construido y avanzado social, cultural y políticamente. Casi irremediamente afloran las fallas estructurales del nuevo sistema y surgen también voces disidentes en la sociedad.

«Con las fallas de funcionamiento del mercado y los efectos secundarios disfuncionales de este mecanismo de regulación entra en quiebre también la ideología burguesa básica del intercambio equitativo. El reacoplamiento del sistema económico

al sistema político, que repolitiza en cierto modo las relaciones de producción, intensifica, por otra parte, la necesidad de legitimación: el aparato del Estado, que ya no se limita, como en el capitalismo liberal, a asegurar las condiciones generales de producción (en el sentido de las premisas de mantenimiento del proceso de reproducción), sino que interviene en ellas de manera activa, necesita de legitimación, al igual que el Estado precapitalista; pero ahora ya no existe la posibilidad de invocar el acervo de tradiciones, socavado y agotado en el curso del desarrollo capitalista. Además, por obra de los sistemas universalistas de valores de la ideología burguesa, los derechos civiles, y entre ellos los derechos a participar en las elecciones políticas, se han generalizado. Por eso solo en condiciones extraordinarias y transitorias es posible prescindir del mecanismo de sufragio universal para obtener legitimidad. El problema que ello plantea es resuelto mediante el sistema de democracia formal. La participación del ciudadano en los procesos de formación de la voluntad política, es decir, la democracia material, llevaría a la conciencia la contradicción entre una producción administrativamente socializada y un modo de apropiación y de empleo de la plusvalía que sigue siendo privado. Para que esa contradicción no sea tematizada, el sistema administrativo debe alcanzar suficiente autonomía respecto de la formación de la voluntad legitimante. Las instituciones y los procedimientos de la democracia formal han sido diseñados para que las decisiones del Gobierno puedan adoptarse con suficiente independencia de motivos definidos de los ciudadanos» (Habermas, 1995).

Precisamente las fallas de funcionamiento del mercado neoliberal criollo ponen en contradicción el discurso dominante de la burguesía –el paradigma del mercado como fuerza liberadora y realizadora de las personas– con la realidad de los productores individuales, que no logran acceder satisfactoriamente a los bienes producidos por ellos mismos. El modelo carece obviamente de niveles de igualdad y de participación ciudadana que le permitan funcionar con algún grado de legitimidad. Los enormes déficits democráticos imperantes hacen aún más visibles esta contradicción entre el discurso oficial y los pasivos sociales.

Características estructurales del modelo social

- Privatizaciones: cerca del 80% de la economía es privada, solo un 20 % es pública/estatal (hasta comienzos de la década de los setenta ocurría lo contrario).
- Municipalización y privatización de la educación, de la salud y del sistema de seguridad social: precarización de sus servicios.
- (In)Seguridad social. Sistema de pensiones basado en la capitalización individual (no intergeneracional como en países desarrollados): bajas pensiones, discontinuidad temporal del pago de cotizaciones, bajas remuneraciones que impedirán al trabajador obtener una pensión mínima.
- Privatización de la infraestructura vial (sistema de concesiones).
- Profundo proceso de desregulación de las actividades públicas y privadas.
- Adelgazamiento del Estado: disminución de funciones sociales y reguladoras.
- Mala distribución del ingreso: el 20 % de los hogares chilenos (el segmento más rico) percibe un 56,5 % del ingreso nacional; mientras que el 20% de los hogares más pobres solo participa de un 3,9 % del ingreso nacional. La relación entre hogares ricos y pobres es de 14: 1.
- Reducción significativa del trabajo permanente y de calidad: incremento de trabajos estacionarios, precarios y escasamente calificados.
- Debilitamiento y subordinación de los partidos políticos a las políticas de mercado y del empresariado.
- Desorganización, competencia salvaje e individualización de la sociedad.
- Pérdida de identidad colectiva de la población como consecuencia de las políticas radicales de mercado. Se diluye el Estado-nación.
- Debilitamiento de la sociedad civil: desorganización de los trabajadores, debilitamiento extremo de los sindicatos,

bajos niveles de organización social y escasa participación ciudadana.

- Se antepone la libertad individual a la sustentabilidad social.
- El mercado aparece como el principal mecanismo de regulación e integración social.
- Sistema político de baja intensidad y escasa participación ciudadana.
- Sociedad de masas o de individuos de baja subjetividad.
- Individuos flexibles y auto-emprendedores.
- Sociedad con fuertes problemas de depresión y potencial de agresividad y conflictividad.
- Desigualdades territoriales y regionales como consecuencia del exceso de centralismo.

Cambios positivos ocurridos durante la transición a la democracia

- Lento retorno democrático (a partir de 1990), aunque aún persiste una cultura autoritaria y modalidades no representativas en la política, como el sistema binominal.
- Modernización de la economía: crecimiento económico permanente y exitoso modelo exportador de nuevos productos.
- Modernización de la infraestructura del país: ampliación de redes viales y carreteras, modernización y construcción de nuevos puertos, ampliación de aeropuertos y desarrollo de un sistema de comunicación nacional y territorial.
- Ampliación cuantitativa del sistema educacional: incremento de la cobertura de educación preescolar, doce años de educación obligatoria y cerca de un millón de estudiantes universitarios (siete de cada diez estudiantes son los primeros de la familia en ingresar a la universidad).
- Reducción de la pobreza: de cerca de un 43 % (1987) a un 15 % (2010). Problema: ¿Cómo se define y estructura la pobreza? Muchos «incluidos» en otras categorías siguen

siendo pobres. La pobreza se reproduce y aprende en sociedad.

- Subsisten aún enormes carencias básicas en importantes segmentos de la sociedad, especialmente en niños, jóvenes, mujeres, tercera edad y población indígena.
- Avances en procesos de reforma institucional, como en Justicia y Gobierno digital.
- Mejoras relativas a la cobertura en salud: enfermedades catastróficas, atención gratuita a la tercera edad, etc.

El modelo de sociedad funciona aún con graves asimetrías y pasivos sociales basadas en principios neoliberales de capitalización individual, que, en algún momento, los ciudadanos pondrán en cuestionamiento.

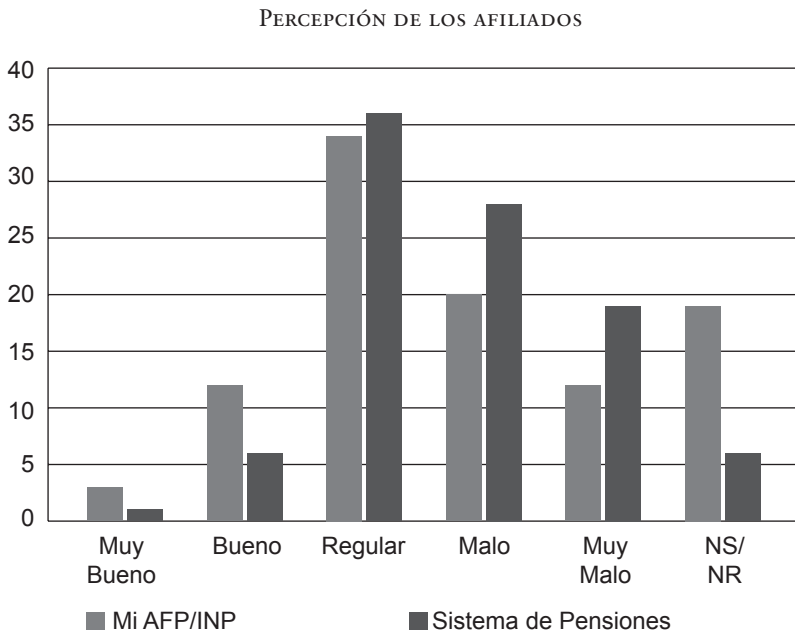
LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL COMO SISTEMA DE (IN)SEGURIDAD SOCIAL

El sistema público de seguridad social que prevaleció en Chile hasta fines de los setenta logró una importante cobertura para la mayoría de la población. Con la dictación de las primeras leyes sociales, en 1924, fue implementándose en forma progresiva un sistema de seguridad social basado en el financiamiento tripartito (aportes del trabajador, del empleador y del Estado), conforme a los convenios suscritos por Chile con la OIT. Basándose en el principio de la solidaridad, el Estado asume la administración de un sistema sin costos para el afiliado, que cubre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pensiones, indemnizaciones y desahucios, asignaciones familiares y cesantía. El sistema logró una cobertura del 76 % de la población activa, extendiéndose también a la familia (Zapatta, 1997). Estuvo vigente hasta 1980.

En el marco de la política económica neoliberal, la dictadura militar dictó, en noviembre de 1980, el Decreto Ley N° 3.500 que crea el nuevo sistema provisional de las Administradoras de Fondos

y Pensiones (AFP). «Es un sistema de ahorro obligatorio, personal e individual, con administración privada y competitiva de los fondos acumulados, subsidiado por el Estado» (Art. 1 y 2). «La obligatoriedad no rige para las Fuerzas Armadas y de Orden que continúan bajo el sistema antiguo en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, respectivamente» (Art. 96, inc. 1). El nuevo sistema se «basa en la capitalización individual (Art. 1)», antítesis del principio de la solidaridad, mediante una cotización obligatoria del trabajador que corresponde a un porcentaje de la remuneración imponible que fija la ley (10 %), más la cotización adicional establecida libremente por cada AFP. Estas administradoras son sociedades mercantiles con fines de lucro que pertenecen a holding financieros internos y a consorcios transnacionales. Las cotizaciones adicionales oscilan entre el 28,4 % y el 37,0 % de la remuneración imponible (Zapatta, 1997).

Respecto a los servicios que prestan, las AFP cuentan con una opinión bastante negativa desde sus afiliados, como lo demuestra el resultado de la siguiente encuesta:



Fuente: Mori (2006).

Otros estudios críticos han confirmado esta opinión respecto al sistema: Uthoff, 2001; Hardy, 2002; Valenzuela, 2006 y Fazio, 2006. Entre ellos aparecen también críticas y advertencias, dignas de destacar:

«Mi punto de partida es distinto. Hasta el momento no ha habido mucha gente que se haya jubilado con el sistema nuevo. Este va a cumplir 25 años y ahora viene la oleada de la gente que empieza a jubilar. O sea, recién ahora tenemos los datos y los diagnósticos para saber qué tan bien anda ese sistema y dónde están los vacíos. Por lo tanto, el diagnóstico que nos dice que este sistema tiene vacíos no se podía ver hace cinco o diez años; solo se empieza a ver en los últimos dos años, y apenas en este último año se crea conciencia de que hay que atacar el problema. ¿Cuál es el diagnóstico, para decirlo en una frase? Que hay mucha gente que va a quedar fuera del sistema, ya sea porque no gana lo suficiente, porque no alcanza a enterar una pensión mínima o porque no alcanza a cotizar los 20 años que son necesarios para tener derecho a una pensión mínima. Esos datos los tenemos hoy y corresponde ahora hincarle el diente» (Velasco, 2005. En entrevista a Mirko Macari).

Velasco sostiene con razón que «mucha gente va a quedar fuera del sistema», ya sea por lo bajo de sus remuneraciones o porque sus cotizaciones son mínimas y discontinuas en el tiempo. Otro experto en la materia, el abogado laborista Luis Eduardo Thayer, entrega un diagnóstico bastante certero de la dramática realidad que afecta a los afiliados al actual sistema de pensiones, como consecuencia de su privatización y de la aplicación del principio de la capitalización individual. A parecer, el sistema solo favorece al 20 % de los afiliados, mientras que el resto requerirá de fuerte apoyo subsidiario estatal para alcanzar una pensión mínima de vejez. Y habrá un segmento de la población que simplemente se quedará sin pensión, debiendo sobrellevar su vejez en medio de la pobreza.

«En primer lugar, me parece fundamental que se fortalezca un sistema de seguridad social. El seguro individual, tal como está, sirve solamente para quienes tienen mayor capacidad de ahorro, y eso no alcanza a más de un 20 % de las personas que cotizan en una AFP. El Estado va a tener

que asumir al otro 80 % de las personas que trabajan, que cotizan o no en el sistema provisional. Esas personas, con la legislación actual, van a tener una seguridad social sobre la base del pago de pensiones mínimas o asistenciales para quienes no alcanzan a cubrir la pensión mínima. Hay un 50 % de personas activas que trabajan y que cotizan ocasionalmente o no cotizan. Probablemente, no podrán acceder siquiera a una pensión mínima. Y del 50 % que cotiza debe haber un 30 % que gana muy poco y serán candidatos a pensiones mínimas y, por lo tanto, la seguridad social tiene que existir para el 80 % del total de afiliados».

«Los sistemas de seguridad social en general son temas difíciles de tocar. El antiguo sistema que existía en Chile no estaba quebrado, pero tenía muchas deficiencias y había cuarenta o más sistemas distintos que producían una gran desigualdad. Pero operaba con un sistema de reparto en que el Estado captaba esos recursos a través de las cajas de previsión y se comprometía a pagar determinadas pensiones. Entonces se buscó la fórmula de la capitalización individual y se impuso el DL 3.500. Este sistema lo he criticado desde el principio, porque en definitiva tiene una forma de pretender ser un sistema de seguridad social que no lo es, porque funciona sobre la base de la capitalización que cada persona hace de la plata que junte y de su expectativa de vida y de la de su grupo familiar. Por lo tanto, ¿qué tiene de social cuando se trata de dinero que yo podría manejar en una cuenta de ahorro, o en un banco o en otros instrumentos?» (Thayer, 2006).

Respondiendo a sus promesas electorales, el Gobierno de Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, presidido por el economista Mario Marcel¹.

«Y lo dije en mi campaña: si hay algo que va a distinguir a mi Gobierno, será la creación y consolidación de un gran sistema de protección social, que ampare a chilenas y chilenos desde la más tierna infancia hasta la vejez» (Bachelet, 2006).

¹ Mediante el Decreto N° 336, fechado el 17 de marzo de 2006, la ex presidenta Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional con el propósito de «establecer un sistema de protección social...». El Consejo estuvo compuesto por 15 miembros y su tarea consistió en realizar un diagnóstico del sistema provisional, para luego establecer propuestas. Tuvo un plazo de 3 meses para realizar un estudio que contara con participación ciudadana. En julio de 2006 entregó su Informe Final al Gobierno.

El mencionado Consejo, de acuerdo a lo establecido en su decreto de creación, realizó consultas ciudadanas y emitió un informe. A continuación se señalan algunos datos relevantes incluidos en él:

DIAGNÓSTICO. CAMBIOS EN EL ENTORNO ECONÓMICO
Y SOCIAL DEL SISTEMA PREVISIONAL 1980-2005

A. Datos demográficos y laborales 1980-2005	1980	2005
Expectativa de vida al nacer (1)		
Total Población	70,7	78,5
Hombres	67,4	75,5
Mujeres	74,2	81,5
Expectativa de sobre vida a los 60 años (1)		
Hombres	16,8	20,7
Mujeres	20,2	24,5
Tasa de participación laboral del grupo 15 a 24 años (2)		
Tasa de participación de la mujer en el mercado del trabajo (3)	38,7%(1982)	30,0%
	28,7%(1986)	37,2%
B. Características de los hogares (4)	1982	2002
Tamaño promedio de los hogares	4,5	3,6
Proporción de hogares monoparentales	7,1%	11,4%
Proporción de hogares encabezados por mujer	21,6%	31,5%
Tasa de dependencia para fines provisionales (5)	14,41%	17,41%

Fuente: Mario Marcel, Presidente CAPRP (Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional). Diagnóstico y Propuesta de Reforma Previsional. Informe Final. Julio 2006.

Proyecciones demográficas para los próximos 25 años

- Expectativa de vida al nacer aumentará en 5 años, hasta llegar, en 2025, a los 80 años.
- Esperanza de sobrevida de las mujeres a los 60 años se incrementará hasta 26 años.
- Aumentará la proporción de adultos mayores, y con ella, la dependencia previsional.
- Aumentará la cobertura de la educación superior, postergando la edad de entrada al mercado del trabajo.

- Aumentará la participación laboral femenina.
- Se seguirá reduciendo el tamaño de los hogares, lo que vuelve menos probable que las necesidades económicas se resuelvan mediante transferencias intrafamiliares.
- Existirá mayor demanda de autonomía de parte de los adultos mayores.
- Seguirá aumentando el ingreso per cápita, dejando atrás los parámetros fijados en términos absolutos (PMG, 60 UF).
- Fondos previsionales crecerán más rápido que la capacidad del sistema financiero doméstico para proporcionar instrumentos de inversión.

Fuente: Mario Marcel, Presidente CAPRP (Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional).

DISTRIBUCIÓN DE PENSIONADOS DE ACUERDO A SITUACIÓN PROYECTADA DE SUS PENSIONES AUTOFINANCIADAS (2020-2025)

Tipo de pensión	Todos	Hombres	Mujeres
Pensión siempre mayor que la Pensión Mínima (PM)	52%	67%	37%
Pensión con Garantía Estatal	2%	1%	2%
Pensión inferior a la PM, sin Garantía Estatal	46%	32%	61%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Berstein, Larraín y Pino (2006). Citado por Mario Marcel. Informe CAPRP.

Propuesta del Consejo Asesor: Derecho a la protección y la autonomía

- Nuevo pilar solidario pretende incorporar a todos los chilenos y chilenas al sistema previsional, ofreciendo mayor apoyo a los trabajadores de menores ingresos y con menor

capacidad de acumulación con el fin de proveer de una protección efectiva contra la pobreza en la vejez.

- Se estructura en base a una Pensión Básica Universal (PBU) para las personas que no obtengan ninguna pensión autofinanciada del sistema contributivo. El beneficio se mantendría para las personas con algún nivel de acumulación de fondos, reduciéndose en una proporción de la pensión que la persona es capaz de autofinanciar con los suyos.
- El beneficio abarcaría hasta las personas que logren una pensión autofinanciada de \$200.000, es decir, el 60 % de los mayores de 65 años.
- Se estima que el valor de la PBU para una persona sin fondos acumulados alcanzaría los \$ 75.000 mensuales, cifra 67 % mayor que el ingreso personal de pobreza y equivalente al 68 % del actual salario mínimo.

Objetivos de la Propuesta

- Universalizar la cobertura del sistema previsional.
- Elevar la tasa de reemplazo de las pensiones de vejez contributivas hasta niveles similares a los de países de mayor desarrollo.
- Eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, generando beneficios mínimos universales superiores al ingreso per capita de pobreza.
- Reducir la dispersión de tasas de reemplazo: actualmente existe una gran variabilidad como producto de las diferencias en densidad de las cotizaciones y aportes y la debilidad de la garantía estatal.
- Sostener los logros en el tiempo.
- Estructurar un pilar solidario fuerte e integrado. Un pilar solidario es un soporte fundamental de cualquier sistema previsional que aspire a lograr altos estándares de protección, equidad y cobertura. Las propuestas del Consejo demandan recursos fiscales adicionales equivalentes al

1 % del PIB en el año 2025, lo que implica duplicar los compromisos fiscales que actualmente se proyectan para financiar las pensiones mínimas y asistenciales.

- Elevar la densidad de cotizaciones al sistema contributivo en 10 puntos: de 51 a 61 % en un plazo de 5 a 10 años.
- Intensificar la competencia en base a precios en la industria de servicios previsionales.
- Mejorar la gestión de riesgo financiero y aumentar el retorno de los aportes del trabajador.
- Fortalecer el pilar voluntario.
- Elevar la transparencia y la predictibilidad del sistema.

Fuente: Resumen Ejecutivo del Informe del Consejo Asesor.

Como pudo observarse, el sistema previsional presenta enormes déficits estructurales. La pobreza y marginalidad pasan precisamente por la precariedad y vulnerabilidad de un sistema de protección social basado en la capitalización individual, que deja los complejos problemas de la vejez dependiendo del aporte individual y de los manejos financieros realizados por los empresarios de las AFP. De la resolución de estos apremiantes problemas dependen los niveles de inclusión, cohesión social y calidad de vida que pueda alcanzar la sociedad chilena. Por lo tanto, del éxito y los niveles de profundidad que logre la reforma depende la paz social.

El 2008 se inició la implementación progresiva de la Reforma Previsional, que busca complementar el sistema de capitalización individual. Para tal efecto se creó el Consejo Consultivo Previsional, encargado de asesorar a los ministros de Hacienda y del Trabajo en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS). El SPS considera la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS), orientada a las personas pertenecientes al 60 % de la población más pobre que no posee ningún tipo de pensión. El año 2010 la PBS alcanzó a un monto mensual de \$ 78.449, el que se reajusta anualmente según variación del IPC (el año 2008 fue de \$ 60.000). Además, el SPS contempla la existencia del Aporte Previsional Solidario (APS), destinado a las personas pertenecientes 60 % más pobre cuya pensión autofinanciada

sea inferior a \$ 255.000 mensuales. A fines de 2010 el Sistema de Pensiones Solidarias habría atendido a 642.359 personas, tanto por vejez como por invalidez.

Según un informe elaborado por el Consejo Consultivo de Previsión, se prevé un sostenido aumento de la cobertura de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez e invalidez que, en un horizonte de quince años, incorporaría aproximadamente a 850.000 nuevos beneficiarios con un costo fiscal superior a los \$ 2,1 billones, el triple de lo desembolsado durante 2010 (Valenzuela, 2011).

La reforma previsional introducida por el Gobierno de Bachelet produjo un alivio en los sectores más pobres y vulnerables de la población, pero los montos establecidos para las pensiones básicas son bajos, y su implementación, lenta en el tiempo (el APS se completará recién el 2025).

La calidad de vida en una sociedad moderna depende también del curso de la vida en la fase postrabajo. Tomando en cuenta que la esperanza de vida se ha incrementado considerablemente en la sociedad chilena –tanto en la población masculina como femenina–, las posibilidades de seguir disfrutando de la vida, de permanecer activo y poder interactuar dignamente en las redes familiares y sociales, depende en gran medida de la seguridad económica que le proporcione al pensionado el sistema de previsión social. Un sistema individual de previsión como el aquí expuesto no garantiza condiciones mínimas de calidad de vida para la mayoría de la población. Y el individualismo que impregna también la vida familiar no contribuye a mejorar las condiciones existenciales de estas personas, algunas de ellas simplemente abandonadas a su suerte por sus seres más cercanos, víctimas de engaños y de oscuros negocios.

De allí la necesidad de universalizar la cobertura del sistema previsional, garantizando condiciones dignas de vida y protegiendo realmente a las personas frente a situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Para ello, el sistema debe necesariamente estar basado en la aplicación de principios redistributivos, equitativos y de solidaridad intergeneracional.

IV. EL MOVIMIENTO PINGÜINO: POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y LA IGUALDAD

HIJOS DEL PROGRESO MAL DISTRIBUIDO

LOS SECUNDARIOS TIENEN RAZÓN cuando hablan de mercantilización y crisis de la educación. Así lo ven también los estudiantes universitarios, sus padres y sus profesores. La verdad sea dicha: nuestro sistema educacional es insostenible, pues tal como existe hoy hará imposible que Chile supere alguna vez la pobreza y el subdesarrollo en los que, a pesar del progreso, aún nos encontramos.

Podríamos sostener que las protestas estudiantiles son, paradójicamente, el producto del crecimiento experimentado por el país. En efecto, el país ha crecido enormemente durante el período democrático: en infraestructura, en diversificación de sus exportaciones, en modernización de parte de su gestión pública y privada, en el acceso a la universidad, en el aumento de la cobertura escolar, en su conectividad vial, en la adquisición de bienes durables y no durables, etc. Ahora bien, este crecimiento con escasa equidad (ahí se resuelve la paradoja) ha alcanzado un límite cuantitativo que exige transformaciones cualitativas urgentes: transitar del crecimiento cuantitativo al desarrollo cualitativo.

El destacado economista chileno Aníbal Pinto se refirió a la existencia de dos disociaciones para explicar los problemas en el desarrollo nacional; la primera basada en la existencia de una «*contradicción entre una estructura 'subdesarrollada' y una organización sociopolítica 'avanzada'*», y la segunda disociación era resuelta —decía Pinto— «con el intercambio de materias primas por bienes elaborados y otras importaciones», lo que también podía resumirse con la frase «*somos civilizados para consumir y primitivos para producir*» (Pinto, 1985: 254-255).

Ahora la ecuación es inversa: contamos con una infraestructura desarrollada pero con una superestructura subdesarrollada (política y cultural). Es decir, hay progreso económico y excedente (especialmente los del cobre), pero no hay distribución equitativa del ingreso, participación ciudadana ni desarrollo sociocultural, producto de una reducción extrema de la política a los asuntos estatales y a su desvinculación de los asuntos esenciales de la sociedad.

Ahora bien, la transición de una sociedad neoliberal de mercado, que no considera a la sociedad, a otra que sí lo hace, por ejemplo, ofreciendo a sus ciudadanos una educación pública de calidad, implica un profundo cambio cultural y, sobre todo, político. El cambio cultural es lento, surge desde las interacciones individuales y sociales y puede acelerarse solo mediante la existencia de protestas y movimientos sociales que lo impulsen. El cambio político, por su parte, no se produce sin una renovación de la política y su sistema de partidos, lo que está lejos de suceder en Chile, donde la clase política se ha adaptado al sistema. La política criolla se alimenta y reproduce en la «binominalidad», más allá de los discursos universalistas y de la voz de algunos parlamentarios que defienden la representatividad y realmente buscan acercarse a los ciudadanos.

La competitividad resulta un mal negocio político, sobre todo en tiempos de precariedad para el poder. Ello dificulta la inclusión de los históricamente excluidos, la repartición más equitativa de las riquezas y el cambio del sistema educacional. De allí la emergencia de las protestas juveniles protagonizadas por estudiantes secundarios, quienes viven tensionados por la promesa de una redistribución del progreso que nunca llega, pero que pasa visible y autocomplaciente por los entornos de sus precarias aulas de clase, casas y barrios.

SER «PARTICULAR SUBVENCIONADO»: INDIVIDUOS SUBSIDIADOS

«Estoy en un colegio que parece un consultorio. Estoy en un país donde mi viejo paga más impuesto que su jefe. Estoy asustado por el futuro. Estoy pensando en la PSU (Prueba de Selección Universitaria). En que voy a estudiar. En que voy a ser cesante. En que me debí ir a

postular al Nacional (Instituto Nacional) con mi primo. En que mi vida es «particular subvencionado». Somos los cuicos de la cuadra. La Florida (comuna) es demasiado grande. Y nosotros tenemos demasiados celulares»¹.

El atraso en que viven nuestras sociedades latinoamericanas, y la chilena en particular, se sustenta y explica en gran medida –aunque no exclusivamente– en las insuficiencias y precariedades históricas de su sistema educacional, tanto desde el punto de vista de su cobertura, como de su calidad y orientaciones filosóficas y pedagógicas. La falta de educación de calidad genera desigualdades sociales e impide la movilidad social. No saber, saber poco o saber mal, implica, en la llamada sociedad del conocimiento, marginarse del mundo y del desarrollo humano sostenido y sustentable.

Chile ha visto abortar muchas reformas educacionales. Carecemos aún **de la cultura de hacer bien las cosas, con seriedad, consecuencia y profundidad**. Mientras el país siga funcionando de esta manera no será posible salir del atraso y el subdesarrollo. En realidad, el subdesarrollo lo llevamos por dentro, como una criatura que no se atreve a crecer, aunque sueña despierto con el desarrollo humano, pues *el subdesarrollo se encuentra también en la mente humana como un producto de la socialización, del aprendizaje socialmente construido*. Consiste en la incapacidad de mirar hacia adentro, en vivir de espaldas a la propia historia, en despreciar la endogeneidad y no construir a partir de las riquezas del territorio vivido e historizado y de los servicios y valores de los ecosistemas.

En Chile se habla mucho de la «sociedad del conocimiento», tanto en seminarios como en los discursos políticos, pero en verdad, se hace poco por implementarla. Lo cierto es que el país está aún muy distante de llegar a ser una sociedad del conocimiento. Las universidades, sus académicos, pueden jugar un papel fundamental en la creación de esta sociedad, pero, para que ello suceda, tienen que ser tomados en serio, como aliados estratégicos de este fundamental emprendimiento. Las universidades cuentan con conocimientos, tecnologías y personal altamente calificado. Sólo falta que sean convocadas y reconocidas –con los respectivos respaldos– como actores

¹ Testimonio de Elmer Ramírez en *El Blog de adentro. Particular Subvencionado*. Diario *La Nación*, 11 al 17 de junio de 2006.

del desarrollo. Ello implica, por lo tanto, revalorizar el trabajo del docente universitario. Para que ello suceda es también imprescindible que los académicos y las universidades se atrevan a transformarse en actores activos de la construcción de conocimiento y forjadores del desarrollo humano (Rojas, 2004), y no se refugien en la «neutralidad» científica o se dediquen solo a cumplir con los cánones oficiales de productividad científica, olvidándose de la función y responsabilidad social de la ciencia y del científico.

El actual sistema educacional chileno presenta dificultades crecientes, como lo demuestran las cifras, pruebas internacionales y el movimiento estudiantil secundario reciente. No contribuye a sacar al país ni a sus jóvenes del atraso y subdesarrollo. Por el contrario, el actual sistema educacional reproduce el orden social y cultural existente.

La política del subsidio es un engaño. El neoliberalismo acostumbra a subsidiar aquellas actividades que el imperfecto mercado no cubre bien, estableciendo la condición de «individuo subsidiado», es decir, aquel que no puede autosustentarse en las duras condiciones del mercado. El subsidio, sea a establecimientos o personas, no busca ni garantiza superar la condición de vulnerabilidad, más bien la consolida, bajo la apariencia y la ilusión de la protección del Estado.

ESTÁN AHÍ PARA SER PROTAGONISTAS DE SU PROPIO DESTINO

El movimiento estudiantil de 2006 generó y mostró nuevos líderes juveniles pertenecientes a diferentes corrientes políticas (concertacionistas, aliancistas, comunistas e independientes de izquierda). Ellos tuvieron la inteligencia de actuar por la lógica del movimiento y el mandato de sus asambleas, antes que por sus pertenencias ideológicas, como lo manifestaron permanentemente en entrevistas. Representan también, por lo mismo, nuevas formas de hacer política, lo que en sí ya es un fenómeno interesante, puesto que el movimiento surge en un momento de alto nivel de despolitización de la sociedad y de pérdida de legitimidad de los partidos. En palabras de César Valenzuela, uno de los líderes más carismáticos de esta generación:

«Fundamos una organización con el fin de hacer las re-

formas educacionales y, además, movidos por la crisis que vivíamos como movimiento. Había mil organizaciones, cada una con un petitorio distinto. Salíamos en distintas marchas, cada cual tiraba para su lado. En cambio ahora somos uno. En abril (2006) hicimos nuestra primera movilización, que no fue muy organizada. Teníamos hartos miedo. Pero ahí nos llevamos una gran sorpresa, porque nos dábamos por satisfechos si llegaban dos mil personas y fueron siete mil. Ahí nos empezamos a creer el cuento y a trabajar en serio. Queríamos terminar con la tontera de que los ‘jóvenes no estamos ni ahí’, y lo logramos» (César Valenzuela en Foxley, 2006: 26).

Los jóvenes que hoy reclaman por una mejor educación saben bien lo que quieren, están informados y «ahí», preocupados de su inclusión en la sociedad. La inclusión social –oportunidades y movilidad– pasa especialmente por la educación, pero no por cualquier educación, sino por una de calidad e igualitaria, mientras que los tres sistemas de escuelas existentes (municipal, subvencionada y privada) son la reproducción de las diferencias y estratificación sociales presentes en el país. Los estudiantes saben que la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) fue el «amarre» del último día de la dictadura para mantener la educación en el ámbito incierto de los negocios; saben también, por experiencia personal, que la municipalización ha sido un fracaso, y esperan que se produzca un cambio cualitativo para transformarla de una mera «retención» social en una oportunidad de aprendizaje.

La municipalización de la educación se inscribe en la estrategia de «modernización» de la dictadura, paralela a la privatización de la salud y del sistema de seguridad social. Apuntaba a reducir el Estado y sus gastos, entregando a los municipios, en su mayoría pobres, la educación básica de los niños carenciados. El modelo económico basado en la exportación de materias primas no elaboradas no requería de ciudadanos bien formados ni cualificados, sino de mano de obra barata y reemplazable, ya sea por máquinas o por otros obreros. Por lo mismo que la LOCE habla de asegurar conocimientos «mínimos». En otras palabras, la educación municipalizada tiene por objetivo «producir» futuros trabajadores para entrar –en la mayoría de los casos, como trabajador precario– en los eslabones más frágiles de la

cadena productiva exportadora, y no para agregar valor al producto ni para participar con su inteligencia en el desarrollo de la sociedad. Todo ello fue acompañado de un proceso de desorganización (mediante la represión y limitación de la organización y acción sindical), individualización (vía consumismo) y despolitización (mediante el desprestigio y descalificación de la política) de la sociedad.

«Esa generación ‘no estoy ni ahí’ creo que nunca existió... Eso era solo un juego manejado por los medios de comunicación que siempre se han encargado de mostrarnos como lumpen, como delincuentes» (Camilo Retamal, en Aravena y Pérez; 2006).

Esta generación de estudiantes no se conforma con lo mínimo que les ofrece el sistema educacional, pues lo que ellos quieren es salir de la pobreza que reproduce dicho sistema. Por lo tanto, la calidad de la educación debe dejar de ser un privilegio de los sectores sociales acomodados, de los colegios privados. Interesante resultó también la solidaridad que mostraron colegios privados con las reivindicaciones del movimiento estudiantil, lo que señala que existen importantes fuentes de solidaridad en los jóvenes chilenos, más allá de sus pertenencias sociales.

LA DIVISIÓN SOCIAL DE LA LOCE

Se trata de una ley que no fue aprobada por ningún parlamento, aberrante en sus contenidos y también en su composición, pues crea en su artículo 32 el Consejo Superior de Educación, integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la Corte Suprema, entre otros. Plantea el cumplimiento de «objetivos mínimos» en educación básica y media (artículos 9 al 20), que obviamente no son suficientes para los desafíos que enfrenta la educación en un mundo globalizado y crecientemente orientado por el conocimiento. Asigna al Estado «el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza» y de «financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso de la población a la enseñanza básica» (artículo 3), no asignándole ninguna injerencia en la calidad de la educación ni responsabilidades

financieras para con la educación media y superior/universitaria. La función central del Estado sería garantizar la entrada de la educación al libre mercado, lo que hasta hoy se ha mostrado como un fracaso.

La ley establece que basta con contar con licencia de educación media para ser «sostenedor» de un establecimiento educacional, es decir, no se requieren competencias ni experiencia educacional (artículo 21, letra a). Además, fija arbitrariamente 17 profesiones universitarias que requieren el grado de licenciado, dejando fuera de la lista a disciplinas como la Sociología y la Antropología (artículo 52). Por todo lo anterior, existe consenso en que la LOCE debiera ser reemplazada por una nueva Ley de Educación, preparada con participación de los actores involucrados en los procesos formativos y que regule su calidad, facilite el acceso equitativo a ella y asegure su carácter público.

En estricto rigor, es posible sostener que en Chile no existe una educación pública como se entiende en países de capitalismo avanzado, o como existió, al menos en forma restringida, en nuestro pasado democrático.

Según un estudio realizado en 2006, un 50 % de los estudiantes asistía a los 6.138 establecimientos municipalizados que existen a nivel nacional, un 42 % asistía a los 4.084 establecimientos privados subvencionados y el resto, un 8 %, estudiaba en 930 colegios privados. En otras palabras, un 92 % de los estudiantes (más de tres millones) asistía a establecimientos –municipales o privados subvencionados– apoyados con una subvención pública equivalente a \$ 30.000 mensuales por alumno que asiste a clases (Jaramillo, 2006). A ello hay que agregar el hecho de que el 71,4 % de los niños más pobres (primer quintil) de la enseñanza básica y el 65,5 % de la educación media asistía a establecimientos municipales, con todo lo que ello significa en cuanto a dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los establecimientos municipales se encuentran, además, muy dispersos y descoordinados, mientras que el 67 % de los colegios particulares subvencionados pertenece a un sostenedor que tiene solo un colegio (Jaramillo, 2006). Algo parecido a lo que sucedía en el sistema de transporte privado (antes que se iniciara la implementación del Trans-Santiago): muchos dueños con pocos buses. Muchos sostenedores pequeños sin recursos, sin capacidad financiera ni pedagógica para sostener una educación de calidad.

Este sistema educacional es el mejor reflejo de la realidad segregada que marca la nueva geografía social del país en proceso de modernización neocapitalista de mercado, y es también la máquina cultural que reproduce la nueva estructura clasista de la sociedad chilena. Con razón, frente a esta dispersión y fraccionamiento del sistema educacional chileno, en una encuesta CEP, el 73% de los consultados considera que las escuelas y liceos de Chile debieran ser administrados por el Ministerio de Educación (Muñoz, 2006). En otras palabras, frente al fracaso del sistema municipalizado y particular subvencionado, los ciudadanos buscan la solución en el *sistema público*, aquel que en el pasado hizo avanzar a las personas y la sociedad, aunque fuera elitista.

Como consecuencia de los altos precios y excedentes del cobre, los que no son meramente transitorios o coyunturales (como se suele sostener), los recursos económicos para financiar un buen sistema de educación existen. Paradojalmente, en medio de la crisis de la educación, el país no sabía qué hacer con ellos y discutía la posibilidad de depositarlos en un fondo en el extranjero para evitar «distorsiones» en la economía interna. Cuando no hay recursos no se invierte en educación, y cuando los hay, tampoco. Da la impresión que las élites no quieren dar «el salto al desarrollo». Y si el salto no se da, especialmente en educación, ciencia y tecnología (también en salud y previsión social), el país perderá una oportunidad histórica.

¿CÓMO SALIR DE LA CRISIS?

Está claro que el actual sistema municipalizado y el privado subvencionado son un fracaso absoluto que no admite mejoras. En la medida que hay diferentes tipos de municipios, con mayores y menores recursos, ello se reproduce en su tipo de escuelas y liceos. Aún más, para los municipios la escuela es un problema «heredado», no es una función que asuman con agrado y dedicación. De otra manera no se explica el hecho que en una comuna como Concepción, que no es precisamente de las más pobres, la mayoría de los egresados de liceos no alcanzan en la PSU los 450 puntos necesarios para optar a un crédito con garantía estatal. Ello se observa también en el enorme

déficit que presentan en Matemáticas, y en el débil manejo del idioma que traen los jóvenes que ingresan a las universidades.

Probablemente, la solución al problema de la municipalización de la educación vaya por la organización de un sistema educacional público eficiente y de excelencia, con fuerte acento regional. Ello ayudaría a promover el desarrollo de las regiones y a fortalecer el sentido territorial de pertenencia e identidad, reconstruyendo la deteriorada identidad nacional. Hay necesidad de un sistema más integrado, con participación de profesores, padres y apoderados, estudiantes y directivos, junto con la autoridad pública. El sistema de «SEREMIS», así como el conjunto de instituciones que actualmente opera, ha quedado obsoleto: sus funciones son mínimas, frente a la magnitud y complejidad de los problemas que deben enfrentar.

Los ejes centrales del cambio podrían ser: a) formar nuevos docentes con vocación y calidad pedagógica (supone cambiar profundamente las facultades de educación, más dedicadas a la asistencia técnica que a mejorar la calidad de la formación de sus estudiantes y perfeccionar a sus profesores); b) disminuir drásticamente el número de alumnos por cursos (20 alumnos), para permitir un proceso de enseñanza más personalizado; c) mejorar la infraestructura de los establecimientos (muchos en pésimas condiciones materiales) y las remuneraciones de los profesores; d) cambiar de paradigma pedagógico, pasando de una pedagogía basada en el profesor a otra basada en el alumno (adaptación a la política de Bolonia: concepto de educación continua); e) fomentar en los niños y jóvenes la investigación, para que adquieran competencias innovadoras e investigativas que agreguen valor a los recursos naturales y productos manufacturados; f) fomentar en el niño y joven la capacidad de pensar, reflexionar y de respetar al otro, para construir una sociedad más solidaria y mejor; y g) fomentar liderazgo y capacidad de gestión e innovación en los directores de establecimientos educacionales.

Lo anterior pasa por abrir espacios de diálogo y discusión, tal como se resuelve el futuro de la educación a nivel mundial. Su resolución es clave para entrar exitosamente al siglo XXI.

Nosotros debemos y podemos encontrar, mediante la discusión constructiva y profunda, nuestro propio modelo. No pensar en «im-

portar» modelos educativos, como se ha intentado ilusoriamente en el pasado. La educación no puede importarse, tiene que ser producida por sus propios actores al recoger su propia historia y fortalecer sus potencialidades económicas, sociales y culturales.

Los jóvenes que se movilizaron lo hicieron seriamente, con conocimiento de causa, discurso articulado y buen nivel de organización. Recurrieron a formas creativas y democráticas, con fantasía e inteligencia. Si las respuestas oficiales no se sitúan al nivel cultural que ellos están alcanzando, los conflictos tenderán a agravarse, puesto que los protagonistas de las movilizaciones son hijos del progreso mal distribuido y de la democracia no profundizada, e insistirán, así como los que vienen tras ellos. En política ya no sirven las «maniobras» distractivas (promesas que no se cumplen) ni los «pequeños pasos» (gatopardismo) que se acostumbra practicar en Chile. Hoy se requieren cambios profundos, o nos quedaremos a medio camino del desarrollo.

El movimiento estudiantil se movilizó por la calidad y, por lo mismo, representa una gran oportunidad para dar un salto cualitativo en el mejoramiento real de la educación. Para ello es imprescindible iniciar un gran debate nacional sobre la educación. Este debate puede dar luces y orientaciones sobre el camino que deberla emprender la educación chilena en el siglo XXI. Del debate deberían surgir ideas sobre cómo mejorar la educación y cómo encauzarla en una nueva institucionalidad.

Finalmente, una reflexión sobre la represión. Los estudiantes secundarios han dado ejemplo de hacer uso del derecho democrático a demostración en forma pacífica. Entienden que la fuerza del movimiento se encuentra en su capacidad discursiva y argumentativa, en la razón como principio rector de la vida moderna y en el valor que para ellos representa una buena educación en el mundo contemporáneo. La masividad del movimiento, así como su articulación regional y nacional, hablan de la justeza de sus peticiones y de la capacidad de convocatoria que ha alcanzado. Si bien empezó con peticiones básicamente reivindicativas (PSU gratuita, pase escolar gratuito y revisión de la JEC), las jornadas de reflexión y las movilizaciones derivaron en temas esencialmente valóricos (derogación o cambio

de la LOCE y revisión de la educación municipalizada). Cuestionar la LOCE y exigir calidad significa cuestionar el «orden» social que puso a la educación en el mercado de los «sostenedores», estratificando su acceso y calidad a pertenencias socioeconómicas. Por lo tanto, este es el «orden» que defiende la represión, es el orden injusto de un sistema escolar que discrimina a los sectores más pobres, a los hijos de los trabajadores y de la clase media.

La calidad de la educación es un bien cultural y espiritual al que todo niño y joven tiene derecho, debiendo ser garantizado por el Estado. No es un problema «policial» ni de «orden público». El papel de la policía, en un régimen democrático, es defender a los que participan pacíficamente en demostraciones y aislar o neutralizar a los pequeños grupos que provocan desorden, por lo que lo ocurrido durante las manifestaciones estudiantiles demuestra, por parte de la policía y del Gobierno, la falta de una cultura moderna de resolución de conflictos. Marchas estudiantiles como las de Valparaíso y Temuco, según la prensa, no presentaron signos de violencia, a lo que al parecer contribuyó un acuerdo realizado entre dirigentes estudiantiles y Carabineros para resguardar la manifestación y no intervenir reprimiendo. Estos ejemplos demuestran que es posible ejercer el derecho democrático de demostración sin intervención represiva de la fuerza pública.

El movimiento estudiantil secundario representa un cambio cultural, que ocurre luego de décadas de acumulación de problemas de calidad no resueltos en el ámbito de la educación y de la participación ciudadana, y es, por lo mismo, una oportunidad de cambio profundo en la estructura social chilena. Constituye el primer movimiento social que cuestiona en forma radical a una contradicción central de nuestro sistema socioeconómico: el crecimiento sin inclusión y la mala calidad de la educación.

La Comisión Asesora creada por el Gobierno con participación de diferentes actores sociales, incluidos representantes secundarios y universitarios, no logró resolver los problemas. Se estructuró en torno a tres temas centrales: calidad, institucionalidad y currículo. Su composición heterogénea –y con una representación minoritaria de los estudiantes movilizados– hizo muy difícil la generación de

consensos, además, los sectores conservadores no fueron partidarios de modificar una ley que defiende la «libertad de educación», ni muchos menos de reemplazarla por otra que garantice el acceso a la educación con fuerte regulación pública. La libertad del negocio es el eje central que mueve los intereses del capital y de la derecha chilena, y la educación no se escapa a esta máxima, por lo que la lucha será necesariamente una lucha de larga duración, en la que los estudiantes y sus aliados seguirán siendo protagonistas fundamentales.

Los jóvenes secundarios nos han dado una verdadera lección de democracia, emprendimiento, compromiso y consecuencia. Constituyen, por lo mismo, una esperanza de cambio social.

«La misión de la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo compuesta por ciudadanos comprometidos en la construcción de una civilización planetaria» (Morin, Roger Ciurana y Motta, 2006: 122).

En este sentido, el movimiento Pingüino fue de avanzada, adelantó principios y valores que conformarán la sociedad-mundo, más igualitaria y solidaria. Pero, dada la complejidad del problema, constituyeron sólo un capítulo de una larga historia que continúa.

V. CHILE DE CARA AL SIGLO XXI: SOCIEDAD BLOQUEADA

GRANDES DESAFÍOS DE PAÍS

A COMIENZOS DEL SIGLO XXI, Chile enfrenta grandes problemas y desafíos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales. Los obstáculos que bloquean su paso hacia el desarrollo son múltiples, vinculados principalmente con el urgente ingreso pleno de sus ciudadanos a una modernidad construida desde la subjetividad, la equidad, la solidaridad y la emancipación. Para ello es indispensable reconocer más derechos a las personas, cambiar significativamente la distribución del ingreso en favor de los pobres y sectores medios, mejorar la calidad de la educación y construir, de manera participativa y sustentable, un proyecto de nación incluyente.

Para ello, el país cuenta con enormes potenciales. La reciente emergencia de nuevos valores y movimientos ciudadanos, producto de una cultura del emprendimiento, puede contribuir a dar el salto buscado por todos.

CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO E IMPACTOS SOCIALES

En tránsito hacia el siglo XXI, la sociedad chilena experimenta importantes procesos de transformación, cuyos resultados aún no son del todo previsibles. Bajo el pretexto de su estabilidad y positivos indicadores, la economía es el ámbito que menos ha cambiado en democracia, manteniéndose sin ninguna alteración en sus altos niveles de concentración, bajo valor agregado y privatización. Los resultados de la Encuesta CASEN 2009, que muestra un incremento de la pobreza a pesar de las políticas sociales, son indicadores claros de la inequidad y del aún precario sistema de protección social existente en el país.

El terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010 han aumentado la pobreza, especialmente en las regiones del Maule y Biobío. Aún se desconocen las cifras, pero los nuevos focos de vulnerabilidad adquieren visibilidad en los centros urbanos, en la costa y hacia el interior del país. Junto con la destrucción de viviendas y de hábitat humanos, son muchos quienes han perdido sus trabajos. Las «aldeas» edificadas para los damnificados son campamentos de mediaguas, de refugios precarios de 18 m², de hacinamiento humano, carentes de servicios básicos y de espacios suficientes para la convivencia familiar y social. Verdaderos focos de conflictos y explosiones sociales. Indignos de un país de desarrollo medio, como nos define las Naciones Unidas. Indigno de un país que acaba de ingresar a la OCDE.

La política es el ámbito social que cuenta con menos prestigio y legitimidad. Según un estudio realizado por la Universidad Diego Portales (2009), un 94 % de los jóvenes no confía en los partidos políticos. Ello se manifiesta en el hecho de que cerca de 3 millones de jóvenes no se inscribieron en los registros electorales y, por lo tanto, no participaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2009 (primera vuelta) y enero de 2010 (segunda vuelta). Para rejuvenecer el padrón electoral, el Gobierno envió en el último momento –entre la primera y la segunda vuelta– un proyecto de ley que introduce la inscripción automática y el voto voluntario, que finalmente fue aprobado en el Parlamento en enero de 2012.

Después de cincuenta y dos años la derecha ganó una elección presidencial en forma democrática. La Concertación de Partidos por la Democracia sufrió una paradójica derrota, luego de veinte años de gobiernos relativamente exitosos. Paradójica, considerando la alta popularidad con que contaba la ex presidenta Michelle Bachelet, quien alcanzó, a fines de enero de 2010, un 83 % de aprobación, y su Gobierno, un 65 %. Esta popularidad no pudo ser captada por Eduardo Frei, candidato de bajo perfil y designado sin elecciones primarias por los partidos concertacionistas. Éste no logró interpretar las aspiraciones de los cerca de 300.000 electores movilizados por Marco Enríquez-Ominami, que para la segunda vuelta se desplazaron hacia Sebastián Piñera, dejándose encantar por sus promesas de seguridad, eficiencia, creación de un millón de empleos y la oferta de mejor educación. La consigna del «cambio» acuñada por Piñera

habría interpretado a sectores de clase media «aspiracional», como lo analizan especialistas electorales:

«La campaña de Frei basada en la polarización del Estado versus mercado alejó una gran parte de estos votantes que valoran las opciones de mercado que se crearon durante los últimos 20 años. Por ejemplo, más del 70 % de los padres de las comunas de clase media aspiracional envía a sus hijos a colegios particulares subvencionados. Y los datos electorales muestran que Frei perdió votos precisamente en las comunas con una creciente clase media aspiracional» (Aninat y Elacqua, 2010).

La política, en la sociedad postpinochetista, se encuentra en crisis, socialmente deslegitimada. El sistema binominal, por esencia antidemocrático, ha desembocado en una fuerte crisis del bloque político de la Concertación por la Democracia.

La Fundación Friedrich Ebert editó, en la antesala de la derrota concertacionista, un libro que constituye un verdadero balance sobre las fortalezas y debilidades de sus veinte años de Gobierno. Junto con destacar el hecho de que «prácticamente todos los chilenos y chilenas se han beneficiado material y socialmente de los avances impulsados en estos últimos 19 años...», se señala que:

«Chile presenta un cuadro extremadamente asimétrico en lo que respecta a la distribución del poder entre el gran capital y la ciudadanía, en especial, los actores sindicales. La influencia del sector empresarial (excluyendo a las PyMES) en las decisiones políticas es desproporcionadamente grande» (Quiroga y Ensignia, 2009: 16).

Los autores hablan del agotamiento de la Concertación y del «cierre de un ciclo histórico». Por su parte, el senador socialista Ricardo Núñez afirmaba autocríticamente:

«La Concertación tal como la hemos concebido hasta ahora, tiene un horizonte cada vez más cercano. Su doble dimensión de ser una coalición de Gobierno y al mismo tiempo un pacto electoral, tiende a agotarse y a mostrar más debilidades que fortalezas».

El régimen de partidos ha mostrado claros signos de deterioro:

«No está en condiciones de dar cuenta de las transformaciones que vive el mundo, de los nuevos desafíos que este enfrenta, como el cambio climático, la crisis energética... La falta de canales democráticos internos instaló en los partidos una especie de ‘militantes electores’» (Ricardo Núñez en Quiroga y Ensignia, 2009: 25, 29 y 31).

Y declaraba la necesidad de renovar las prácticas políticas de la Concertación y avanzar en la construcción de un Estado social y democrático de derecho.

Por su parte, María Ester Feres, experta laboral, llamaba la atención respecto al impacto de la concepción neoliberal sobre el trabajo, que practica la prescindencia de la política en la regulación de los conflictos sociales:

«... esto se traduce en una ideología empresarial que postula el debilitamiento e incluso la desaparición de la acción colectiva, propicia la intolerancia sindical, y aspira a la desregulación normativa en el conflicto capital trabajo. A ello se suma un discurso y un accionar gubernamental que hace abstracción del conflicto, adjudicando su tratamiento y solución a la responsabilidad autonómica de las partes, las que se encuentran en un evidente desequilibrio contractual y de poder negociador» (María Ester Feres en Quiroga y Ensignia, 2009: 198).

La estrategia neoliberal busca la deconstrucción del carácter de sujeto histórico de los trabajadores. Feres ha sostenido que el movimiento sindical chileno se encuentra en crisis, manifestada en la brecha existente entre la dirigencia sindical y la base social que aspira a representar (ibídem: 224). En el trasfondo de la crisis sindical se encuentra la dualización del mundo del trabajo: por un lado existe un pequeño segmento de trabajadores beneficiados por la inserción en la globalización y, por otro, la inmensa mayoría, que sufre sus efectos más negativos. Todo ello conduce a la pérdida de la solidaridad (ibídem: 225).

Finalmente y, en relación al sistema de protección social, viga maestra del último Gobierno concertacionista, Quiroga realizaba

un crítico balance. Según el autor, a fines de 2007 un 62 % de la población activa aportaba a un fondo de pensiones privado, mientras que un 3,7 % continuaba en el sistema antiguo. La cobertura alcanzaba a dos tercios de la población, siendo la más alta de América Latina, sin embargo, se mantenía equivalente a la existente en 1975, a pesar de que el ingreso per cápita se incrementó más de cuatro veces desde 1990. La cobertura presenta también otros problemas: «lagunas previsionales» (aportes esporádicos de los afiliados) y fuertes diferencias de género. La densidad de los aportes de los hombres asciende a casi un 60 %, mientras que la de las mujeres es inferior a 44 %. Un cuarto de los afiliados cotiza por un periodo que alcanza solo al 24 % de su vida laboral, y un 30 % de los cotizantes alcanza el 80 % de densidad de aportes (Quiroga, 2009). El balance del autor resulta categórico:

«... la promesa formulada al momento de lanzar la reforma en el sentido de que el monto de las pensiones privadas ascenderían a 80 % de los últimos ingresos percibidos no se cumplió. De acuerdo con cálculos del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, los hombres que se retiren entre 2020 y 2025 percibirán pensiones cuyo monto será de apenas el 51 % de sus ingresos; en el caso de las mujeres, el monto será de apenas 28 %» (Quiroga, 2009: 371).

A pesar de que la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno de Bachelet entregó mayores aportes subsidiarios del Estado para sustentar el pilar solidario, no se atrevió a introducir un sistema de pensión básico universal, siendo necesario y posible.

Una cantidad importante de problemas estructurales no resueltos complejizan la situación que vive el país, lo que recae sobre las políticas públicas y, por ende, en el Gobierno de derecha. Sebastián Piñera enfrenta difíciles desafíos. El Presidente busca, sin resultados positivos, reinstalar la política de «acuerdos» que se practicó justificadamente en el Gobierno de Patricio Aylwin, en momentos de debilidad democrática y de amenaza autoritaria, que hoy no existe. Sumado a lo anterior, no cuenta con mayoría en el Parlamento y enfrenta fuertes presiones empresariales (flexibilidad laboral, reducción del salario mínimo juvenil, disminución de indemnizaciones por despido,

etc.), políticas (ley de amnistía a favor de militares involucrados en violación de derechos humanos, de parte del pinochetismo) y sociales (trabajadores, profesores, pobladores, etc.), que dificultarán considerablemente la gobernabilidad del país.

Por su parte, en los partidos de la Concertación se vislumbran recambios generacionales. En efecto, en el PPD surgen Carolina Tohá y Ricardo Lagos Weber; en la Democracia Cristiana, Claudio Orrego y Ximena Rincón; y en el Partido Socialista, Fulvio Rossi y Marcelo Díaz. Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Bachelet, lanza su candidatura presidencial para el 2013. Ellos reemplazaron a los renunciados presidentes de partidos, responsables de la derrota electoral. Pareciera que comprenden mejor los desafíos políticos que enfrenta el país y se esfuerzan por recomponer sus tiendas, convocando a los líderes que emigraron de la Concertación y levantaron candidaturas independientes. De igual manera, no podrán prescindir del Partido Comunista, que logró por primera vez en democracia tener presencia en el Parlamento mediante la elección de tres diputados (Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Teillier). Los nuevos líderes proclaman la necesidad de construir la «Concertación Ciudadana» (Tohá, Lagos, Landerretche y Orrego, 2010), cerrando un ciclo histórico e iniciando uno nuevo, donde el ciudadano debe jugar un papel central. Sin embargo, ninguna de estas figuras logra aún sobresalir con vuelo propio, mucho menos reemplazar el liderazgo que Michelle Bachelet mantiene en la opinión pública.

Podemos resumir los urgentes cambios que el país requiere en: derogación de la Constitución heredada de la dictadura (algunos sectores políticos plantean la necesidad de generar una Asamblea Constituyente) y su reemplazo por una democrática; fin del sistema político binominal; cambio del modelo económico neoliberal (redistribución del poder económico y del ingreso); fortalecimiento del Estado, dotándolo de capacidad de regulación y control del mercado y proveyéndolo de un sistema de protección social que cubra las necesidades de la sociedad, incluyendo los sectores medios; fortalecimiento del sistema de educación pública de calidad (incluida la universitaria); descentralización del país mediante la entrega de poder económico y político a las regiones (más poder a los municipios y elección democrática de las autoridades regionales, los intendentes);

generar avances en temas valóricos, tales como el reconocimiento legal a uniones de minorías sexuales, aborto terapéutico y distribución en policlínicos y ventas en farmacias de la píldora del día después (superando la discusión sobre su supuesto carácter abortivo); creación de una institucionalidad ambiental que garantice la protección de los recursos naturales y la sustentabilidad del desarrollo (se aprobó en el Parlamento la creación del Ministerio y Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Aéreas Protegidas); reconocimiento de los pueblos indígenas (el Parlamento ratificó finalmente el Convenio 169 de la OIT); y el mejoramiento de los derechos de los trabajadores en materia de organización sindical (capacidad de negociación colectiva), etc.

En torno a estos problemas existe un cierto consenso social, así como en sectores políticos de izquierda y de centro democrático. Algunas materias son más difíciles de implementar que otras, pues requieren mayoría calificada en el Parlamento. Avanzar en profundizar la democracia y la equidad para superar definitivamente la pobreza requiere de la construcción de una nueva mayoría social y política, que trascienda los bloques políticos actuales. En una sociedad en transformación esto es algo difícil de construir. El poder económico, la derecha política y parte de los sectores tradicionales de la Concertación, no son partidarios de cambios profundos.

SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN: LA COMPETENCIA INDIVIDUAL

La sociedad chilena ha sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas. Estas transformaciones afectan su vida económica, social, política y cultural. Los cambios pueden caracterizarse por la existencia de menos Estado, menos política y menos cultura; mientras se impone el dominio del mercado, el consumismo y el individualismo, por encima del interés social y de lo público. Estos cambios se iniciaron violentamente a mediados de la década de los setenta y, con el tiempo, en democracia, se han ido profundizando y consolidando en las instituciones, y asimilando en el comportamiento cotidiano de los chilenos.

No todos están contentos con estos cambios. Existen aquellos que no logran movilidad social ni la integración al nuevo modo de

vida, como consecuencia de las enormes brechas y de la falta de equidad en la distribución de los bienes materiales e inmateriales. La inequidad estructural, prácticamente inherente al sistema neoliberal imperante, produce un profundo sentimiento de expectativas insatisfechas y de malestar, entre cuyos síntomas encontramos la depresión individual, el estrés, la aparición del «trabajólico», el resentimiento social, la violencia, el incremento de la delincuencia, el consumismo desenfrenado, el desapego a las instituciones (especialmente a las políticas) y la crisis de valores y de identidad.

En el pasado, antes de la irrupción del mercado como mecanismo de regulación, las normas y valores provenían de la familia, la escuela, la iglesia y la política. En la sociedad industrial –incluso–, y a pesar de la explotación, existía el valor del trabajo. Pero las políticas extremas y desreguladas de mercado destruyeron gran parte de los contenidos valóricos y normativos que orientaron los procesos de socialización del pasado.

En las últimas décadas, la competencia individual se ha erigido como un estandarte supremo de la construcción de personalidad y sociedad. Para quienes no lo logran –y son muchos los que no lo logran– se ofrece un subsidio, o medidas mínimas de protección social, pues Chile no cuenta con un Estado de protección social que garantice igualdad de acceso y oportunidades a la salud, educación y seguridad social.

El principio económico-social de subsidiaridad practicado por las políticas de mercado no apunta a resolver el problema de fondo, de carácter estructural, sino a su mitigación. Por lo tanto, no busca contribuir a la *formación de ciudadanos*, sino solo a apuntalarlos para que sobrevivan en las duras condiciones de competencia mercantil. La subsidiaridad no genera condiciones de igualdad de acceso al progreso y a la ciudadanía, crea únicamente posibilidades de inclusión en niveles bajos de circulación y producción de la vida social y en contextos de competencia individual, socialmente entrabada y políticamente bloqueada.

SOCIEDAD BLOQUEADA

Esta sociedad que Garretón denomina «sociedad pospinochetista» (2007), una sociedad en la que conviven y empatan lo que queda y perdura de la herencia del dictador Pinochet y su otrora oposición, la actual Concertación por la Democracia, que gobernó el país desde comienzos de la década de los noventa, sin lograr aún reformas más profundas ni una democracia plena:

«Nuestro problema como país es que vivimos una profunda contradicción entre, por un lado, los significativos, aunque parciales, avances en crecimiento económico, inserción internacional, democratización social y política y, por otro lado, la pésima calidad de una sociedad desgarrada por la ausencia de cohesión social y de un proyecto político-cultural. Esta contradicción es el rasgo propio de la época postpinochetista. En efecto, es evidente que ya no estamos ni en la época pinochetista ni en la transición; pero tampoco hemos podido salir del pospinochetismo como para encarar un proyecto futuro como país. De hecho todos los proyectos de estos años han sido principalmente reactivos o correctivos y se entranpan en las herencias socioeconómicas, culturales e institucionales de la dictadura. Es decir, estamos marcados aún por rasgos del legado de la dictadura y del modo como resolvimos el paso desde la dictadura a la democracia» (Garretón, 2007: 242).

Esta sociedad podría caracterizarse también como una sociedad «bloqueada o «autobloqueada», es decir, fraccionada socialmente, y sin muchas posibilidades de avanzar substancialmente hacia el desarrollo. Modernizada y atrasada, simultáneamente. Rica y pobre. Con un discurso modernizador y una práctica social premoderna o perversa, semifeudal. Democráticamente binominal, es decir, sin competencia electoral. Socialmente fraccionada en clases, con discursos inclusivistas, pero con prácticas de exclusión y discriminación social. Las clases sociales se reproducen en las categorías y calidades de escuelas o tipo de enseñanza (privadas-privadas, privadas subvencionadas y municipales), barrios, familias, trabajos, consumos, recursos económicos, pertenencias, estilos de vida y de alimentación, trato y

reconocimiento social, estatus y habitus social, etc. En este contexto, se producen los procesos de socialización. Se construye el individuo y los segmentos sociales diferenciados, socialmente desintegrados: bloqueados y autobloqueados. Para que las partes nunca se junten, aunque pasen junto a las otras, pero no se hablan, tocan ni mezclan.

En este tipo de sociedad se tiende un manto sobre las contradicciones y bloqueos a la movilidad e integración social. El mercado y la política desintegran la sociedad. Y los estudios sociales no siempre se refieren al todo. Se parcializan, tienden a especializar sus visiones. El SubEstado –antes denominado como Estado subsidiario– privatiza la política, impidiendo que se constituyan los ciudadanos soberanos. El llamado ciudadano no sabe dónde dirigirse cuando tiene un problema ciudadano: se pierde en el enmarañado sistema de políticas públicas y privadas; en los proyectos, múltiples, desarticulados y de corta duración. La satisfacción de sus necesidades ahora se vincula a muchos proyectos desinstitucionalizados, lo que dificulta la formación de una visión ciudadana integrada. Ello facilita el surgimiento de conciencias y acciones particulares, sin sentido común.

Condición para desbloquear la sociedad es dar visibilidad a sus problemas, destrabar sus nudos, restablecer los puentes intercomunicativos entre el individuo y la sociedad, la política y los sujetos sociales, la pobreza y la riqueza, la educación y el desarrollo. Sin embargo, el bloqueo es profundo, tan profundo como los cambios socioculturales ocurridos en las últimas décadas, cambios que han penetrado la vida y conciencia de los individuos.

Al respecto, el Informe del PNUD (2009) se refiere a la «manera de hacer las cosas» en Chile, es decir, analiza las prácticas sociales, definidas como «los modos de actuar y de relacionarse que las personas despliegan en espacios concretos de acción» (PNUD, 2009: 15). Reconoce tres tipos de prácticas: instituciones, subjetividad y conocimiento práctico, las que contienen fuerzas que favorecen las inercias y pueden constituirse en una seria traba para el necesario cambio.

«Los entornos institucionales que enmarcan las prácticas tienden a ser bastante estables; el surgimiento de nuevas instituciones y las grandes modificaciones a los marcos legales no se dan a diario. Las identidades subjetivas, incluso bajo el

asedio de los cambios culturales, tienden también a consolidarse y arraigar en identidades históricas que oponen resistencia al cambio. Por último, las propias maneras de hacer las cosas, los juegos prácticos se asientan definiendo relaciones y modos de comportamiento que se repiten transversalmente en distintos espacios de la sociedad. La repetición constante de ciertas maneras de hacer las cosas dota a los actores de un conocimiento práctico que los orienta en la vida cotidiana, pero dificulta a la vez, plantearse nuevos modos de relacionarse o comportarse. Este carácter inercial de las prácticas es lo que proporciona a la vida social su aspecto de estabilidad y de orden, pero también puede constituir un obstáculo a la hora de aprovechar las nuevas oportunidades que se le presentan al país» (PNUD, 2009: 212).

Estas prácticas institucionales, subjetivas y sociales existen en la sociedad chilena y se manifiestan de manera bastante híbrida, como una mezcla de pasado paternalista-asistencialista y comportamiento modernizado. **Lo híbrido tiende más a entorpecer la fuerza transformadora que a liberarla**, en un sentido verdaderamente emancipador. En su paso por Chile, el destacado sociólogo francés Alain Touraine nominó este proceso como «desmodernización», definiéndolo así:

«Una parte de la desmodernización consiste en la destrucción de nuestro tipo de democracia, de ciudad, de escuela, de familia. Son todas cosas que están en un proceso de destrucción...» (Alain Touraine en Blanco, 2009).

SOCIEDAD NEOLIBERAL Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL

Un gran déficit de una sociedad «neoliberal» es la carencia de un sistema de protección social, la que sólo se puede construir a partir del principio de la solidaridad intergeneracional, con fuerte participación del Estado. En este sentido, cabe mencionar que el Gobierno de Michelle Bachelet hizo de la protección social su principal orientación de las políticas públicas, implementando medidas en esta dirección, especialmente las relacionadas con la infancia, la mujer, la salud, la jubilación y previsión social. Precisamente, son estas medidas, junto con su cercanía con la población, las políticas que le han merecido

un gran respeto transversal en los diferentes sectores sociales del país y altos niveles de popularidad y aprobación en las encuestas (83% de aprobación). Sin embargo, el déficit y las carencias sociales son de tal magnitud que sólo una profunda reforma de distribución del ingreso hará posible avanzar significativamente en la construcción de un Estado Social. Por lo mismo que las últimas décadas, a pesar de los progresos en democracia, se haya acumulado en la sociedad chilena un profundo malestar social, al que se suma el problema ambiental, tampoco bien asumido, a pesar de la amenaza que constituye para Chile, especialmente para los más vulnerables.

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Chile es un país vulnerable, ya que cumple con siete de las nueve características definidas en el artículo 4.8 (CONAMA, 2009: 13). En efecto, evidenciamos importantes cambios en nuestro clima: una disminución de las precipitaciones, mientras que «las temperaturas máximas han venido cayendo levemente y las mínimas han ido subiendo, lo cual es coherente con lo que se espera para el planeta completo» (Santibáñez, 2008). El mismo autor señala que el «alza de las temperaturas mínimas es mayor que la baja de la máxima» (ibídem), incrementando el efecto invernadero. Las precipitaciones se están retrasando y disminuirán significativamente en gran parte del territorio nacional durante el siglo XXI, además se han vuelto aleatorias y vinculadas a eventos más intensos, que producen inundaciones. Por su parte, los otoños están siendo más secos.

El cambio climático afectará especialmente la disponibilidad del recurso hídrico, el que disminuirá, hacia mediados del siglo XXI, entre un 25 y 30 %, impactando fuertemente los cultivos, el uso del suelo y la disponibilidad para el consumo humano. Como el cambio climático nos obliga a pensar el futuro en el presente, Chile requiere ahora de políticas de mitigación y adaptación. De lo contrario, sus aspiraciones al desarrollo seguirán esperando por mucho tiempo más.

El cambio climático en marcha en el mundo tiene y tendrá consecuencias muy negativas, especialmente para nuestros sectores sociales y territoriales más vulnerables. Reconociendo que Chile ha logrado una disminución significativa de la pobreza (de un 43 % en 1990 a cerca de un 15,5 % en 2008), datos recientes de la CEPAL constatan

que el país cuenta aún con 4,4 % de población indigente altamente vulnerable; 15,5 % de población pobre y altamente vulnerable a la pobreza; 17,9 % de población vulnerable a la pobreza; y 62,2 % de la población no vulnerable (CEPAL, 2009: 36).

Las asimetrías territoriales existentes en Chile –producto del centralismo– se traducen en índices muy superiores de pobreza y vulnerabilidad en las regiones; como la Región del Biobío, que prácticamente duplica el promedio nacional. Además, la crisis financiera ha incrementado estos índices en Chile y América Latina, generando malestar y conflictividad social, así como eventuales problemas de gobernabilidad política, aún impredecibles.

MALESTAR SOCIAL Y NUEVOS MOVIMIENTOS JUVENILES

Las fuertes inequidades sociales generadas por el mercado han producido un malestar diverso y creciente en la sociedad chilena, agudizado por la falta de auténticos canales de participación. La riqueza crece en el país, pero no se distribuye en forma equitativa. Los más pobres mejoran su situación económica a un ritmo muy inferior al de los sectores ricos, generando insatisfacciones profundas.

Las enormes distancias entre las expectativas generadas por la masiva publicidad consumista y la dura realidad restringida del poder adquisitivo de los trabajadores y las capas medias, unidas al discurso de la modernización autoempresarial e inclusiva, termina por *despertar el espíritu ciudadano* adormecido por el paternalismo autoritario.

La profundización del proceso democrático requiere del protagonismo de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, lo que ha surgido en la sociedad chilena durante los últimos años. Su gestación fue a comienzos de la década de los ochenta, entre 1982 (crisis económica de insolvencia que se tradujo en una disminución de cerca de un 13 % del PIB) y 1986, durante las veintidós Jornadas de Protestas Nacionales que pusieron en jaque a la dictadura de Pinochet y sirvieron de base para el triunfo del NO en el plebiscito de 1989. El magnífico y valiente movimiento social de la época, compuesto especialmente por mujeres, jóvenes, pobladores y algunos segmentos de trabajadores, creó las condiciones para la

transición a la democracia, iniciada en 1990 con el Gobierno de Patricio Aylwin. En adelante, los movimientos ciudadanos que buscaban y anhelaban un cambio más profundo del modelo económico neoliberal y de la estructura política autoritaria fueron desplazados por los partidos políticos, reorganizados en el nuevo escenario de transición democrática.

Diferentes problemas movilizaron a los Gobiernos de la Concertación: Aylwin se ocupó de la reconciliación nacional (relación cívico-militar), los derechos humanos y, en parte, la superación de la pobreza; Frei intentó modernizar la actividad económica y empresarial y continuar avanzando en la superación de la pobreza; Lagos puso énfasis en la modernización de la infraestructura, la inserción internacional de la economía y, nuevamente, la superación de la pobreza. Y Bachelet, junto con seguir la obra de sus predecesores, se orientó a instalar un sistema mínimo de protección social, que se inicia en la infancia y se extiende hasta el adulto mayor, privilegiando en muchas medidas y discursos a la mujer, echando por tierra los prejuicios machistas que la descalificaron en los inicios de su presidencia. Su alta popularidad –superior al 80 %– y la de su Gobierno se explican en parte por su adecuada gestión de la crisis económica mundial, liderada por su ministro de Hacienda, Andrés Velasco. La política consistió a ahorrar, durante el boom del alto precio del cobre, más de 30 mil millones de dólares depositados en el extranjero, que le permitieron, durante la gran crisis financiera mundial, liberar importantes sumas de recursos fiscales para intentar reactivar la economía en recesión y generar empleos que, finalmente, sirvieron para paliar en parte los efectos sociales de la crisis financiera. En todo caso, esta política tuvo sus adversarios en la propia Concertación, que reclamaba aumentar la inversión social.

Sin embargo, las contradicciones del sistema han generado un enorme malestar social. La ciudadanía ha despertado, y se manifiesta en diferentes frentes y acciones, como el estudiantil.

En efecto, el movimiento estudiantil secundario del año 2006, los «Pingüinos», constituye la anticipación de los movimientos universitarios que en los últimos años se levantan masivamente a favor de la educación pública y la calidad en la formación profesional.

Esta generación, los ex-Pingüinos, hoy cursando estudios superio-

res, ha influido en el nuevo movimiento universitario con sus códigos, lenguajes y formas de lucha, las que a continuación se analizan y que, probablemente, se reproduzcan socialmente en el futuro cercano.

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO: INCLUSIÓN AHORA

Las movilizaciones estudiantiles ocurridas en la Universidad de Concepción –septiembre/octubre de 2009 y en otras universidades– nos obligan a analizar las condiciones socioculturales en que éstas se producen. Se le puede caracterizar como un movimiento particularista e igualitarista, que parte de las necesidades básicas existenciales de los sujetos movilizados. Buscando disminuir la deuda privada del estamento estudiantil, disponer de mayores recursos de sobrevivencia y contar con mayor certeza sobre el futuro profesional y personal en la sociedad que viven, regida por parámetros y normas de «competitividad» individualizadora.

Este tipo de conflicto es representativo de lo que ocurre en la sociedad chilena, de la forma **cómo se manifiestan las reivindicaciones**, petitorios y, en general, movilizaciones. Es típico de una sociedad cuyas bases se han reconstruido bajo los principios de las políticas neoliberales, con escasa o nula participación ciudadana. La democracia no incorpora aún al ciudadano y los partidos políticos se mueven en lógicas particularistas, sin representar al conjunto de la sociedad ni solucionar los graves problemas estructurales, como la inequidad en la distribución de la riqueza producida por todos.

Los jóvenes que ingresan a la universidad –como ya lo hemos sostenido–proviene crecientemente de segmentos sociales carenciados. Son hijos de trabajadores, de empleados, de funcionarios públicos, de sectores de la llamada clase media, etc. En la actualidad, la masificación de la educación superior se traduce en el hecho de que siete de diez estudiantes pertenece a la primera generación de su familia que ingresa a la universidad, lo que, junto con representar nuevas oportunidades para los jóvenes y sus familias, constituye sin duda nuevas oportunidades para ellos, pero también implica nuevos problemas y complejos desafíos para las universidades.

En el pasado, el estudiante universitario pertenecía a otra es-

tratación social, y el Estado proporcionaba mayores aportes al financiamiento de la educación superior. De allí que los movimientos estudiantiles respondían a problemáticas externas a la universidad, así como a situaciones de democracia interna de las estructuras universitarias. El financiamiento no era un problema, como hoy.

Según datos del reciente Informe de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), el Estado chileno apenas aporta un 0.3 % del PIB a la educación superior, lo que se encuentra muy por debajo del promedio de sus países miembros (1.3 % del PIB). El nivel de desarrollo económico alcanzado por Chile, en su calidad de país de desarrollo medio, le exige entregar un mayor aporte a la educación superior: la OCDE demanda que el país –al menos– duplique su actual aporte financiero a la educación superior. No resulta aceptable, de acuerdo a sus parámetros, que las familias chilenas deban aportar más del 80 % del financiamiento de la formación universitaria de sus hijos. Esta realidad nos permite hablar de la ausencia del Estado en la educación superior.

La nueva realidad socioeconómica de los jóvenes que ingresan a la universidad implica grandes demandas formativas para los planteles, más allá de la preparación profesional propiamente tal. Esto considerando los ya conocidos problemas de calidad de la educación básica y media de los establecimientos municipales y privados subvencionados de los que los nuevos alumnos provienen.

La comprensión de los nuevos perfiles, intereses, motivaciones y comportamientos de los jóvenes que ingresan a la universidad es fundamental para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, en un sentido más moderno y contextualizado social y culturalmente. Ello requiere de un nuevo tipo de universidad, con nuevos conceptos pedagógicos, cultura e instituciones. Los patrones de comportamiento de los jóvenes se expresan y reproducen necesariamente en la universidad, en sus aulas y en general en la vida universitaria, incluida por cierto en la forma de movilizaciones.

La protesta estudiantil del segundo semestre de 2009 se caracterizó en parte por su nivel de agresión y violencia, a diferencia de anteriores protestas y movimientos estudiantiles.

En la historia de las sociedades modernas aparece con frecuencia la violencia. También en la historia pasada y reciente de la sociedad

chilena. El fascismo europeo y las dictaduras latinoamericanas son la mejor muestra del uso sistemático y brutal de la violencia. La violencia destruye vida humana, naturaleza e infraestructura. Además deja huellas profundas en las víctimas y victimarios. A las sociedades y comunidades, víctimas de actos violentos, les cuesta mucho sobreponerse y reconciliarse. La violencia genera heridas profundas, desconfianza, temor, rencor e, incluso, ánimos de venganza. Una vez que se instala la violencia en una comunidad o sociedad resulta difícil expulsarla o superarla por medios pacíficos y civilizados.

La violencia representa la incapacidad de resolver conflictos mediante el diálogo, la intercomunicación humana y el consenso social. Desde el punto de vista institucional la violencia implica la impronta de mantener el orden establecido de las cosas e impedir cambios. Puede tratarse de un orden injusto, carente de equidad y de la existencia de grupos de poder que se niegan a compartir la riqueza producida por todos.

Sociedades con escasa o nula movilidad social propenden irremediabilmente al conflicto, pues no ofrecen a sus miembros las oportunidades necesarias para progresar y realizarse como tales. Una sociedad que se moderniza y crece económicamente, pero que al mismo tiempo no distribuye su riqueza, genera simultáneamente grandes expectativas y fuertes frustraciones personales y sociales, manifestadas en *resentimiento social* y *desapego a las instituciones y autoridades*. Los *desheredados* (Dávila, 2008: 312), jóvenes de escaso capital social, si bien ingresan a la universidad, enfrentan insuperables obstáculos para avanzar en una sociedad que niega la movilidad social y que, además, los discrimina. La brecha social y cultural, producida por la inequidad, es múltiple y antropológicamente compleja, y, por lo mismo, genera malestar social e individual.

El paternalismo y asistencialismo neoliberal –que se traduce en que, toda vez que el mercado falla, actúa algo de solidaridad o crédito estatal o privado con aval del Estado– que domina el sistema social chileno no considera a los «beneficiarios» como ciudadanos con plenos derechos. Entonces, el actuar «autónomo» no es más que un signo de desesperación y malestar social que expresa: falta de inclusión y derechos ciudadanos. A pesar de todo, nada justifica la violencia en la universidad, ni verbal ni material. De minorías estudiantiles ni

de la policía. El problema de fondo es estructural: el Estado chileno debe duplicar sus aportes financieros a la educación superior, como lo exige el reciente informe de la OCDE. La comunidad universitaria debe luchar por estas metas y seguir construyéndose sobre la base del diálogo, la reflexión crítica, la solidaridad y el respeto mutuo.

El nuevo movimiento estudiantil universitario da la impresión de sentir «cansancio» con el sistema, de no querer esperar más que algún día llegue la equidad, como se les ha prometido. Ellos exigen más equidad hoy. Y la exigen a las instituciones donde estudian, no al Estado, no obstante que están conscientes que el principal responsable de velar por la equidad y la calidad de la educación superior es el Estado. En efecto, en la anteriormente mencionada Encuesta sobre Jóvenes, el 92 % de los jóvenes consultados declara que la educación superior debería ser gratis, es decir, pública. «Cerca de tres de cada cuatro jóvenes son partidarios de que sea el Estado el que se haga cargo del sistema de salud y transporte público. También creen que los colegios municipales deberían tener una administración estatal y que debería crearse una AFP pública. En la misma línea, aproximadamente dos de cada tres se oponen a la privatización de CODELCO (Corporación del Cobre, empresa estatal)» (UDP, 2009) .

Resulta interesante el imaginario estatista dominante en los jóvenes, a pesar del estilo más particularista de sus últimas protestas y del dominio del mercado. Es una señal más del carácter fuertemente contradictorio de la sociedad chilena actual. Probablemente está fuertemente influido por el fracaso internacional del mercado privado y el reclamo por más Estado y, al mismo tiempo, por la dura experiencia del individualismo emprendedor chileno, carente de norte y sentido existencial claro.

La protesta juvenil representa la entrada en escena política de sectores sociales vulnerables, que buscan movilidad social ahora, sin mayores trámites ni largas esperas. Es, en parte, el efecto inevitable del discurso de la «inclusión» de los pobres sin inclusión real, proclamado permanentemente por los gobiernos de la Concertación. En el futuro cercano, estos jóvenes seguirán presionando por entrar en forma inmediata a la modernidad –que puede manifestarse en exigir mejor y más consumo o mejor sistema de educación o más Estado protector– en forma de movilidad social. Y para conseguir tal meta,

toda forma de lucha puede llegar, en su conciencia, a ser legítima, aunque sea condenable y reprimible por los aparatos del Estado e incluso por la sociedad. Esta nueva realidad social y cultural puede crear serios problemas de conflictividad y gobernabilidad.

A las particularidades de la protesta juvenil, se debe también considerar los problemas de otros grupos sociales, como es el caso del pueblo mapuche, que busca encontrar sus propios espacios de autodeterminación en la sociedad y el Estado chileno.

MOVIMIENTO SOCIAL MAPUCHE Y SU LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO COMO PUEBLO SUJETO DE DERECHOS

El reconocimiento e integración a la sociedad chilena de nuestras etnias, en particular, la mapuche, ha constituido un gran problema y desafío histórico, aún no resuelto.

«La sociedad chilena no ha resuelto su relación con la sociedad mapuche. El pueblo originario sigue siendo el grupo social más discriminado, pobre y marginalizado. Al finalizar el siglo, el Estado y la sociedad se encuentra en una encrucijada, o continuar con la política de despojo y conflicto o encaminarse por la vía del diálogo, del respeto mutuo, de la reparación del daño histórico cometido» (Bengoa, 1999: 13).

La realidad denunciada por Bengoa una década atrás, se mantiene casi inalterada. Salvo en materias como adquisición de tierras, becas para estudiantes indígenas o la definición de políticas públicas de difícil implementación, nada ha cambiado. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos se definió un Nuevo Trato, que lamentablemente no se tradujo en cambios fundamentales, como lo estipulaban sus documentos. Esta falta de consecuencia de las políticas públicas se ha traducido en un aumento del malestar y de las protestas de grupos indígenas, especialmente en las regiones de la Araucanía y del Biobío. Este malestar se ha expresado en fuertes conflictos y enfrentamientos con privados, en particular con dueños de fundos y empresas forestales ubicadas en antiguos territorios indígenas.

Esta falta de respuestas ha ampliado el conflicto histórico, con

características cada vez más violentas y radicales, tales como incendios de camiones de la actividad forestal y de viviendas de colonos acusados por las organizaciones mapuches de usufructuar sus tierras. A ello se agregan tomas de tierras y bloqueos de caminos, respondidas con represión y la presencia permanente de fuerzas especiales de la policía, así como allanamientos a poblaciones indígenas, hiriendo incluso a niños mapuches, como en su momento fue denunciado por representantes de UNESCO. Indígenas indefensos muertos por las fuerzas especiales; heridos, detenidos y procesados, aplicándoles la ley antiterrorista, han puesto al pueblo mapuche y a sus organizaciones más radicalizadas (la Coordinadora Arauco-Malleco) en el primer plano de las noticias y discusiones políticas.

Frente a las críticas internacionales por violación a los derechos indígenas y la delicada evolución política y social del problema —escalada de violencia— el Gobierno y el Parlamento, en forma tardía, procedió a ratificar el Convenio 169 de la OIT. Este Convenio es el único instrumento jurídico internacional que se refiere a los «Pueblos Indígenas», y que coloca dos temas centrales: «el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a contar con un territorio en el cual pueda ejercitarse ese derecho primordial» (Bengoa, 2000).

La ratificación del Convenio constituye un paso político e institucional significativo. Sin embargo, su implementación no estará libre de dificultades, pues se requiere de una cantidad importante de tierras que deben ser compradas a privados por el Estado chileno. Al respecto, los posibles vendedores no están en buena disposición. El poderoso empresario Bernardo Matte, del sector forestal / celulosa, expresaba: «la política del grupo Matte no es vender tierras. Nuestra actividad es comprar tierras para poder usarlas, no venderlas...» (*El Sur*, 15 de noviembre de 2009).

La entrega de tierras es, efectivamente, uno de las reivindicaciones relevantes del movimiento mapuche. La tierra es fundamental para superar los graves problemas de pobreza y marginalidad en los que vive la mayoría de las comunidades mapuches, puesto que la que poseen es escasa y degradada, de mala calidad productiva. La tierra es fundamental, además, para asegurar la sobrevivencia del pueblo mapuche, de sus habitantes, de sus modos de producción, su vida social, su lengua y su cultura. Sin suficiente territorio propio no es

posible ejercer la autodeterminación que reclaman. Y sin derechos políticos e institucionales –representación y presencia en el Parlamento, en los gobiernos regionales y en otras instancias públicas– no es posible hablar de implementación del Convenio 169 de la OIT, ni menos de un proceso de integración a la sociedad chilena, en un marco de interculturalidad.

El reconocimiento pleno como pueblo es un proceso que aún durará en Chile. La mayoría de los chilenos ha aprendido en estos últimos años a desprenderse en parte de viejos prejuicios racistas, presentes históricamente en la sociedad, pero reconocer la existencia de más de un pueblo conviviendo en un mismo territorio ha resultado difícil para la clase política y del Estado chileno. Algo similar a reconocer mayores niveles de autonomía a la Regiones: implicaría poner en cuestionamiento el llamado Estado unitario que es Chile desde su fundación.

Durante el Gobierno del Presidente Piñera el problema mapuche no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado con el uso de la represión y aplicación de la Ley Antiterrorista, fuertemente cuestionada por parte importante de la sociedad, los organismos internacionales y los estudiantes movilizados.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO

Las pequeñas reformas, la política de los pequeños avances, aunque algunos de ellos son importantes, como la política de protección social implementada por la Presidenta Michelle Bachelet, no alcanzan, no son suficientes –a pesar del crecimiento económico– para transformar a Chile en un país desarrollado. Promesa incumplida de las últimas décadas, que se traduce en malestar y frustración social, especialmente para los jóvenes, crecidos paradójicamente entre el éxito económico que favorece sólo a unos pocos y la incertidumbre del futuro, que afecta a la mayoría.

Mala distribución del ingreso, mala calidad de la educación, precariedad del empleo, falta de derechos laborales, escaso apoyo a la educación superior, carencia de una política energética sustentable, escasa participación ciudadana en los asuntos trascendentales, falta

de legitimidad social de la política, economía basada en la exportación de recursos *naturales* de escaso valor agregado; en fin, falta de un proyecto país, sentido y querido por la población como algo suyo. Todos ellos constituyen factores que bloquean la posibilidad de alcanzar el desarrollo con equidad y sustentabilidad.

Sin embargo, la esperanza de crear un nuevo orden social, más justo, creativo y socialmente más participativo, se alimenta de la emergencia de nuevos ímpetus ciudadanos. En efecto, entre las expectativas y los malestares, surgen nuevas conciencias ciudadanas entre los jóvenes, mujeres, niños, trabajadores, indígenas, adultos y, en general, en la población. La ciudadanía empieza progresivamente a despertar de su larga letanía, a desprenderse de la cultura paternalista / asistencialista y autoritaria que ha dominado por siglos. Pero esta posible y esperada entrada al desarrollo con rostro humano y mayor calidad de vida, plena de subjetividad, no estará ajena de fuertes conflictos, entre la vieja cultura dominante y las rupturas socioculturales que traen las nuevas generaciones.

Nuevos valores emergen de los conflictos, del paso de la sociedad autoritaria postpinochetista a una sociedad más liberal, más social, con más equidad y más democracia. Estos valores están relacionados con los derechos reproductivos de las mujeres, con el reclamo por calidad de la educación de los estudiantes, por mayor protección social de parte de la población en general, por una mayor calidad del trabajo, por una mayor protección del medio ambiente y mejora de la calidad de vida. En fin, implica permitir una mayor y mejor participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, que en el fondo significaría profundizar la democracia y avanzar hacia mejores niveles de desarrollo humano y social. Ello implicaría necesariamente desbloquear la sociedad, dando lugar a un proceso emancipativo, de mayor igualdad de oportunidades e inclusión social.

VI. DESPERTAR CIUDADANO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA IGUALDAD. LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES Y LA SOCIEDAD EMERGENTE QUE CONMOCIONAN A CHILE Y AL MUNDO¹

INTRODUCCIÓN

DURANTE EL AÑO 2011, MILES DE JÓVENES, estudiantes secundarios y universitarios, se han movilizado por la educación pública y su calidad. Se trata de sectores sociales emergentes que toman conciencia del precio que significa para ellos y sus familias educarse y formarse como profesionales en un sistema neoliberal en el que prevalece la ideología del mercado, la desregulación institucional y la privatización de los servicios educacionales.

La expansión del sistema educacional, especialmente de la educación superior, ha corrido paralela al endeudamiento de los jóvenes y sus familias, así como al deterioro de la calidad de la oferta. El sistema educacional ha entrado en una crisis terminal. El sistema municipal, primario y secundario, nunca logró afianzarse, y hoy muestra su agotamiento. En otras palabras, el sistema educacional ha entrado en una crisis que no tiene retorno y, por ende, requiere de un cambio fundamental. Lo mismo ocurre con el sistema de educación superior y el técnico profesional. Las movilizaciones estudiantiles, con gran respaldo ciudadano, constituyen un ejemplo de lucha por transformar a Chile en un país con mejores indicadores de igualdad e inclusión social, acordes con sus indicadores económicos y su historia social, política y cultural. Los jóvenes se movilizan en el mundo por mayor justicia y mejor democracia.

La lucha estudiantil, hoy internacional, señala la emergencia de

¹ Este capítulo forma parte del Proyecto de Investigación ANILLOS / CONICYT SOC 28, 2009-2011.

una nueva forma de construir sociedad. La sociedad, otrora mediada por los partidos políticos y las instituciones, se autoinstala como un fenómeno independiente, rebelde y creativo.

CRISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

La educación superior –en realidad el sistema educacional en su conjunto– se encuentra en crisis, como consecuencia de su falta de financiamiento, regulación, calidad, pertinencia y equidad. Hasta 1973, el sistema universitario chileno contó con financiamiento y regulación pública, lo que le permitió cumplir con su función formando buenos profesionales y apoyando el desarrollo de la ciencia, tecnología, cultura y el incremento de la calidad de vida de la población. En nuestras casas de estudio, los temas y desafíos centrales del país tenían un lugar privilegiado y, por ello, los profesionales que egresaban contaban no solo con herramientas técnicas, sino también con visión de país y vocación de servicio a la comunidad.

Durante la vida democrática anterior a la dictadura militar, Chile fue un país mucho más pobre que hoy, pero más justo, aun cuando el cobre se nacionalizó sólo en 1972, proporcionando mayores recursos al Estado. Éste cubría completamente los costos de la enseñanza básica, media y universitaria.

En las últimas décadas el país ha crecido significativamente en lo económico. Su sistema educacional –en sus diferentes niveles– se ha expandido y masificado, pero sacrificando la calidad y sometiendo a los jóvenes y a sus familias a un sistema inequitativo de endeudamiento que hipoteca su futuro. Por lo mismo es que el sistema de educación, básico, secundario y terciario, requiere de cambios profundos. De lo contrario, la crisis se agudizará aún más, perjudicando no solo a los jóvenes movilizados, sino también a las futuras generaciones y al desarrollo del país.

El investigador Raúl Atria caracteriza, con razón, al actual sistema de educación superior como «elitista»:

«El sistema es claramente congruente con una sociedad rígidamente estratificada, con poca movilidad social, profe-

siones ligadas a ciertas capas o clases sociales, amplia base económica rural; en suma, una sociedad social y culturalmente dominada por elites que mantienen un control hegemónico en la estructura social y en el sistema político. El sistema de educación terciaria, especialmente de tipo universitario, es cerrado y elitista» (Raúl Atria en Brunner y Peña, 2011: 166).

Podemos encontrar los fundamentos del elitismo del que Atria habla al relacionar el acceso a la educación superior con el ingreso familiar. En efecto, según datos de las Encuestas CASEN 1990-2006, mientras la participación del quintil I (de menores ingresos) en la educación superior pasó escasamente de un 4,4 % a 17,3 %; el quintil V (de mayores ingresos) pasó de 40,7 % a 80 %. Por otro lado, el índice de dispersión entre los quintiles extremos para 2006 era de 4,6, lo cual significa que un joven que pertenece a una familia del quintil más rico tiene casi cinco veces más posibilidades de ingresar a la educación superior que un joven del quintil más pobre (Espinoza y González, 2011: 289).

La crisis del sistema de educación superior implica también otros aspectos que serán tratados a lo largo del presente capítulo.

EL CAPITALISMO DE «LETRA CHICA»

La actual crisis en educación es solo un síntoma de una crisis más profunda, de carácter estructural y societal. En efecto, el país asiste hoy a un cuadro terminal del modelo neoliberal que dejó casi todo en manos del mercado y de los privados, incluida la educación y prácticamente todos los asuntos otrora públicos, como la salud y el sistema de pensiones. La actual crisis, incubada en el pasado, es producto del agotamiento del modelo en cuestión, pues el mercado no es capaz, por sí solo, de sacar al país del subdesarrollo, de garantizar calidad en la formación profesional ni mucho menos de promover la equidad. El mercado no funciona, no hace milagros y reparte muy mal el progreso y el bienestar: genera inequidades y endeudamiento individual. El mercado tampoco sustituye la voluntad soberana de los ciudadanos. Chile es el único país del mundo que cuenta con un sistema tal que cree, como dogma de fe, en la capacidad milagrosa del mercado y de los individuos privatizados, sin sociedad.

La crisis del modelo, su agotamiento, se manifiesta de diferentes maneras. Así, por ejemplo, durante el Gobierno conservador de Sebastián Piñera, se ha hecho muy popular la expresión «*letra chica*», que significa que todo aquello que proviene de las grandes empresas capitalistas y también del Gobierno trae engaño oculto. Letra chica es aquello que el cliente o consumidor no lee o no puede leer (porque está escrito con letra demasiado pequeña, imposible de leer) en un contrato de compra y venta o en una política pública. Letra chica es aquella expresión escrita que desregula el mercado, aquello que dice lo contrario de lo que el consumidor firma al adquirir un compromiso o lo que la propaganda promete en colores y generosas modalidades de pago: comprar una casa o departamento, adquirir un seguro, comprar un artefacto doméstico, firmar un préstamo crediticio bancario, prometer recursos públicos en el presupuesto para un determinado beneficio social que no se cumplirá, etc. Por lo mismo que actualmente la expresión letra chica implica desconfianza en el que la promueve, sea una empresa o el Gobierno. Su origen es de carácter empresarial, pero en la actualidad la expresión se ha desplazado hacia el Gobierno, creándole graves problemas de legitimidad y falta de confianza y credibilidad en lo que promete y hace. Al respecto existen muchísimas muestras de situaciones que los ciudadanos experimentan en la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los automovilistas que utilizan la moderna autopista conocida como «Costanera Norte» —especie de carretera periférica de la Región Metropolitana del Gran Santiago— se encontraron en algún momento con la sorpresa o «letra chica»: sus administradores privados contaban con el derecho contractual de cobrar a un «infractor» hasta 40 veces el valor de una tarifa normal por el hecho de no pagar o atrasarse en el pago del peaje. La consecuencia era que los automovilistas morosos debían pagar, por una multa no cancelada, muchas veces millonarias sumas, sin saberlo o no tener la información de cómo funcionaba el sistema de multas y de concesiones de las calles públicas privatizadas. El capitalismo neoliberal de letra chica oculta a la población los procedimientos reales, los suculentos intereses que mueven sus créditos y negocios.

Otro ejemplo lo protagonizó recientemente la gran tienda «La Po-

lar» de Santiago. Cerca de un millón de chilenos resultaron estafados con créditos otorgados con altos intereses cuando, ante la insolvencia de los clientes deudores y contraviniendo la ley, la empresa repactó sus deudas en forma unilateral, sin consultar a los consumidores. Como consecuencia de esta repactación unilateral, los deudores incrementaron considerablemente sus deudas, multiplicando por varias veces el valor real de los bienes adquiridos a crédito.

Se debe explicar que en Chile, debido a la estabilidad de la economía, supermercados, tiendas y bancos proporcionan créditos de compra a la gran mayoría de chilenos, incluidas personas de bajos ingresos. Este sistema desregulado y usurero de otorgamiento de créditos explotó, el año 2011, bajo el escándalo de la mencionada tienda. Esta y otras tiendas emplean el recurso de la «letra chica» para captar y engañar a sus clientes ciudadanos.

El capitalismo de letra chica acumula suculentas ganancias especulando con las necesidades de las personas que no están en condiciones de comprar bienes al contado, a quienes les vende fantasías de progreso a elevados precios, hipotecando la capacidad de pago y de trabajo, el futuro y la voluntad de los trabajadores que sueñan con vivir mejor.

El escándalo de «La Polar» ha generado una ola de indignación en la población y alarma en el Gobierno, obligándolo a ponerse –al menos discursivamente– del lado de los consumidores engañados, como consecuencia de las masivas protestas sociales. Los ejecutivos de esta multitienda han sido temporalmente privados de su libertad y están siendo procesados por el delito de estafa, gracias a la acción de los deudores organizados.

Algo similar ha ocurrido también con el movimiento estudiantil. En efecto, amplios sectores de estudiantes han tomado conciencia sobre los efectos perversos del sistema de educación superior, que ha ampliado considerablemente su cobertura, pero basado en el endeudamiento del joven y su familia: estudiar con créditos a pagar en el futuro. Estos créditos, según estudios, la mayoría de los egresados no podrán cancelar, debido a la imposibilidad de finalizar sus estudios (por razones socioeconómicas), a sus bajas remuneraciones o a la falta de trabajo.

ENDEUDAMIENTO DE LAS GENERACIONES

El sistema de educación superior chileno no está basado en un pacto de *solidaridad intergeneracional*, como en los restantes países miembros de la OCDE, sino en el endeudamiento y en la llamada responsabilidad individual. Lo mismo sucede con otros sistemas, como el de la salud y el de la previsión social. De esta forma no se construye sociedad, sino individuos segregados y apartheid social. En realidad, no se quiere construir sociedad ni comunidad. *El sistema individualista* –también imperante en la educación superior– *construye, planifica y legitima conscientemente la desigualdad social, como algo natural*. Sociológicamente hablando, se trata de un sistema de dominación que niega la ciudadanía y la verdadera libertad humana. Valga solo destacar que el endeudamiento no solo hipoteca el futuro del joven y su familia, sino que al mismo tiempo constituye un mecanismo que inhibe la libre expresión, la crítica y el compromiso social.

Debe llamarnos la atención el alto nivel de endeudamiento de los jóvenes que han estudiado con el sistema de crédito con aval del Estado. En efecto, cerca de 300.000 jóvenes –un tercio de los que participan del sistema de educación superior– están fuertemente endeudados con bancos privados, muchos de ellos prácticamente sin posibilidades de pago, sea por sus bajos ingresos, desocupación o desertión del sistema. Esta última alcanza a cerca del 45 % de los estudiantes, lo que al Estado chileno le cuesta caro. Así, durante los últimos cinco años, el Estado ha debido cancelar la suma de US\$ 2.091.000.000 por concepto de desertión y diferencia de interés de los créditos con aval estatal. Con esta suma, según datos del Banco Mundial, se podría financiar con becas a 181.000 estudiantes durante un año (Simonsen, 2011).

Al referirse al sistema de crédito con aval del Estado, el Banco Mundial sostiene que «la estructura actual redundante en incentivos perversos para los bancos, ya que se benefician de los peores escenarios para el Estado». En efecto, el Fisco termina siendo dueño de hasta la mitad de la cartera de créditos, pero su cobranza está en manos bancarias. Si el egresado no paga sus obligaciones, el Estado debe reembolsar el 90 % del crédito sin considerar intereses futuros. Esto significa que mientras más rápido los deudores entren en mora,

más rápido les llegará a los bancos la garantía efectiva de parte del Fisco. Además, los bancos recuperan gran parte de la inversión al revenderle al Estado una parte de la cartera de créditos a un precio mayor. El Informe del Banco Mundial establece que *la mora podría llegar al 50 % y que los profesionales deberán el 174 % de su sueldo.*

En otras palabras, la expansión del sistema universitario se ha hecho sobre la base de la inequidad, sobrecargando con deudas a los jóvenes y sus familias.

LA INSOPORTABLE DESIGUALDAD

Chile puede definirse como una sociedad emergente, con una clase media y pobre extensas –que abarcan más de dos tercios de la población– que luchan por participar del progreso y de las riquezas, creadas en las últimas décadas. Emergente en lo económico, pero con profundas desigualdades sociales. La desigualdad se extremó en el país bajo la dictadura militar y aún no ha sido superada. La desigualdad constituye una verdadera enfermedad social, instalada a partir del proceso de colonización y continuada en la época post Independencia. Las grandes luchas sociales, políticas e intelectuales del siglo XIX y XX han estado marcadas por el afán de disminuir estas brechas insostenibles e inhumanas de desigualdad, falta de libertad y de oportunidades para los sectores pobres y medios de la población, mientras que los sectores conservadores por lo general han respondido con egoísmo y fuerte represión. La última gran acción represiva de la derecha, aún presente en la memoria colectiva, fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Chile ingresó al siglo XXI con un modelo de economía neoliberal que, desde el capital, promete a las personas incorporarlas al consumo. Las expectativas crecieron rápidamente, no así los salarios ni el acceso a los bienes básicos, como la educación, salud y vivienda. La economía creció considerablemente, pero la riqueza se concentró y la desigualdad se mantuvo, incluso profundizó, generando un creciente malestar social.

El año 2006 se produjo el movimiento secundario de los «Pinguinos» que exigían mejorar la calidad de la educación. Fueron los

primeros en llamar fuertemente la atención sobre el fracaso de la educación municipalizada. No lograron mucho, pero dieron visibilidad al problema. Estos mismos actores son los que dirigen las actuales movilizaciones universitarias.

La desigualdad sigue penando a la política. Pero, a diferencia del pasado, la conciencia sobre la urgencia del problema ha crecido y se ha instalado en vastos segmentos de la sociedad chilena.

Según la Encuesta CASEN 2009, *una persona* que pertenece al 10 % de los hogares más pobres (decil I) gana, en promedio, \$ 87.000 al mes, mientras que *una persona* que pertenece al 10 % más rico (decil 10) gana, en promedio, \$ 1.545.000 al mes, es decir, 17,7 veces más que una persona pobre. Ahora bien, el poder adquisitivo de una familia depende de su número de miembros y de la cantidad de personas que trabajan en el hogar. Mientras en un hogar que pertenece al decil I viven 3,6 personas y trabajan en promedio 0,5 personas entre 18 y 65 años, en un hogar que pertenece al decil X viven 2,8 personas y trabajan en promedio 1,7 personas de entre 18 y 65 años. Es decir, la familia pobre cuenta con menos recursos para sustentar a más miembros. En este sentido, considerando solo los ingresos del trabajo, un hogar del decil X tiene en promedio 55,8 veces más ingresos que un hogar que pertenece al decil I o al 10 % más pobre (Huneus, 2011).

Es sabido que en los hogares más pobres la mujer se encuentra menos integrada al mercado laboral que en los hogares más ricos, lo que también contribuye a ensanchar la brecha de desigualdad.

Una reciente encuesta realizada por el Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral, aplicada a trabajadores mayores de quince años pertenecientes a las quince regiones del país (entre septiembre de 2009 y octubre de 2010) arrojó que el 60,8 % de los trabajadores declara ganar menos de \$ 250.000 mensuales (aproximadamente, US\$ 500), de los cuales 56 % son hombres y 74 % mujeres. Estos resultados representan a 7.392.170 encuestados.

Desagregando, resulta que un 32,6 % de las mujeres encuestadas dice que su ingreso es menor a \$ 136.000 (cerca de US\$ 161), mientras que solo un 15,1 % de los hombres señala lo mismo. Del total

de los encuestados, un 7,2 % declara recibir menos de \$ 64.000 al mes (cerca de US\$ 53).

En relación al nivel educacional, los ingresos más bajos se concentran entre quienes cuentan con enseñanza básica incompleta: 39 % de ellos declara ganar menos de \$ 136.000 al mes y 30 % hasta \$ 180.000. La precariedad se expresa también en la duración de los contratos: 15 % de las mujeres y 17 % de los hombres declaran contar con contratos de trabajo con una vigencia menor a un año.

En salud, 78,8 % de los trabajadores está afiliado a FONASA (sistema público), mientras que un 13,3 % se encuentra afiliado al sistema privado de ISAPRES, y un 5,1% declara no estar afiliado a ningún sistema de protección social. El 76,4 % de los trabajadores cotiza para su jubilación en el sistema privado (AFP), mientras que un 18,1 % carece de afiliación, lo que es muy grave. Finalmente, el nivel de participación en organizaciones de carácter laboral es sumamente bajo: solo un 12,5 % declara participar en algún tipo de organización gremial; entre los cuales un 8,1 % pertenece a un sindicato y 3,1 % a una asociación de funcionarios o colegio profesional (Peña, 2011). Estos datos hablan por sí solos sobre la precariedad laboral, dimensión central de la desigualdad social.

Un estudio reciente constata que la desigualdad se ha incrementado al nivel más alto en los últimos 30 años en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Ello se debe especialmente a la creciente diferencia entre los salarios, que representan el 75% de los ingresos de un hogar. Esta entidad estipuló que Chile y México exhiben la brecha más grande entre ricos y pobres, entre los 35 países que conforman la organización. En efecto, mientras el 10% más rico de la población gana como promedio 9,6% veces más que el 10% de la población más pobre; *en Chile, el 10% más rico gana 27,5 veces más que el 10% más pobre* (Mars, 2011). En México, la relación es de 26,3 veces y Estado Unidos es de 14,8 veces, también por encima del promedio de la OCDE. Chile y México están incluso lejos de Turquía, país que presenta una brecha de 16,3 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, da una señal de alerta al presentar el Informe:

«El contrato social se está empezando a deshacer en muchos países. La incertidumbre y los miedos a la exclusión han alcanzado a la clase media en muchas sociedades, la gente siente que está sufriendo una crisis de la que no son responsables, mientras esos con altos ingresos resultan perdonados» (Ángel Gurría en Mars, 2011: 19).

Resulta alarmante y preocupante el hecho de que desigualdad haya aumentado incluso en los países desarrollados, como lo señala la OCDE.

La desigualdad es un estado que denigra a la persona, arrojándola en la impotencia y en la imposibilidad de salir adelante, de ser más, de ser alguien, de ser sí mismo. La desigualdad representa la carencia de las carencias que afectan a una persona. En este sentido, los diferentes tipos de escuelas: municipales, privadas subvencionadas y privadas, reflejan de manera extrema la existencia de desigualdad en el acceso a la educación. Es sabido que la mayoría de los establecimientos municipalizados presentan graves problemas de calidad, tanto en docencia como en infraestructura, lo que se refleja en bajo rendimiento escolar y en frustración personal.

La desigualdad estructural representa para Chile un verdadero sistema de estratificación social. Las clases sociales, de las que no se habla, están representadas de manera segregada en los diferentes tipos de escuelas. Esta, en vez de integrar niños y jóvenes provenientes de diferentes sectores, los separa y reproduce social y culturalmente como individuos de diferentes clases sociales, quienes, además, viven en barrios o comunas territorialmente segregadas. El sistema de escuelas municipalizadas, privadas subvencionadas y privadas pagadas, introducido por el régimen militar y aún vigente, busca intencionadamente *producir y reproducir la desigualdad*.

En el diseño de la política educacional impuesta por la dictadura militar se sitúa estructuralmente la desigualdad y los graves problemas de calidad que ha mostrado la educación chilena hasta nuestros días. Por lo mismo es que no corresponden las siguientes aseveraciones de José Joaquín Brunner: «Si alguien cree que cambiando el diseño institucional vamos a tener una educación de otra calidad, está equivocado», y la «educación gratis para todos

es ir en contra de la igualdad» (2011). Brunner y otros autores que han defendido –o se han adaptado– en los últimos años al modelo de las privatizaciones y el papel dinamizador y hegemónico de lo privado en la construcción de progreso social, no entienden lo que está pasando con el movimiento estudiantil, precisamente porque nunca se han cuestionado la validez del modelo económico-social basado en el mercado.

Contrariamente a la opinión de Brunner, una investigación realizada recientemente por la UNESCO, que comparó los sistemas educacionales vigentes en Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, llegó a la conclusión de que nuestro sistema educativo fomenta la desigualdad. En efecto, el estudio sostiene que:

«El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos».

El estudio de la UNESCO se refiere también al tema de las becas y subvenciones que caracteriza muy particularmente al sistema chileno:

«Este sistema protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público. Es por ello que las controversias relativas a este sistema giran en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación».

Por otra parte, al comparar la legislación de los países estudiados, señala:

«El estudio muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son muy explícitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilizar la educación, incluso prohibiendo la suscripción de tratados internacionales que faciliten que la educación sea tratada como un bien de consumo».

Por su parte, la Constitución chilena –de acuerdo con el estudio de la UNESCO– «enfatisa la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, mientras que la finlandesa

otorga garantía de oportunidades educativas y la uruguay acentúa la utilidad pública de la educación. Es decir, en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho» (OREALC / UNESCO, 2011).

Las conclusiones de este nuevo estudio de la UNESCO prácticamente ratifican lo que los estudiantes movilizados han venido sosteniendo, en cuanto a la caracterización del sistema educativo chileno, teniendo como trasfondo el tema de la desigualdad.

En el fondo, la desigualdad estructural construye a la persona en la desigualdad, la hace desigual frente a otros, a los que ubica en jerarquías o capas «superiores» de la sociedad. De esta manera, se construye socialmente la relación dominación/subordinación. En contra de este proceso de «desigualación» se rebelan los jóvenes movilizados.

Resulta interesante observar que al proceso de movilizaciones –paros y tomas– se han incorporado también jóvenes de establecimientos privados-subsuencionados y privados. En las marchas se expresa la comprensión y solidaridad con los que están mal en la sociedad y, al mismo tiempo, se superan las separaciones sociales y construyen relaciones humanas.

Este es el contexto de las movilizaciones estudiantiles: la profunda, escandalosa e insoportable desigualdad social imperante en el país. La justa exigencia de una educación pública, gratuita, de calidad, democrática y consagrada como un derecho constitucional, busca superar las enormes distancias sociales instaladas en Chile. Y el país cuenta con los recursos para satisfacer estas demandas. El Gobierno y la oposición deben comprender este clamor social y dar el consenso necesario para generar una gran oportunidad para los jóvenes y el desarrollo cualitativo del país.

Esta desigualdad no sólo es el motivo de fondo de las movilizaciones. Es también la realidad que ha inducido a que un grupo de alumnos secundarios de la ciudad de Santiago hayan tomado la decisión extrema de realizar una huelga de hambre, como recurso último y desesperado de apoyo a dicha causa.

La desigualdad estructural puede también explicar comportamientos humanos extremos en tiempos de crisis.

Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, se preguntaba recientemente sobre la forma de ocupación del espacio público frente a las crisis, desastres u otros acontecimientos similares. Analizando diferentes experiencias de crisis internacionales, el autor se pregunta: ¿Por qué se comportan de forma tan opuesta los anglosajones frente a los nórdicos o los nipones? ¿Por su religión? Por nuestra parte podríamos agregar: ¿Crisis valórica? ¿Hedonismo? ¿Estrategia de sobrevivencia? ¿Lucha de clases? ¿Pánico? ¿Desesperación? ¿Fin del mundo? Las explicaciones pueden ser múltiples.

«No, la clave explicativa reside en la desigualdad. Sencillamente, la nórdica y la japonesa son las sociedades más igualitarias del mundo desarrollado, y por eso allí apenas hay espacio público para la frustración y la agresividad. En cambio, los países anglosajones son las sociedades más desiguales del capitalismo occidental, y por eso en su espacio público se manifiesta ante todo la envidia, la rapacidad, el resentimiento y la ansiedad por el estatus. Son sociedades presididas por la especulación institucionalizada en sus economías financieras que hacen de la codicia posesiva su primer imperativo categórico. Si los bancarios anglosajones carecen de escrúpulos para lucrarse con la ruina ajena, y esa clase de rapacidad depredadora se pone como ejemplo de éxito social, ¿cómo sorprenderse de que los jóvenes anglosajones también se crean con derecho a disponer sin freno de los bienes ajenos, ocupando el espacio público para saquearlo a placer haciendo impune ostentación de su rapaz avidez?» (Gil, 2011, 23-24).

La desigualdad tiene muchas dimensiones e implicancias en la estructuración de las sociedades modernas, sean éstas desarrolladas o en vías de desarrollo. No se limita solo al aspecto económico o las dificultades de acceso a un determinado servicio básico, como la educación. Por ello es que no da lo mismo entonces tener una sociedad desigual o más igualitaria. Como lo plantea Gil, la desigualdad explica los comportamientos sociales, condiciona fuertemente el destino de la vida individual y las interacciones humanas.

Un interesante estudio realizado por Wilkinson y Pickett analiza con amplitud y visión socioantropológica los múltiples aspectos e impactos de la desigualdad en las sociedades contemporáneas.

«La clase social y las diferencias de estatus causan formas de dolor social similares. La injusticia, la desigualdad y la no cooperación son formas de exclusión. Los experimentos que han demostrado los efectos de ser clasificado como inferior ponen de manifiesto el dolor social que provoca la exclusión. Ese otro dolor social que a veces lleva a la violencia cuando alguien se siente decepcionado, humillado o expuesto al aprobio, forma parte del mismo panorama» (Wilkinson y Pickett, 2009: 238).

Según la investigación de estos autores, la desigualdad influye directamente en el rendimiento escolar, en los embarazos adolescentes, en la autoestima, en los niveles de confianza o desconfianza, en los niveles de violencia social, en las expectativas, en la movilidad social, en la densidad de los conflictos por los recursos, en la delincuencia, en la segregación geográfica o territorial, en los potenciales de cooperación, en la integración o desintegración social, en las formas de organización del poder (mayor o menor jerarquía), en la mayor o menor intensidad del consumismo (competencia por estatus), en los niveles de salud mental y enfermedades, en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento y cambio global, en la estratificación social, entre otros. Influye incluso en el desarrollo de la inteligencia social y en la sociabilidad: «conforme aumenta la desigualdad, la socialibilidad –medida en términos de vida comunitaria, de confianza en los demás y en nivel de violencia– disminuye» (ibídem: 221).

La desigualdad influye también en los niveles de sustentabilidad. Una sociedad más igualitaria, según el estudio citado, muestra mayor capacidad de reciclaje de sus propios residuos y muestra una mayor capacidad de adaptación a nuevos estilos de vida, más amigables con la naturaleza y los desafíos del cambio climático.

Al parecer, de acuerdo a la argumentación precedente, existiría una correlación entre la magnitud e intensidad de los problemas sociales y el índice de desigualdad. En el caso chileno, los jóvenes se inspiran en la justicia social y, por lo tanto, la desigualdad se encuentra en el trasfondo de las protestas. La inmensa mayoría no lo hace con violencia, sino con la energía y el noble anhelo de mejorar las oportunidades de realización personal de las futuras generaciones. Grupos minoritarios, que han tocado más a fondo la desesperación y

el abismo de la desigualdad, reaccionan agresivamente desde el duro sentimiento de la exclusión.

Por lo tanto, los modelos de desarrollo –que son políticos, económicos y culturales– juegan un papel fundamental a la hora de enfrentar crisis de cualquier naturaleza, tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones.

No somos anglosajones, pero nuestro modelo de desarrollo y de exitismo consumista es de tipo anglosajón, de creencia en el mercado y en el individuo ascendente, de minimización del Estado y de sus prestaciones sociales. El individuo debería autosostenerse. El modelo anglosajón se basa en la libertad del individuo contra el Estado de bienestar social nórdico que busca combinar libertad individual con sociedad solidaria que comparte bienes y responsabilidades.

Contra este modelo luchan los jóvenes movilizados. Quieren una sociedad más solidaria, justa, democrática e inclusiva. Sus sueños corresponden a una utopía realizable, como ha sido entendido y analizado también en otras latitudes del mundo globalizado:

«Confiamos en haber demostrado que se puede construir una sociedad mejor, una sociedad más igual en la que haya menos diferencias de estatus y menos jerarquía, una sociedad en la que se recupere el valor de vivir en comunidad, en la que seamos capaces de hacer frente al reto del calentamiento global, en la que tengamos el control de nuestro trabajo y lo desarrollemos en comunidad y en democracia; una sociedad, en suma, que nos permita compartir los beneficios obtenidos de una manera más equitativa que hasta ahora. No se trata de una utopía: los datos demuestran que reducir la desigualdad aunque solo sea un poco, como ya sucede en algunas democracias de mercado, supone una diferencia importante en la calidad de vida. Ahora se trata de desarrollar una política que se comprometa a aprovechar las oportunidades institucionales y tecnológicas que harán posible el modelo de sociedad al que aspiramos» (ibídem: 289).

Los estudiantes movilizados probablemente intuyen lo que significa luchar para lograr mayores niveles de igualdad en la actual sociedad chilena, especialmente en la educación. Sin embargo, nuestra desigualdad no sólo es de carácter estructural. La desigualdad se

instaló en Chile con el colonialismo. Ello explica lo difícil que resulta superarla. Históricamente la desigualdad se ha «naturalizado», se ha instalado como un fenómeno «insuperable». Sin embargo, como todo problema social, es también una construcción social que puede ser superada por otra construcción social. Los estudiantes han comprendido el complejo juego de la desigualdad y, por lo mismo, después de la experiencia traumática de 2006 (de los «Pinguinos»), exigen mayores niveles de *igualdad, ahora*, lo que es perfectamente posible en el Chile actual.

SISTEMA HEREDADO

A la sociedad chilena nunca se le ha preguntado si está de acuerdo o no con el sistema educacional actual, pues éste se impuso por la fuerza durante la dictadura militar, y, por lo tanto, *carece de legitimidad*, al igual que el modelo económico neoliberal y el sistema político binominal.

Hasta 1973 las universidades jugaron un papel importante en la formación de profesionales con sentido de servicio público, y, por lo tanto, potenciales sujetos del cambio social y político en marcha. De allí el ensañamiento con las universidades, el cierre de carreras, especialmente del área de las ciencias sociales, la persecución de estudiantes y académicos progresistas y la intervención con rectores delegados. Las universidades fueron fraccionadas territorial y también por disciplinas, como por ejemplo está el caso de la Universidad de Chile, que dejó de ser un referente nacional. De esta manera se buscaba reducir su importancia e influencia en la discusión de los temas nacionales y regionales.

En forma paralela, a partir de 1981 el Gobierno militar permitió la creación de universidades privadas, con el propósito de debilitar aún más las públicas y tradicionales y de introducir el incentivo económico en su gestión. Si bien se prohíbe el lucro en la actividad universitaria, la sola existencia de entidades privadas induce al florecimiento del negocio. Se buscaba privatizar el sistema de educación superior, tal como fue sucediendo con el correr de los años. Y como el capitalismo chileno es altamente desregulado, los inversionistas privados que entran

a la «industria universitaria» se las arreglan para obtener excedentes y transar sus acciones en el mercado. Así, negocios inmobiliarios, elevados aranceles y endeudamientos de los estudiantes y sus familias forman parte del negocio. Y ahora buscan recursos estatales.

Este sistema, en lo esencial, aún no ha sido cambiado, a pesar de que ha sido motivo de muchas movilizaciones de estudiantes y académicos, en los últimas décadas, sin mayores consecuencias. De allí que persistan las movilizaciones y la firme voluntad de los estudiantes –ahora también de los docentes– de lograr un cambio importante en el sistema: un cambio de paradigma, señalan en sus documentos y consignas.

La falta de legitimidad del modelo educacional y las fuertes divergencias existentes entre la política del Gobierno y los cambios perseguidos por los estudiantes movilizados, han hecho surgir, en diferentes sectores sociales y políticos, la idea de zanjar las diferencias mediante un *plebiscito*. Si bien aún no existe consenso sobre su conveniencia y eficacia, el solo planteamiento de su posibilidad o necesidad tiene como trasfondo el problema de la legitimidad del sistema educacional cuestionado.

CONSECUENCIAS DEL MODELO ACTUAL DESREGULADO Y DESFINANCIADO

El actual sistema de educación superior es insostenible. Mientras las universidades del Consejo de Rectores no pueden seguir cumpliendo, sin los recursos públicos necesarios, sus complejas y estratégicas funciones: formación de profesionales de calidad, investigación, innovación y transferencia tecnológica a la sociedad; los jóvenes y sus familias no pueden seguir endeudándose para adquirir competencias profesionales y transformarse en ciudadanos útiles al desarrollo de su propio país.

Por otro lado, el sistema de educación superior se ha caotizado. La falta de regulación, a través de una Superintendencia, lo ha hecho crecer inorgánicamente, sin criterios ni mecanismos de control de calidad ni planificación mínima de la oferta. Mediante costosas campañas publicitarias se ofertan profesiones sin posibilidades reales

de trabajo, de dudosa calidad o, simplemente, con el mercado laboral ya saturado. Se oferta en exceso mucho de lo mismo, de carreras de fácil financiamiento, sin considerar el engaño a los jóvenes y sus familias. La posibilidad del rápido negocio hace que ahora las universidades privadas oferten admisiones de alumnos/as en cada semestre, incrementando irresponsablemente la cantidad de futuros egresados, sin ninguna planificación ni mucho menos certeza de empleabilidad futura.

La responsabilidad inicial del caos y desregulación corresponde a la dictadura militar. Luego, los gobiernos de la Concertación abrieron el sistema, haciendo posible que muchos jóvenes continuaran estudios superiores sin ningún respaldo. En la actualidad estudian cerca de un millón de jóvenes en las veinte y cinco universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, en los planteles privados y en los Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica. Y en relación al financiamiento, hasta la OCDE lo ha cuestionado:

«De acuerdo a las normas internacionales, la Educación Superior en Chile es cara y gran parte de su costo recae en los estudiantes y sus familias y una parte muy pequeña en el Estado» (OCDE, 2009: 71).

«Chile debería planificar el doble de su inversión pública en Educación Superior para alcanzar el nivel de esfuerzo público comparable a Japón» (ibídem: 225).

Profundizando lo anterior, el referido informe reconoce que el gasto público de Chile representa solo un 0.3 % del PIB, mientras que países como Finlandia invierten el 1.7 %. Asimismo, al comparar nuestra realidad con la de otros países latinoamericanos, se tiene que nuestra inversión es notoriamente inferior a las de México y Brasil, cuyos gastos representan el 0.9 % y el 0.8 % de sus respectivos PIB. Según la OCDE, el gasto de Chile por estudiante representa menos de la mitad de lo que gasta Bolivia.

Sin embargo, el actual Gobierno agrava la situación de crisis al pretender profundizar el proceso de privatización y negarse a hacer aportes estatales significativos, que se acerquen a las exigencias de la Organización Económica para el Desarrollo, OCDE, que plantea

que Chile debe duplicar sus aportes del PIB al financiamiento de la educación superior.

La negativa del actual Gobierno a introducir reformas de fondo al sistema es lo que finalmente explica el incremento de las protestas y movilizaciones de estudiantes, académicos y administrativos que tensan el país.

Las masivas protestas ya produjeron la renuncia del ministro de Educación Joaquín Lavín, quien, junto con no dar una respuesta adecuada a las demandas estudiantiles, fue fuertemente criticado por sus intereses económicos en una universidad privada que opera con criterios de lucro. Incluso fue cuestionado por representantes de universidades privadas, quienes consideraron que el ministro «no se las jugó» decididamente por la defensa del lucro en la actividad universitaria.

El ministro Lavín fue reemplazado por Felipe Bulnes, quien convocó a los actores a conversaciones y propuso un documento de acuerdo, el que finalmente también fue rechazado por los estudiantes universitarios agrupados en la CONFECH y los secundarios. La propuesta del ministro fue considerada ideológica de continuidad del modelo neoliberal y no referida a las demandas específicas exigidas por los estudiantes en documento entregado al Ministerio. Los temas centrales que no aparecen bien abordados en la respuesta del ministro serían: especialmente el problema del el financiamiento basal a las universidades, el incremento de las becas a estudiantes, la solución del endeudamiento estudiantil, la democratización de las instituciones universitarias, la falta de claridad sobre las modalidades institucionales de desmunicipalización de la enseñanza básica y media, entre otras, etc. En el fondo, la principal crítica apunta al lucro y por ello se propone la *gratuidad de la educación y la democratización de la gestión*, que se sitúa en el centro de las demandas y movilizaciones que conmocionan actualmente al país y sus regiones.

MOTIVOS DE LAS MOVILIZACIONES: CAMBIOS AHORA

El rostro y líder más visible del movimiento social por la educación, Camila Vallejo, estudiante de Geografía, Presidenta de la Federación

de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), expresa y representa con claridad la urgencia de la demanda por cambios:

«La mayoría de los estudiantes están manifestando ese espíritu de seguir adelante, porque sienten que si no es este año podría no ser nunca. Obviamente, también quieren ganancias concretas por parte del movimiento, saben que hay proyecciones políticas muy importantes y el tema es que, como este mismo movimiento ha ido adquiriendo un carácter social, se han puesto en el debate puntos que no son de resoluciones inmediatas, como reformas tributarias, renacionalización de los recursos, cambios constitucionales, que de todas maneras hay que mantenerlas como demandas porque unifican las movilizaciones de muchos sectores y pueden además proyectar cambios y reformas mucho más políticas... Por otro lado, el objetivo final que tenemos y por el cual ya estamos avanzando es el tener un sistema nacional de educación pública, gratuita, democrática, pluralista, etc. Es algo que no se va a evidenciar ahora, sino que será un trabajo sistemático en los próximos años y que tiene que quedarse» (*El Siglo*, 15 de julio de 2011).

Otro líder carismático que también destaca por su claridad y presencia en los medios de comunicación es Giorgio Jackson, estudiante de Ingeniería y Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), quien, a pesar de las desconfianzas existentes entre los dirigentes de la CONFECH, debido, según él, a que «hay mucho escepticismo» y opciones diferentes entre los dirigentes agrupados en la CONFECH, defiende la estrategia común del movimiento:

«El norte ha sido algo definido de manera democrática y que la ciudadanía ha apoyado. A pesar que haya matices dentro de las propuestas, es un norte en común: queremos cambiar el paradigma educacional hoy».

«Lo peor que nos puede pasar es que se nos diluya esto... El tema de la educación llegó para instalarse y el tema de la falta de democracia y los cambios institucionales, también. Pero si no somos capaces de capitalizar hoy algunas de las demandas que ya hemos instalado, para que empiecen a ser políticas públicas, creo que se nos puede diluir entre las manos, se nos

puede escapar. Y ese es el principal miedo que tengo: que no sepamos aprovechar el momento indicado y presionar a los actores específicos para que logremos transformar el país» (*The Clinic*, 18 de agosto de 2011).

Jackson está consciente de las dificultades que enfrenta el movimiento para lograr los objetivos: «Todavía no hemos logrado doblarle la mano ideológicamente al Gobierno». Por lo mismo que, consciente de la fuerza que el movimiento ha acumulado en la sociedad, y de sus dificultades, presiona para que el movimiento actúe más ejecutivamente. En esta dirección, sostiene: «Es la hora de tomar decisiones» (ibídem). Pero la dinámica creciente del movimiento y la negativa del Gobierno a ceder en lo esencial, dificultan la toma de decisiones. Y, por lo tanto, persisten las movilizaciones, sin que aún surjan indicios de una pronta solución al conflicto.

Los miles de estudiantes movilizados exigen *cambios estructurales ahora*, no mañana. Y quieren sus propios cambios, no los del Gobierno ni los de la oposición en el Parlamento. No desean *Mesas de Diálogo* que no satisfacen a los movilizados, como ocurrió con el movimiento de los «Pingüinos» del año 2006. Los secundarios plantean la estatización de los establecimientos municipalizados, pase escolar los 365 días del año, arreglo de los edificios afectados por el terremoto y mayores recursos para la enseñanza técnico-profesional. Los universitarios, por su parte, exigen: fin al lucro, gratuidad de la educación, mayores recursos basales para las universidades del Consejo de Rectores, incremento de las becas, fin de la PSU (Prueba de Selección Universitaria) y establecimiento de un sistema de selección universitaria justo, solución al problema del endeudamiento estudiantil, democratización de las universidades, etc. Entre ambos sectores movilizados existen puntos comunes, como la defensa del sistema de educación pública que, en verdad, no existe y debe construirse con la participación de todos los actores involucrados en la educación.

El sistema municipal de educación prácticamente ha fracasado, cuestión que ha sido reconocida no sólo por los estudiantes sino también por los municipios que los sostienen. A esta altura, todo el mundo lo ha reconocido. Por lo tanto, debe ser sustituido por uno mejor. No se ve otra alternativa viable y efectiva que no sea su retorno

descentralizado al Estado con participación activa de las Regiones, como por lo demás es la realidad en los países de la OCDE.

El hecho de que el Estado asuma la principal responsabilidad no significa volver a un concepto pasado de Estado, como lo expresan con temor los neoliberales. Hoy se requiere de un nuevo Estado, no autoritario, verticalista ni centralizado. Se requiere de un Estado moderno, descentralizado y con mayor autonomía de las Regiones, que coordine y regule, que vele y garantice el bien común e interactúe con los ciudadanos involucrados; en el proceso de enseñanza-aprendizaje: con los jóvenes, padres, profesores e instituciones educacionales.

Ahora bien, en relación a los cambios de carácter estructural que el sistema de educación nacional requiere, los dirigentes estudiantiles tienen conciencia de que no podrán alcanzarse en forma inmediata sino gradual, como lo manifestó Camila Vallejo a la salida de la reunión de la CONFECH el 13 de agosto de 2011, en la Universidad de Concepción:

«Creo que la gratuidad tiene que ser algo progresivo, sobre todo en educación terciaria. No es algo que se pueda implantar de un momento a otro, pero sí tiene que darse el camino para poder avanzar en esa dirección... El primer paso es garantizar la gratuidad a los siete primeros deciles y los próximos años vamos aumentando el presupuesto y vemos cuáles son las reformas necesarias que hay que hacer para que el financiamiento a los que tienen mayores recursos no sea regresivo, como lo sería con el actual sistema tributario» (*El Diario de Concepción*, 15 de agosto de 2011).

Sin embargo, lo que sí tienen claro –al menos así lo declaran– es que no estarían dispuestos a sentarse a negociar con el Parlamento, la oposición o aceptar una mediación de la Iglesia Católica (como había sido ofertado recientemente por el Arzobispo Monseñor Ez-zati), mientras no tengan la certeza de que obtendrán una respuesta satisfactoria de parte del Gobierno a sus peticiones centrales. Ellos tienen claro, por ejemplo, que en materia de financiamiento, central en sus peticiones, sólo el Gobierno tiene competencia y facultades legales para impulsar iniciativas legislativas. Ello explica su negativa a negociar con otras fuerzas antes que el Gobierno se pronuncie

sobre estas materias trascendentales y les haga llegar una propuesta concreta de financiamiento a la educación superior.

Luego de largos meses de movilizaciones, acompañadas de acciones violentas protagonizadas por grupos minoritarios seguidas de fuerte represión policial (como la ocurrida el 4 de agosto contra una marcha no autorizada), el encuentro de la CONFECH realizado en Concepción el 13 de agosto de 2011, se esperaba con mucha expectativa, pues existía la posibilidad de que esta aceptara la oferta de negociación tripartida (oposición, Gobierno y movilizadores) planteada por las fuerzas políticas del Parlamento. No obstante, la propuesta fue rechazada: «Está la disposición de sentarse a trabajar, pero con garantías mínimas y en este momento no hay ninguna» (ibídem). Por lo tanto, anuncian, seguirán las movilizaciones.

EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD: SER Y HACER SOCIEDAD RECONSTRUYENDO LO PÚBLICO

Las movilizaciones estudiantiles, al igual que otras que suceden en el mundo desarrollado y emergente, no solo demuestran el descontento con el orden social imperante, sino que también constituyen nuevas formas de construir sociedad.

En el desarrollo de las sociedades modernas existen diferentes momentos de estructuración, en los que intervienen diversos factores y actores que influyen en su ordenación. Hay, por ejemplo, momentos político-institucionales, imperiales, económicos. Prácticamente todas las sociedades latinoamericanas fueron construidas en gran medida desde el Estado. Luego desde la política. En las últimas décadas desde la economía mundial, desde las grandes empresas y el capital financiero.

La sociedad nunca tuvo una oportunidad de autoorganizarse o autoconstituirse. Siempre fue constituida desde mediaciones e imposiciones, lo que influyó necesariamente en las personas que la componen. Las movilizaciones y protestas sociales muestran el modelo de sociedad del siglo XX en crisis, tornando obsoletas instituciones, modalidades de mediación, formas de representación política, normas y valores de socialización.

Emerge la sociedad en forma de tejido social vivo y, directo, con nuevas formas de comunicación, normas y valores. Surge o re-surge, por ejemplo, el compromiso y la responsabilidad intergeneracional, en el momento en que se lucha por derechos para las generaciones futuras. Lo mismo es válido para la defensa de la naturaleza, que surge como un valor asemejable al de la defensa de la educación pública.

Ha llegado el tiempo de la sociedad. Eso explica la exigencia de los cambios ahora. No esperar promesas de la clase política o de una utopía. La utopía debe realizarse ahora, en el tiempo y en el espacio en los que transcurre la vida de los que pueblan la tierra y han sido excluidos de los beneficios de los avances del conocimiento y la tecnología. Surge la sociedad contra el Estado y los partidos políticos tradicionales. La sociedad se constituye con movimientos horizontales y de gran fluidez, no entendibles por los códigos autoritarios y jerárquicos de la clase política.

¿Cómo se constituye la sociedad? Se autoconvoca. Unos y otros, antes separados por el mercado y el ultraindividualismo, toman conciencia de su precariedad en la desigualdad y, al mismo tiempo, toman conciencia del poder que representan como jóvenes informados y creativos, luego se intercomunican el saber que presentan signos comunes. En un primer momento se dan cuenta de la situación similar en la que viven, del futuro oscuro que les espera (el endeudamiento) y de que son muchos –la gran mayoría– los que padecen el mismo mal. Salen a marchar y empiezan a reunirse para discutir su situación y hacer levantamiento de necesidades y demandas para ser exigidas al Gobierno. Las marchas se repiten y van ganando cada vez más adherentes, más personas se sienten interpretadas por las protestas y se unen a las movilizaciones. Los individuos, otrora solos, se empiezan a intercomunicar, descubren sus intereses comunes y manifiestan sus sensibilidades, poniendo en común ideas y proyectos, muchas veces diferentes, pero encadenados en redes técnicas y humanas.

De las protestas y movilizaciones se empieza a construir un movimiento social cada vez más masivo, diverso y poderoso, que busca reconstruir la sociedad mediante lazos y nuevos valores societarios. El movimiento da continuidad a las protestas y movilizaciones, y desde su dinamismo interno emerge la sociedad. Es una *sociedad antilucro*, desprivatizadora, solidaria, más libre y democrática, defensora

de lo público como el espacio en el que se construye a sí misma. Es una sociedad hastiada de la ganancia y los abusos que han invadido todas las esferas de la vida humana. Buscan construir otro modelo de sociedad, que surja de ellos mismos, sin mayores mediaciones ni imposiciones externas. Una sociedad referida así misma, con ser e identidad propios.

CREATIVIDAD Y TRANSVERSALIDAD SOCIAL EN LAS CALLES

Las movilizaciones, en su mayoría, se han caracterizado por ser pacíficas, aunque a veces algunas han terminado con actos violentos y vandálicos, descontrolados e instrumentalizados por grupos minoritarios, interesados en impulsar especies de estallidos sociales o simplemente en saquear. Las movilizaciones han ido progresivamente creciendo en masividad y receptividad ciudadana, lo que implica que cada vez resulta más difícil su control. Lamentablemente se producen desbordes. La repuesta, muchas veces violenta de la policía a dichos desbordes, incide también en los disturbios, agravándolos.

La violencia distorsiona y desprestigia al movimiento y, por lo mismo, debe ser rechazada de plano. Los dirigentes estudiantiles la repudian pero, a pesar de sus esfuerzos por evitarla, ésta se produce. El país ya vivió 17 años de violencia durante la dictadura militar que significaron sufrimientos para miles de chilenos, cuyas consecuencias aún subsisten y las heridas aún no se cierran. Las manifestaciones pacíficas, en el marco democrático, el respeto a la vida y a las opiniones y el diálogo deben ser los instrumentos fundamentales para obtener un sistema público de educación de calidad.

Por su parte, las Fuerzas Especiales de Carabineros han desplegado acciones de fuerza desproporcionadas, como ocurrió el 4 de agosto del 2011 con motivo de la prohibición gubernamental de la manifestación anunciada por los estudiantes secundarios, y universitarios (CONFECH) y el Colegio de Profesores, en Santiago. La prohibición hizo que los organizadores desafiaran a la autoridad tratando de ingresar a la Alameda Bernardo O'Higgins, lugar preferido por los manifestantes para protestar, debido a su visibilidad y centralidad como arteria principal del tráfico del Gran Santiago y su

cercanía a La Moneda, sede del Gobierno. Como lo demuestran las experiencias democráticas del mundo, constituye un error tratar de resolver los problemas de carácter político o social, con la policía. El orden democrático debe permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho a manifestarse, sin ser reprimidos. Las fuerzas del orden y los gobiernos que las controlan deben garantizar dicho derecho.

El Gobierno movilizó a un fuerte contingente policial para impedir la realización de la manifestación no autorizada del 4 de agosto. Ello fue fuertemente criticado por la oposición política, comparando las acciones con las prácticas represivas del régimen militar de Pinochet y anunciando una posible acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. El Gobierno ha mostrado una incapacidad política para dar respuesta a las demandas que satisfagan a los movilizados y los motive a dejar las movilizaciones y sentarse a negociar. Probablemente el Gobierno no ha evaluado adecuadamente el carácter y profundidad del malestar social, así como la fuerza que ha ido adquiriendo el movimiento social con el tiempo y sus negativas a ceder. Precisamente las respuestas demasiado genéricas, ambivalentes o ideológicas del Gobierno han hecho que el movimiento se radicalice y acumule más fuerza y simpatías en la población, especialmente en los sectores medios y bajos, afectados por las políticas privatizadoras imperantes en el sistema educacional. Muchas veces, debido a la gran legitimidad del movimiento en la sociedad, incluso personeros del Gobierno conservador, ministros, muestran tácticamente comprensión con las movilizaciones estudiantiles.

La legitimidad del movimiento se constata en las encuestas. Según la encuesta CEP del 4 agosto de 2011, el tema de la educación, de su calidad, se ha transformado en el segundo en importancia en la percepción de los chilenos. El problema más importante sigue siendo la delincuencia (47 %), seguido de cerca por la educación (44 %) y la salud. Por otra parte, el 80 % de los chilenos se declara contrario a la existencia del lucro en la educación. Correlativamente, debido a las movilizaciones y otros errores del Gobierno, la popularidad del Presidente Piñera ha sufrido una fuerte caída, alcanzando un escaso 26 % (Encuesta CEP, 4 agosto 2011), la más baja obtenida por un Presidente tras la recuperación de la democracia. De los resultados

se interpreta que los temas de la calidad y el carácter público de la educación han permeabilizado a sectores importantes de la población, castigando fuertemente la política del Gobierno, pero también a la oposición (a la Concertación), por los errores cometidos en el pasado.

Por lo mismo es que las movilizaciones han trascendido a los estudiantes, incorporando a personas de diferentes edades y actividades. Así, por ejemplo, se realizó en Santiago una masiva y exitosa Fiesta Familiar por la Educación, concitando una amplia participación de familias motivadas por el hecho de que el endeudamiento nos afecta a todos, también a las generaciones venideras. Actos similares se han organizado también en otras ciudades como Concepción y Valparaíso.

En las manifestaciones pacíficas se ha expresado mucha imaginación, demostrando que los jóvenes chilenos son creativos, poseen sentido del humor e invierten tiempo en mostrar de una manera alegre y festiva temas tan trascendentales como la calidad de la educación y su futuro profesional y social. En este sentido, puede sostenerse que los tiempos efectivamente han cambiado. Ahora, el convencimiento, las ideas o ideales se combinan con la alegría, sin, por otro lado, dejar de lado la consecuencia del trasfondo que los moviliza. Ello simboliza que vivimos en una sociedad mejor, una sociedad juvenil que aprecia la vida y se juega por la igualdad social, valores que forman parte del imaginario republicano de construir un Chile con democracia, libertad, solidaridad y justicia social.

ES POSIBLE UN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO

Es posible y necesario cambiar el sistema educacional imperante en el país. Se puede empezar a cambiarlo de manera profunda, como lo exigen los estudiantes, el personal docente y no docente. Para ello se requiere no solo de la presión de los movilizados, sino también del apoyo de los partidos políticos, especialmente en el Parlamento, donde deberían finalmente aprobarse nuevas leyes que cambien el sistema de educación y que el Gobierno enviará en algún momento, aunque sus contenidos probablemente no coincidirán con los planteamientos de los estudiantes.

El cambio debería apuntar a establecer progresivamente un nuevo

sistema de educación financiado y regulado por el Estado chileno. Podría iniciarse con el financiamiento, mediante becas, a todos los jóvenes que cumplan los requisitos de ingreso a la universidad y que pertenezcan, por lo menos, a los tres primeros quintiles, y financiamiento basal sólido a las universidades que prestan y crean servicios y bienes públicos, como lo son las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. No debemos olvidar que las familias en Chile no solo deben cancelar aranceles y matrículas, sino que también deben financiar su mantención en los lugares donde estudian.

El momento actual es propicio para discutir e implementar una reforma de fondo. La transición del desarrollo medio al desarrollo más avanzado de Chile requiere de buena formación profesional, de investigación en todas las áreas del conocimiento, de innovación y de oportunidades reales para las nuevas generaciones. El conocimiento se requiere para agregar valor a los bienes que se producen y a las personas que componen la sociedad.

El Consejo de Rectores tiene mucha razón cuando plantea e insiste en que lo que la educación superior hoy requiere es una *política de Estado*. Ello quiere decir que no basta con medidas parche de gobierno. También está indicando que la educación no puede seguir estando sometida al simple juego de las fuerzas oscuras y ciegas del mercado. Y, por cierto, este reclamo va más allá de la falsa distinción entre universidades estatales o no estatales. El Estado debe redefinir el sentido de lo público, que en la época moderna no se reduce al concepto jurídico de la mera propiedad, sino a la visión y misión que se autoadjudica una institución universitaria. Pública es aquella actividad orientada al desarrollo positivo de la comunidad, a la defensa de sus principios, tradiciones y valores, sin perseguir intereses particulares ni recompensas económicas, como lo constituye la ganancia indebida o el lucro. Público es aquello que se define como intrínsecamente vinculado a los destinos y desarrollo del país y sus regiones, a la defensa de sus instituciones republicanas, su cultura, al cuidado de su medio ambiente, de sus recursos naturales, de sus símbolos, regiones y de los derechos humanos. Así lo reafirma el Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy:

«Nosotros apoyamos absolutamente que las universidades estatales tengan, por un lado, una ley que les permita destrabar la burocracia... y también apoyamos a las universidades del Estado que están pidiendo aportes basales distintos a los aportes fiscales directos. Apoyamos eso, pero nuestro planteamiento fue en el sentido que hay universidades que, sin ser estatales, tienen tales características –desde el punto de vista de los estudiantes que atienden, de los bienes públicos que producen, del desarrollo que hacen en sus regiones, que son universidades sin fines de lucro, probados en toda su historia–, que deberían homologarse a las universidades del Estado para tener el mismo trato, desde el punto de vista del financiamiento».

«Creemos que las universidades, tal como está estipulado en la LOCE (Ley Orgánica de Enseñanza), deben ser corporaciones sin fines de lucro. Compartimos la necesidad de creación de una superintendencia... Tampoco debe abrirse la posibilidad que puedan crearse universidades con fines de lucro. Por una cuestión de tipo valórico y también desde el punto de vista académico y de desarrollo, porque las universidades con fines de lucro, en el mundo, es difícil que sean de excelencia» (*El Sur*, 21 de agosto de 2011).

El caso de la Universidad de Concepción es emblemático. Creada por la comunidad de la ciudad en 1919, nació con visión, objetivos y compromiso público, siendo prácticamente homologable a una universidad jurídicamente estatal. Como no persigue fines de lucro y es de carácter complejo, es decir, forma profesionales de pre y postgrado, investiga, crea ciencia y tecnología y fomenta el desarrollo regional, requiere una atención económica preferente del Estado, como lo declara su Rector y lo defienden sus dirigentes estudiantiles encabezados por Guillermo Petersen, estudiante de Sociología y Presidente de la Federación de Estudiantes (FEC):

«El Gobierno tiene que transparentar el discurso y decirnos cuál va a ser el presupuesto para Educación el próximo año. Pero, por sobre todo, cuál será nuestra incidencia en esta materia» (*La Tercera*, 26 de septiembre de 2011).

Dirigentes estudiantiles de esta y otras universidades regionales marcan fuertes diferencias con los líderes más visibles del movimiento,

pertenecientes a universidades capitalinas, al defender la necesidad de aumentar los *aportes basales* para las universidades tradicionales de servicio público y no solo para las once estatales (de un total de veinte y cinco pertenecientes al Consejo de Rectores). Por lo mismo es que han participado con fuerza en la discusión sobre el presupuesto de la Nación y sus aportes a la educación para el 2012 y los años venideros.

Durante las movilizaciones estudiantiles del 2011, el Consejo Académico de la Universidad de Concepción emitió un documento que representa al conjunto de la comunidad universitaria:

«En el marco de la búsqueda de una solución a la actual crisis del sistema de Educación Superior chilena, resulta indispensable que el Estado, a través de las políticas públicas, junto con atender a las demandas estudiantiles, reconozca sin distinciones la función que desarrollan las Universidades Tradicionales de Servicio Público, de las cuales la Universidad de Concepción es digna exponente, y entregue mayores aportes basales acorde a sus necesidades, sin hacer diferencia entre instituciones estatales y no estatales, como ha sido hasta la fecha. El Estado debe reconocer además, como una obligación ética, la función social e integradora de las universidades regionales de Servicio Público, como lo es la Universidad de Concepción, proporcionándoles los recursos necesarios que les permitan continuar cumpliendo con esta noble y relevante tarea de construcción de país en circunstancias de mayor pobreza y precariedad» (Universidad de Concepción, 2011, 6).

Los países del planeta que han logrado el desarrollo no solo invierten muchísimo más que Chile en educación, sino que, además, cuentan con sistemas de educación pública. Los países desarrollados mantienen un sistema público porque saben que es altamente rentable en lo social, pero también en lo económico, político y cultural. Saben que el joven que se forma profesionalmente una vez que ingresa al trabajo devuelve con creces, a la comunidad con su trabajo y sus impuestos, lo que recibió de la sociedad y del Estado.

Por lo mismo que es el momento en que el país haga un esfuerzo supremo para establecer un sistema de educación pública gratuita, construido gradualmente como lo solicitan los estudiantes, que be-

neficie a los miles de niños y jóvenes que desean y necesitan formarse en establecimientos de calidad, para luego servir con su inteligencia y compromiso a la sociedad, a sus familias y a las generaciones futuras.

Lo público es indispensable porque es sinónimo de sociedad. Una sociedad no puede construirse sobre la base de los intereses privados o particulares. Lo público constituye la base natural de la construcción de sociedad. La comunidad, donde la persona realiza su socialización primaria, requiere de los espacios públicos –educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria– para proyectar, en el tiempo y en el espacio, los valores, identidad y principios que guiarán su historia como sociedad y nación inserta en el mundo globalizado.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ LA REFORMA EDUCACIONAL?

Chile cuenta con recursos suficientes para financiar progresivamente un sistema gratuito y público de educación. Una posibilidad de financiamiento lo constituyen los excedentes del cobre, provenientes del inmejorable precio en el mercado internacional. Otra posibilidad, complementaria, la representa una reforma tributaria. De hecho, la reforma tributaria es una perspectiva que cada vez se discute más y aumenta sus partidarios, tanto en la oposición concertacionista como en sectores del Gobierno. En efecto, para avanzar en la gratuidad de la educación resulta indispensable realizar una reforma tributaria que la financie y la incorpore de manera permanente en el presupuesto de la nación.

El desarrollo sustentable que tiene como desafío la sociedad chilena, recomienda, en la discusión internacional, sustituir los recursos naturales no renovables mediante inversión, por ejemplo, en las personas, en los niños y los jóvenes, de manera de preparar a la sociedad para tiempos sin dicho recurso, pero con alternativas de desarrollo. La sustentabilidad ecológica recomienda sustituir los recursos naturales no renovables, que tienen plazos concretos de agotamiento, como es el caso del cobre, por la creación de otros recursos o bienes que sustenten el desarrollo futuro de la región y del país. En el pasado, muchos países latinoamericanos, incluido Chile, vivieron de la explotación de determinados recursos naturales sin preocuparse del desarrollo futuro del país y su gente. El fin del recurso significó

por lo general crisis económica, pobreza e ingobernabilidad. Las nuevas visiones del desarrollo obligan a cambiar de perspectivas, a pensar en el futuro, cuidar los recursos naturales (escasos) y preparar adecuadamente a las nuevas generaciones para que construyan alternativas de desarrollo adecuadas y sólidas.

La mejor inversión en el futuro de un país es en su gente. En el mundo globalizado la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, son la clave del desarrollo. Así como en el pasado se subvencionó la reforestación sin preguntar a los chilenos o se destinó el 10% de las ventas del cobre a las Fuerzas Armadas, hoy es el turno impostergable de la educación pública. Como lo sostiene el Consejo de Rectores (CRUCH), la educación requiere urgentemente la implementación de una política de Estado de financiamiento basal de la actividad universitaria y de sus estudiantes.

Una política educacional de Estado requiere de recursos permanentes. Finalizada la discusión del Presupuesto de la Nación, a fines de noviembre de 2011, los resultados son magros. En efecto, los nuevos montos que el Gobierno aportó a Educación son escasos y declarados como muy insuficientes por la oposición como por los estudiantes movilizados, incluso en la dirección contraria a las demandas:

«Por ejemplo, la gratuidad en los siete primeros deciles. Ahora está como en los tres primeros quintiles y más encima ni siquiera es gratuidad, es un arancel de referencia, una mentira. Y ni siquiera al 40 % más vulnerable. Se profundiza la privatización. Ni siquiera es más de lo mismo; es lo peor de lo mismo. Porque es lo mismo, pero más privatizado. Nosotros creíamos que tenían que haberse generado ciertas correlaciones de fuerza dentro del parlamento para presionar un poco más al Ejecutivo» (Camila Vallejo en *The Clinic*, 1 de diciembre de 2011).

Efectivamente la discusión y, finalmente, la aprobación del Presupuesto para el 2012 no significaron avances importantes para el desfinanciado sistema de educación superior. Sin embargo, instaló la discusión sobre la necesidad de realizar una reforma tributaria, algo no logrado en el pasado. Tanto el Gobierno como la oposición han constituido comisiones de expertos para analizar y hacer propuestas

de reforma tributaria. El Gobierno habla de «perfeccionar» el sistema tributario, y la oposición (Concertación) de hacer una reforma más profunda que proporcione recursos suficientes para satisfacer las demandas por bienes públicos que emanan de la sociedad. El tema redistributivo se instaló y permanecerá en la agenda pública para los próximos años, en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2013, en las que la gratuidad del sistema de educación pública de calidad seguirá siendo también un tema central. Si de esta discusión surge un Estado socialmente más protegido, que sería muy necesario para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, es algo incierto y complejo.

LUCRAR CON LA POBREZA Y CON AVAL DEL ESTADO

En la medida en que se establece un sistema de educación superior público con sustento del Estado, se pone fin a la discusión en torno al lucro. No habrá lucro. Y las instituciones privadas que deseen contribuir noblemente a la formación de profesionales y creación de conocimientos con apoyo del Estado, tendrán necesariamente que prescindir del lucro o cambiar de giro.

El sistema del lucro criollo no está necesariamente basado en inversiones frescas, con el consabido riesgo que debería implicar una tal empresa. En realidad, se trata de un lucro rentista, obtenido fácilmente del arancel y del subsidio o crédito con aval del Estado. En lo central, los privados obtienen recursos de los jóvenes estudiantes, sus familias y del Estado. Justamente la idea del *voucher* apunta en esta dirección: el Estado proporciona al joven una beca o crédito para que se compre un servicio en una institución a su elección. Pero la experiencia chilena indica que tal elección no existe. El Gobierno sostiene que muchos estudiantes de familias pobres estudian en universidades privadas. Puede ser cierto. Pero en realidad estamos hablando de la *reproducción de la pobreza*: los hijos de familias pobres asisten a escuelas municipalizadas, también pobres. Sus resultados de aprendizaje son precarios y, por lo mismo, no todos logran ingresar a las universidades de calidad del CRUCH. Su única alternativa en muchos casos es una universidad privada, de dudosa calidad, que hace negocio y lucra con su endeudamiento. Si el estudiante deserta

de su formación, o fracasa en su inserción laboral, el plantel cuenta con el aval del Estado, especulando con sus ingresos futuros y, en su defecto, si fracasa en su inserción laboral o deserta de la enseñanza, cuenta, en último término, con el aval del Estado. Tal es la naturaleza del lucro criollo.

Según el Informe reciente del Banco Mundial, una consecuencia del crédito con aval del Estado es que el 20 % de los egresados vivirá con 1,7 veces el sueldo mínimo, después de pagar su cuota mensual del crédito (Palma y Reyes, *La Tercera*, 3 de julio de 2011). Esto significa que, a pesar de contar con estudios universitarios, seguirán siendo pobres.

La educación superior, según la UNESCO, es un *bien público*. Por lo mismo que el Estado y Gobierno chilenos deben asignarle la máxima atención y apoyo preferente. Y, además, se debe excluir el lucro de sus actividades. De lo contrario, las posibilidades de que Chile ingrese al desarrollo se retardarán o harán prácticamente inviables.

Ahora bien, el sentido de la rentabilidad, el lucro y el mercado penetraron fuertemente en la sociedad en los últimos 40 años. Por lo mismo que resulta difícil su superación. Lo público perdió espacios y legitimidad, mientras que lo privado se abrió paso en las diferentes esferas de la sociedad, en la política y en la vida social. La economía neoliberal hegemonizó la construcción de sociedad, arrinconando y desperfilando a lo público. El crédito, los proyectos, el individualismo, la tecnología y el autoemprendimiento constituyen instrumentos poderosos de propagación del mercado en la mentalidad chilena. La estrategia de modernización, impulsada desde las elites colonizadoras, consistió en producir consumidores, no ciudadanos libres.

Los jóvenes, fuertemente discriminados por las políticas de mercado, reaccionan y muestran que el modelo de mercado criollo hace agua y, por consiguiente, reclaman el papel del Estado como garante de lo público, conectándose con la historia pública y republicana del país que existió antes de la dictadura y del advenimiento del mercado.

El lucro, considerado un motor del progreso por la ideología neoliberal, en realidad enferma y fragmenta a la sociedad. Como está prohibida legalmente su práctica en la educación superior, podría evitarse con la creación de una Superintendencia de Educación Superior que imponga estrictos controles sobre las llamadas «sociedades

espejos» que las universidades privadas utilizan para hacer negocios al margen de la ley. Existe ya un consenso sobre la necesidad de instalar una Superintendencia. Pero el fin del lucro debería aplicarse a todo el sistema educacional.

MUNDO CONVULSIONADO: DESIGUALADO Y EN CRISIS DE REPRESENTACIÓN

Lo que en la actualidad observamos en Chile sucede también en otros países y continentes, por lo tanto es necesario de estudiar y sacar lecciones. Algunas sociedades desarrolladas declinan, mientras otras, en vías de desarrollo, como Chile, emergen.

Entre las primeras tenemos el caso dramático del Reino Unido, cuyas explosiones sociales, que muestran graves problemas de pobreza, exclusión y conflictos étnicos, afectan a sectores de clase media, trabajadores e inmigrantes. El declive empezó con el Gobierno de Margaret Thatcher (1979-1990). La «Dama de Hierro» implementó una fuerte política neoliberal: redujo drásticamente el papel del Estado, desreguló la economía, flexibilizó el mercado laboral, privatizó y cerró empresas públicas, atacó y debilitó a los sindicatos y disminuyó el gasto social. A partir de ese momento se instaló el tercer mundo en su país, en cuyos barrios populares «desde edad temprana, a los críos se les dice que no llegarán a nada en la vida» (Knight, *El País*, 11 de agosto de 2011: 2-4). La comunidad negra de Tottenham, donde se iniciaron los disturbios y saqueos, pertenece a uno de los distritos londinenses más pobres y con mayor tasa de desocupación (Muñoz, *El País*, 11 de agosto de 2011). «El deterioro de las condiciones de vida y de oportunidades de progreso social, tras el drástico plan de recortes del Gobierno conservador de David Cameron, en el contexto de la crisis económica mundial, explican en lo inmediato el estallido de los guetos de Londres y otras ciudades inglesas» (Bastienier, *El País*, 12 de agosto de 2011: 4).

En este sentido, Álvaro Vargas Llosa se refiere a la transformación experimentada rápidamente por David Cameron, de un conservador liberal, que pretendió fundar una nueva derecha: «Cameron había llevado la adaptación a la modernidad más lejos. Defendía a los gays,

se mostraba levemente comprensivo con el uso personal de ciertas drogas, no hacía del mantenimiento del orden público o los valores las cuestiones centrales de sus propuestas». Luego de los disturbios sacó 16.000 policías a las calles de Londres y detuvo a 2.700 personas, aplicando, en colaboración con jueces, duras penas y largas detenciones a los infractores del orden público. Recuperó rápidamente las características del conservador tradicional que sostiene que una «equivocada concepción de los derechos humanos», una laxa disciplina familiar y un exceso de asistencialismo han llevado a la creación de una clase marginal de seres dependientes y desmotivados, írritos a todo afán de progreso y ascenso» (*La Tercera*, 20 de agosto de 2011: 22). Los modelos conservadores producen pobreza y marginalidad, y luego las personas son discriminadas y reprimidas, culpabilizándolas de sus propias tragedias y carencias. Y finalmente quedan atrapados en la defensa del orden público.

El escritor marroquí Tahar ben Jelloun describe de manera profunda la tragedia del inmigrante y no migrante que, en la actualidad, se rebela, en diferentes lugares del planeta, contra sus precarias condiciones de vida y de sometimiento:

«En los países árabes que te llamen perro es el peor de los insultos. En la época de Hassan II, la primera cosa que la Policía le decía a un opositor era: «Acércate, perro». El opositor era un perro o un hijo de perra. Y aquí, en Francia, los inmigrantes magrebíes son considerados como ganado. Para todo: en el trabajo y en la vivienda, en esos suburbios donde uno solo puede sentirse desdichado. Sí, en este lado del Mediterráneo son bestias y en el otro también. Pero, en fin, esa es la condición del pobre. Es pobre el que ha sido desposeído. En el caso de los inmigrantes magrebíes, como antes de los italianos, españoles o portugueses, de lo que se les ha desposeído es del campo, del sitio y de la cultura de donde proceden.

En Siria, por ejemplo, la gente baja desarmada a la calle todos los días para recibir balazos. Sale de su casa sin saber si volverá por la noche. Y sigue saliendo a manifestarse. Y no por el pan o por el empleo. Se manifiesta por la libertad y la dignidad, para que se respete su integridad física y moral, se le reconozca, como usted dice su humanidad. Y esto es nuevo. Es la primera vez que en el mundo árabe vemos manifestaciones no contra el exterior, contra el sionismo, contra Occidente, no;

las manifestaciones son contra los canallas que nos gobiernan y nos despojan de nuestra condición de seres humanos... Llega un momento en que el humillado se niega a seguir viviendo de rodillas, esta es una verdad universal» (*El País*, 24 de septiembre de 2011: 4-6).

Las movilizaciones chilenas se inscriben en un proceso internacional más amplio de crisis económica, malestar social y protestas juveniles. Los analistas se preguntan si existen relaciones entre estos fenómenos internacionales. Así, por ejemplo, el prestigioso periódico semanal alemán *Die Zeit* (*El Tiempo*) preparó un Dossier Especial bajo la provocativa consigna *Aufstand der Jungen* (*Rebelión de los Jóvenes*), en cuya portada aparece el rostro de Camila Vallejo, como líder representativa y carismática de las movilizaciones juveniles internacionales. Caracteriza a los movimientos como los más grandes en desafiar a la política, desde el movimiento del 68. Junto al reportaje sobre Chile, *Die Zeit* discute con activistas juveniles de Egipto (Mustafa Sheshtawy), Israel (Stav Shaffir) y España (Olga Mikhaylova), con el propósito de explorar los motivos comunes de las movilizaciones y los movilizadores. Resulta interesante constatar que ellos están comunicados desde hace ya algún tiempo, mediante redes de internet. Los temas centrales que tratan en sus comunicaciones, y en los que coinciden respecto de sus países, son: la falta de democracia y participación, la lejanía de los gobiernos de los ciudadanos, los problemas de marginalidad y desocupación que afectan a los jóvenes y las brechas cada vez más grandes existentes entre ricos y pobres. En algunos casos también son tratados los problemas de corrupción imperantes y, por supuesto, la educación representa también un problema central que los moviliza, según los declaran los entrevistados (Özlem Topou, en *Die Zeit*, 18 de agosto de 2011). En el fondo, la desigualdad y la falta de participación en los sistemas democráticos, afectan a estos jóvenes de la misma manera como se observa en Chile, pero también en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. El poder se ha olvidado de los sectores juveniles, de los pobres y de las clases medias.

Los jóvenes, al igual que en 1968 aunque con propósitos más vinculados a la inclusión y a la equidad, luchan por ser considerados

como sujetos con derechos e influencia en las decisiones políticas de sus países. Los movimientos juveniles y sociales –los «Indignados»– que agitan y se propagan por el mundo capitalista marcan la época de crisis y de cambio de paradigma que estamos viviendo.

«Las movilizaciones en plazas y calles de las ciudades españolas sostenidas prácticamente de forma ininterrumpida desde mediados de mayo (2011) han convulsionado la vida política del país. Constituyen el reflejo de un profundo clima de insatisfacción con la situación de crisis económica que arrastra el país... Sus protagonistas son los sectores precarizados de la sociedad (jóvenes con magras perspectivas de futuro, trabajadores explotados, desempleados, pensionistas...).

«La juventud figura en primera fila de las movilizaciones. Les llaman *perroflautas*, y no lo son. Forman parte más bien de esa minoría ciudadana bien pertrechada para interpretar la situación y luchar en forma pacífica por su suerte, que, todo apunta, en ningún caso será más halagüeña que la de sus progenitores».

«Si la democracia es el sistema que pone (potencialmente) la política al alcance de todo el mundo, pocas dudas caben del marchamo democrático del movimiento de los indignados. El movimiento está interviniendo en la esfera pública, estimulando el debate y apuntando a que otra gestión de la economía y otro funcionamiento del sistema político son posibles» (Casquete en *El País*, 19 de agosto de 2011: 23).

Las protestas sociales aparecieron también en Estados Unidos, en la medida en que la crisis económica-financiera se profundizó, afectando a millones de personas. Las actuales manifestaciones ciudadanas contra Wall Street y las protestas sociales en diferentes ciudades estadounidenses son una muestra visible del proceso de empobrecimiento que afecta a miles de familias en la gran potencia del norte, hoy en franco proceso de declive. En la actualidad, según cifras oficiales, el 15,1 % de la población vive por debajo del umbral oficial de pobreza. La desocupación oficial llega al 9,1 % de la población activa (cerca de 14 millones de personas), pero si se suma a los desanimados que ya no buscan trabajo (unos 2,2 millones) y los que solo consiguen contratos temporales (8,5 millones), la tasa de subempleo asciende a un 15,7 % de la población activa, es decir,

casi 25 millones de personas. Según Timothy Smeeden, Director del Instituto de la Pobreza de la Universidad de Wisconsin: «Eso, tal vez sea más profundo y problemático que debatir el concepto de pobreza en sí mismo». Y agrega: «De hecho, es la primera vez, desde la Gran Depresión, que el sueldo promedio de una familia (ajustado por inflación) no registra mejora durante un período tan largo... En lo global, el fenómeno se sintetiza de esa manera; es decir, como quiebre de la percepción de EE.UU. como un país donde cada generación se desempeña mejor que la anterior» (Pisani en *El Mercurio*, 9 de octubre de 2011). Autores como Smeeden se refieren a este declive como «la década perdida», como se habló en América Latina durante la década de los ochenta.

¿Fin del sueño americano»? Las graves dificultades económicas y financieras por las que atraviesa el Estado norteamericano, con un enorme endeudamiento público, constituyen el contexto de esta crisis del trabajo y de la vida social que impacta directamente a la población, y que no ve salida en el corto plazo. Se requieren cambios profundos, de carácter estructural, que la clase política no quiere reconocer ni cuenta con la voluntad para hacerlas.

Este declive de la gran potencia mundial se expresa en la pérdida de optimismo, prestigio y credibilidad de instituciones como el Gobierno y el Congreso. Según una encuesta de *The New York Times* y la cadena CBS, un 25 % de la población tiene una opinión favorable de Ocupa Wall Street y un 46 % considera que sus reivindicaciones coinciden con las de una mayoría de estadounidenses. En ese mismo sondeo, los resultados establecen que solo un 9 % respalda la actuación del Congreso, un 10 % apoya al Gobierno y un 46 % ve de forma favorable la gestión de Barack Obama (Caño en *El País*, 28 de octubre de 2011). La encuesta señala también que el 75 % de las personas considera que el país «camina en dirección equivocada». Paralelamente se constata el aumento de la influencia de fuerzas de extrema derecha, como el Tea Party. En un país basado en la iniciativa individual y en la escasa protección estatal, Estados Unidos, el pesimismo puede ser mucho más destructivo que en Europa, donde los ciudadanos cuentan con mayores derechos y seguridad del sistema público.

Desde la Puerta del Sol de Madrid, el 15 de octubre de 2011

el movimiento de Indignados saltó al mundo. Se coordinó usando la tecnología y marcó presencia en las grande orbes: Tokio, Sidney, Nueva York, Frankfurt, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Pekín, Santiago de Chile, Barcelona, Sao Paulo, Londres, Lisboa, Roma, Seúl, etc. Millones de personas protestaron en el mundo por una sociedad mejor, ocuparon los espacios públicos y lucharon por hacerse escuchar.

En el pasado, el control democrático se realizó al interior del sistema de Gobierno y de los partidos políticos, a veces combinado con la presencia de organizaciones sociales. En el presente, en cambio, cada vez existe más desconfianza ciudadana en los gobiernos, en la política y sus instituciones, debido al histórico incumplimiento de sus promesas y a una creciente separación de lo público de la sociedad civil. En este sentido, Pierre Rosanvallon se refiere al surgimiento de la *democracia impolítica*: «El gran problema contemporáneo es que el crecimiento de la democracia, bajo una forma esencialmente indirecta, se ve acompañado de una declinación de lo político» (Rosanvallon, 2007: 249). En el nuevo escenario, el control democrático se empieza a ejercer desde abajo, en forma de vigilancia, denuncia y calificación.

En su reciente paso por nuestro país, este destacado pensador francés sostenía que el caso chileno, más allá de sus particularidades, «se trata de un fenómeno global» y que la crisis de representación es antigua y consustancial al régimen político:

«Reconozcámoslo: ya no basta un momento electoral para acabar con el problema de la representación. Las elecciones expresan la voluntad popular. Pero otras manifestaciones también, como los movimientos sociales, las protestas, las expresiones de solidaridad, los grupos de presión, las asociaciones en torno a una sola causa, que operan como contrafuerte de la democracia. Es lo que yo he llamado la contrademocracia».

«La desconfianza ciudadana respecto del sistema democrático puede, incluso, ser un factor positivo, en la medida en que introduce un elemento de control. La democracia corre más riesgo con ciudadanías irreflexivas o indolentes que cuando son vigilantes y críticas. Lo que sí es muy negativo para la democracia es la desconfianza entre los ciudadanos. Esta sí que es problemática. La confianza es una institución invisible y las democracias la necesitan para funcionar, para economizar angustia, contratos, garantías, fuerza... Cuando

la crisis de confianza es doble –en las instituciones y entre las personas– nada bueno podemos esperar» (*La Tercera*, 3 de diciembre de 2011).

La desconfianza es un factor generalizado que ronda a la sociedad chilena. Se dirige contra las instituciones, pero también contra los individuos. El mercado desregulado ha introducido la desconfianza como «motor» del emprendimiento individual y como modo de dominación de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el movimiento estudiantil lucha contra esta tendencia desintegradora buscando la reconstrucción de los tejidos sociales, base de la confianza y la integración social.

El siglo XXI estará probablemente marcado por los temas y problemas sociales (inclusión y mayor igualdad social), políticos (democracia participativa) y ambientales (adaptación al cambio climático), los que cuestionarán e influirán decididamente en los paradigmas políticos autoritarios imperantes en el siglo XX y obsoletos en la actualidad. Influirán en la conformación de las sociedades futuras y en la personalidad de sus miembros y comunidades, las que se gestionarán de una forma más directa por los propios ciudadanos. Es la emergencia de la sociedad, de lo que hablábamos anteriormente.

EL DESPERTAR CIUDADANO: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Una exigencia importante que motiva a los jóvenes que se movilizan se relaciona con la democracia. Plantean la necesidad de democratizar el sistema de educación superior, estableciendo modalidades de participación en las diferentes instancias de toma de decisiones.

Los gobiernos de la Concertación contuvieron las protestas y movilizaciones estudiantiles mediante mediaciones políticas y algunas reformas. El actual Gobierno, en cambio, no negocia, y aparece como representante directo de los empresarios, del orden y de quienes lucran. Cuenta con bajos niveles de credibilidad y legitimidad política, lo que automáticamente hace crecer las protestas y movilizaciones, a las que además se unen otros grupos de la sociedad civil, como los ambientalistas que protestan contra el proyecto HidroAysén, los

que luchan por la igualdad sexual, etc. Un Gobierno conservador o de derecha concita la unión de los muchos ciudadanos que no se sienten partícipes del progreso alcanzado por el país en las últimas décadas y, que, por lo mismo, experimentan un profundo malestar acumulado, que no creen en los referentes político-partidarios y, que al igual que en países como España –los Indignados–, luchan con sus propias fuerzas para ser incluidos. Sólo creen en ellos mismos, en sus capacidades, redes, discursos y movilizaciones.

Las sociedades modernas experimentaron un salto cualitativo en el desarrollo de sus instituciones democráticas, impulsadas por la emergencia ciudadana. En la discusión internacional se habla, con razón, de una segunda democracia o de democratización de la democracia, para referirse a la superación del concepto limitado de democracia representativa o delegada que primó durante el siglo XX y subsiste aún en muchas sociedades. Los movilizados manifiestan un desencanto con la forma de hacer política, de gobernar y con el funcionamiento deficitario y burocrático del sistema democrático actual. En realidad debe entenderse como un malestar e insatisfacción con las formas tradicionales de representación, las que efectivamente muestran déficits y agotamiento estructural en relación a la inclusión y participación ciudadana.

El mundo que viene, como consecuencia de la agresiva globalización, es el del involucramiento directo de las personas en todos los asuntos. Las personas, gracias a la revolución de los medios de comunicación, de la tecnología y de las redes sociales, entienden que nada les es ajeno, sino que todo les concierne. El futuro orden social es más incómodo para la clase política porque le arrebató espacios de decisión. Se trata de una *relacionalidad social más inteligente*, que agrega valor a la convivencia, a la política y a las instituciones.

En la actualidad la democracia es la modalidad más moderna y efectiva de convivencia política y social. Pero la democracia cambia, evoluciona, conforme lo hacen los ciudadanos de las comunidades y países. Las nuevas generaciones son portadoras de nuevas culturas y formas de entendimiento social, lo que necesariamente impacta e influye en la organización de la sociedad. La democracia es además un proceso de aprendizaje, no ajeno a conflictos y tensiones. La democracia requiere, para su anclaje profundo en la sociedad, de una

cultura democrática, aceptada y socializada por los ciudadanos, las instituciones y los actores políticos.

En Chile, la democracia aún no logra su instalación plena, persisten enclaves autoritarios heredados de la dictadura militar. Persisten, por ejemplo, en la mantención del sistema político binominal, que impide la expresión de las minorías políticas y la opinión ciudadana. Persisten en los medios de comunicación, controlados por grandes grupos económicos, que atentan contra el necesario pluralismo y libertad de expresión. La propia Constitución Política es una herencia del régimen militar. La transición del país hacia la democracia fue el resultado de un pacto de cohabitación con el pasado. En el fondo, el proceso de lograr una democracia más plena, con participación ciudadana, aún no se ha cerrado, a pesar de que diferentes autores ya dieron por finalizada la transición. Pero, en realidad, ha faltado la transición social, actualmente en movimiento, a partir del movimiento de los «Pingüinos» del año 2006.

Lo que hoy observamos, a partir de las movilizaciones estudiantiles, constituye un verdadero despertar de la sociedad civil, deseosa de ser incluida en el progreso económico y de incidir en los asuntos claves que conciernen al desarrollo del país y de las personas. Los movimientos sociales ciudadanos, también los ambientales que reclaman contra el proyecto HidroAysén, llegaron para quedarse, para construir sociedad, transformar las relaciones sociales y cambiar la manera de hacer política. En este sentido, ni la clase política ni el Gobierno pueden seguir ignorando lo que viene de la sociedad. La concentración de la economía ha concentrado también la política y los procesos de toma de decisiones. Ha centralizado aún más el país, subordinando a las regiones. Esta realidad debe necesariamente cambiar para que el país, las regiones y sus ciudadanos avancen con la debida equidad y participación. La inmovilidad del sistema político, social y ambiental, permite hablar de la existencia de una «*sociedad bloqueada*».

Los déficits participativos influyen directamente en la falta de equidad en la distribución del ingreso y de los bienes como la educación o la salud, permitiendo el surgimiento de asimetrías sociales, culturales e institucionales que, consecuentemente, generan malestar social, como el que se observa actualmente en Chile.

Por otra parte, los déficits democráticos hacen que el desencanto sea aún más profundo con la forma como se ejecuta la política y como se gobierna el país. Se debe reconocer que la democracia no llega aún a muchos ámbitos del quehacer nacional. Por lo mismo que tienen sentido las voces entre los movilizados que reclaman *cambios constitucionales*, indispensables para modificar el sistema de representación y el sistema general de la educación, garantizando en la Constitución la educación, en todos sus niveles, como un derecho de todos y cada uno de los chilenos.

La democracia es un sistema de integración e inteligencia social que inaugura la emergencia de la persona humana con derechos y deberes, con capacidad de reflexionar, opinar, decidir y actuar responsablemente. Implica respeto mutuo, al pluralismo y a la diversidad ideológica, social, étnica y cultural. La democracia favorece el desarrollo de una sociedad con personas cada vez más informadas, con capacidad argumentativa y coloquial. Potencia una comunidad que avanza en calidad y bienestar con el conocimiento y la verdad, con honestidad y transparencia. Como toda persona cuenta con la capacidad innata de aprender y crear, puede, habidos los espacios democráticos, aportar a su comunidad, defenderla como algo propio contra todo tipo de amenazas y contribuir a su desarrollo con inteligencia intercomunicativa. En este sentido, la democracia hace converger voluntades que contribuyen a la realización individual y social.

Las instituciones democráticas pueden enriquecerse y fortalecerse con la participación activa de cada uno de sus miembros. Las instituciones universitarias, públicas o privadas, forman parte de la institucionalidad y cultura moderna del país en que se insertan, por lo que deben hacerse cargo de la demanda por democracia participativa.

En este sentido, la universidad que invita a sus miembros a participar activamente en su quehacer no solo comprende y responde a la demanda que emana de la comunidad que le da sustento, sino que también enfrenta correctamente los desafíos que su tiempo le plantea: construir conocimientos científicos y tecnológicos desde una visión y misión surgidas democráticamente de sus actores y entorno sociocultural.

Estamos viviendo un momento importante de cambio social. No sabemos a qué conducirá ni cómo ni cuándo concluirá, pero marcará época. Chile ya no será más lo que fue antes de estas grandiosas movilizaciones, aun cuando ellas no logren todo lo que se han propuesto. Sus demandas se prolongarán en el tiempo y pasarán a las siguientes generaciones, impregnando a la sociedad con nuevos aires de democracia, justicia y libertad.

En el crucial momento que vive Chile puede sostenerse: ya nada puede hacerse sin ni en contra de la sociedad, la que por décadas ha padecido las arbitrariedades del mercado y del Estado. Tampoco se puede actuar en contra de los movimientos sociales que expresan el despertar ciudadano. El movimiento estudiantil y social augura cambios profundos a favor de la inclusión social, la equidad, la recuperación de lo público y la calidad de vida de la mayoría de la población.

GOBIERNO CAUTIVO DE SU IDEOLOGÍA

El Gobierno conservador de Sebastián Piñera fue sorprendido por el robusto y prolongado movimiento estudiantil. Llegó al Gobierno prometiendo cambios que superarían los problemas no resueltos durante los veinte años de gobiernos democráticos de la Concertación. Sin duda, el país presentaba –y sigue presentando– una cantidad importante de problemas por resolver. Uno trascendental es el de la calidad, desfinanciamiento y desregulación del sistema de educación, en todos sus niveles.

Sin embargo, todos los problemas que presenta el país son de carácter estructural. Por lo tanto, requieren de reformas profundas. Como ya ha quedado suficientemente documentado, los estudiantes no se conforman con simples reformas. Exigen cambios de fondo, lo que coloca al Gobierno en grandes dificultades programáticas e ideológicas. El Gobierno pensaba resolver los problemas mediante una mayor *eficiencia del mercado*, como les gusta a los gerentes de las grandes empresas transformados en ministros. Obviamente, no pensaba prescindir de los mecanismos de mercado. Por el contrario, se trataba de perfeccionarlos. Tampoco estaba dispuesto a desechar

el lucro, como instrumento privilegiado de los negocios e incentivo del emprendimiento empresarial.

Por su parte, a los estudiantes movilizados les ha correspondido enfrentar a un Gobierno que representa el corazón del modelo neoliberal. En los gobiernos de la Concertación las opiniones estaban más divididas, entre partidarios moderados y críticos del mercado y, por consiguiente, existían mejores condiciones para la negociación y acuerdos. En cambio, ahora gobierna el núcleo más duro y convencido de las políticas de mercado, lo que explica la no solución del conflicto y la prolongación extrema de las movilizaciones.

El Gobierno declara su disposición al diálogo con los estudiantes y la oposición, pero en verdad hasta ahora no lo ha demostrado. En un comienzo el ejecutivo subvaloró la importancia del movimiento, su capacidad de movilización y la empatía que podría despertar en la población. Consecuentemente aplicó la estrategia de ganar tiempo: apostó a su desgaste, a sus eventuales divisiones internas y tensiones institucionales; luego exigió el reinicio de las actividades académicas mediante presiones económicas a las universidades (no entrega de becas a los estudiantes y de los aportes económicos directos a las instituciones). Ambas estrategias fracasaron. Contrariamente a lo que el Gobierno esperaba, las movilizaciones se fortalecieron y radicalizaron.

En este contexto, el Gobierno ha hecho uso desmedido de la fuerza coercitiva concitando fuertes críticas en la oposición y en los dirigentes estudiantiles, así como de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Así lo explicó Jorge Contesse, Director del Centro de Derechos Humanos de la UDP:

«La crítica fundamental es que el derecho penal es el último recurso al cual tiene que echar mano un Estado democrático cuando hace frente a problemas sociales, porque lo que hace es lesionar de manera dramática los bienes jurídicos que son más preciados por las personas y la comunidad política, partiendo por la libertad.

(...) En el ejercicio del derecho a la protesta está involucrada la libertad de expresión. Por lo tanto, cualquier regulación que quiera hacer el Estado tiene que ser muy estricta porque lo que está haciendo es regular un derecho fundamental que

es clave para la salud de la democracia. Una democracia que no tiene una libertad de expresión robusta y sólida, tambalea.

(...) Uno tiene la impresión de que al Gobierno no le resulta conveniente la expansión del mensaje que levantan los estudiantes movilizados. La sospecha de la utilización de una herramienta drástica por parte del Estado para castigar a alguien que tiene un mensaje que el Gobierno no comparte, nos coloca en un plano muy peligroso.

(...) A mí me parece que es bastante articulado, está bien pensado... Decirle a alguien yo quiero conversar con usted y al mismo tiempo estoy asumiendo una postura más radical, implica que aquellos que se rebelan no son los gobernados, los estudiantes en este caso, sino quien regresa al estado de beligerancia, el que vuelve las cosas a un estado de guerra. Y eso, por definición, lo ha hecho el Gobierno» (*The Clinic*, 27 de octubre de 2011).

La decisión del Gobierno de presentar al Parlamento un proyecto de ley que sanciona la toma de establecimientos educacionales, a la par de los saqueos, ha sido interpretada como un intento de criminalizar el movimiento estudiantil. Por un lado se declara disposición al diálogo, y, por otra, se sanciona, lo que correspondería a una lógica del orden, como lo señala Contesse en la entrevista antes citada. Esta estrategia ya la había empleado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con motivo de la huelga de hambre de un grupo de estudiantes secundarios. Cuando después de más de ochenta días la huelga fue depuesta, el ministro alabó públicamente a los manifestantes, pero al día siguiente declaró que la huelga de hambre había sido «falsa» pues las huelguistas habrían ingerido alimentos, lo que fue refutado por los médicos que asistieron a los estudiantes durante el proceso. A ello se suma la declaración insólita del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en el sentido de evaluar a los jueces según sus fallos, aludiendo a su comportamiento *garantista* o excesivamente liberal respecto de presuntos autores (encapuchados) de destrozos producidos durante las movilizaciones. Ello generó inquietud y crítica en la oposición y en los magistrados. Al respecto, Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, reaccionó así: «Nosotros defendemos de manera irrestricta la independencia y la autonomía de los jueces» (*El Diario de Concepción*, 24 de octubre de 2011, 9). Al día siguiente, a petición del

Gobierno, el ministro aclaró lo que quiso decir, pero su planteamiento ya había quedado en el ambiente judicial como una amenaza sobre un eventual impacto en la carrera judicial.

Un orden social injusto, inequitativo como el que existe en Chile, no generará paz social ni integración, indispensables para que el país se desarrolle. Las medidas represivas nunca podrán reemplazar las reformas sociales e institucionales que el país requiere para avanzar.

Los cambios exigidos por los estudiantes movilizados no son los que inspiran al Gobierno, cuestión que dificulta el llegar a un consenso que satisfaga a ambas partes. La falta de diálogo se ha traducido en una radicalización del conflicto, cuya escalada afecta la gobernabilidad del país, y los excesos represivos lo agudizan. La falta de solución irrita a los movilizados y altera los nervios de la población, transformándose en ira y pudiendo conducir a explosiones sociales que nadie quiere. La mayoría de los chilenos desea que se produzca pronto una solución al conflicto que signifique avances importantes en la satisfacción de las demandas estudiantiles. Pero ello solo es posible mediante el diálogo entre los actores involucrados: Gobierno, estudiantes y oposición en el Parlamento. En este último, finalmente se aprobó el Presupuesto 2012 sin nuevos aportes significativos para la educación superior, pero se siguen discutiendo otros proyectos como el control del lucro y la creación de la Superintendencia de Educación Superior.

CONCLUSIONES PRELIMINARES: LO GANADO Y LO QUE FALTA POR AVANZAR

Un movimiento social puede avanzar o retroceder, ganar o perder. Los nuevos movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI pueden caracterizarse como *valóricos y éticos*, a diferencia de los reivindicativos o tradicionales del pasado, vinculados a instituciones y partidos políticos. Estos movimientos apelan a nuevos paradigmas, a nuevas formas de vida y de relaciones sociales.

Resulta difícil saber anticipadamente lo que dejará para el futuro un movimiento social. Saber ¿de qué manera impregnará a la sociedad y las instituciones? ¿Qué cambios logrará producir en el sistema que busca transformar? A posteriori es posible saber lo que

un movimiento dejó. Así, por ejemplo, el movimiento del 68 en todo el mundo dejó huellas profundas, especialmente en lo relacionado con la profundización de la democracia y la ampliación de los derechos ciudadanos y la libertad individual. Por su parte, el movimiento ambiental de la década de los ochenta introdujo el valor de la naturaleza y la conciencia ambiental en diferentes segmentos de las sociedades modernas. Estos movimientos impulsaron el desarrollo de la ciencia ambiental, de las tecnologías renovables no convencionales, nuevos estilos de vida y la conciencia sobre la necesidad de respetar los ecosistemas y vivir en mayor armonía con la naturaleza. En este contexto surgen los llamados partidos Verdes, hoy presentes en diversas sociedades y sistemas políticos.

Las huellas que dejan los movimientos sociales dependen de la profundidad y justicia de sus demandas, la forma como las representan socialmente y la aceptación y empatía que consiguen en la población. Tarea nada fácil de cumplir en sociedades complejas, conformadas por una pluralidad de intereses, grupos y sensibilidades socioculturales.

La prolongada duración de las movilizaciones iniciadas el primer semestre del 2011, su capacidad de convocatoria y la simpatía que el movimiento estudiantil disfruta en la inmensa mayoría de la sociedad chilena indican que sus *temas llegaron para quedarse en la agenda política y social*. ¿Cuáles son estos temas? El fin del lucro, la educación pública, gratuidad y calidad de la educación, transparencia y democracia participativa.

El *lucro* es el motor del modelo neoliberal, el factor central que mueve a la oferta y la demanda, presente en prácticamente todas las actividades económicas, culturales y, en parte, también sociales. Nunca antes se ha discutido tan intensamente en la sociedad chilena sobre el tema del lucro. El lucro es el tema que mayor problema ocasiona al Gobierno conservador de Sebastián Piñera, conformado por muchos ministros salidos de las gerencias de grandes empresas, altamente lucrativas. Este tema ha trabado las relaciones con los estudiantes e impedido que el Gobierno resuelva el problema. Poner fin al lucro es un precio demasiado elevado para un Gobierno conservador.

La contrapartida del lucro es la usura en los créditos, los bajos salarios, el elevado endeudamiento de los estudiantes y sus familias, las enormes ganancias de las grandes empresas, los bajos impuestos

que ellas cancelan, la falta de transparencia en los procedimientos, etc. En otras palabras, el ejercicio desproporcionado y desregulado del lucro va acompañado de condiciones jurídicas y políticas que lo protegen, favoreciendo su incremento e impunidad. No en vano se ha instalado el concepto de «letra chica» para referirse a la falta de transparencia de los contratos privados, los que siempre establecen medidas que nadie conoce, terminando por engañar y perjudicar al consumidor y ciudadano desinformado.

La batalla contra el lucro se prolongará en el tiempo. No se cambiará tan rápido la sociedad ni el sistema económico, pero sí se avanzará progresivamente en su superación. Lo mismo ocurrirá con la gratuidad de la educación y el incremento de los aportes estatales a la educación superior.

La primera batalla, ganada, fue instalar estos temas en la opinión pública, en los partidos políticos, en los medios de comunicación y en las instituciones del Estado. Ello ocurrió, más aún, **puede sostenerse** que, junto con la instalación de estos temas estratégicos, se creó la opinión pública, la que hasta antes de las movilizaciones no existía. El modelo neoliberal ultra privatista había logrado suprimir los espacios y la opinión pública, pero los jóvenes en las calles los reconstruyeron. De esta manera, una de las ganancias del movimiento es precisamente la *recuperación de lo público*.

Las últimas encuestas conocidas ratifican el anclaje social de los temas propuestos por los estudiantes movilizados. En efecto, un 74 % de los encuestados considera que la obtención de lucro por parte de una unidad educacional perjudica la calidad de la educación que allí se imparte, y un 69 % apoya las movilizaciones estudiantiles. Mientras Camila Vallejo obtiene un 69 % de aprobación, el presidente Piñera cuenta con un débil 27 % de aprobación respecto a su gestión en el tema educacional. Interesante resulta el hecho de que un 89 % de los encuestados conoce las demandas que los estudiantes hacen al Gobierno, mientras que el 54 % no conoce las propuestas de este último. Frente a la pregunta: ¿Quiénes cree usted que son los que más saben cómo mejorar la educación en Chile?, la respuesta resulta insólita: i) expertos que no están en el Gobierno, 49 %; ii) los estudiantes, 25 %; iii) Colegio de Profesores, 9 %; iv) el Gobierno, 7 %; y v) Comisión de Educación del Congreso, 2 %. Respecto de la evaluación de

los partidos frente al tema educacional; los partidos de la Coalición de Gobierno reciben una evaluación negativa del 64 %, mientras que los partidos de la Concertación reciben también una evaluación negativa del 71 %. (*La Tercera*, 17 de septiembre de 2011). Estos datos ratifican los resultados de otras encuestas anteriores. Muestra que, a pesar del tiempo transcurrido y de la estrategia del Gobierno de desgastar y dividir el movimiento, su la legitimidad y la de sus dirigentes se han mantenido e incrementado. Los Rectores señalan:

«Creo que estas movilizaciones solo significan beneficios, en la medida en que se produzcan las reformas al sistema de educación superior que toda la ciudadanía está esperando. Por años hemos venido denunciando que la situación es insostenible, por lo tanto yo soy optimista de que esto se va a traducir en beneficios concretos para la educación superior, y para la educación superior pública, en particular... Soy optimista de que de todo este proceso vamos a salir fortalecidos como Universidad de Chile, como sistema de educación superior, tradicional, que son las universidades que forman parte del Consejo de Rectores, y como país» (Víctor Pérez, Rector de la Universidad de Chile en *El Mercurio*, 25 de septiembre de 2011).

«Los estudiantes han tenido el gran acierto de haber puesto temas que estaban muy en el corazón de la sociedad chilena, y que si bien se percibían por parte de la comunidades, no habían sido expresados tan explícitamente. Poner el tema de la educación pública y del lucro en el debate nacional es un acierto» (Álvaro Rojas, Rector Universidad de Talca en *El Mercurio*, 25 de septiembre de 2011).

«Creo que el Gobierno tardó en entender cómo venía de fuerte este movimiento ciudadano. Sus propuestas iniciales fueron un poco más tibias y se fueron reforzando en el camino. Desde el punto de vista del movimiento estudiantil, yo diría que uno de sus aciertos ha sido poner el tema sobre el tapete y provocar una situación muy importante para él» (Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile en *El Mercurio*, 25 de septiembre de 2011).

«Si bien los dirigentes han logrado poner sobre la mesa temas como la calidad y el lucro en la educación, también han tomado

decisiones que han perjudicado a las universidades. Una paralización o una toma en una institución siempre es un perjuicio. En nuestra universidad hemos dejado de recibir recursos del pago directo de los alumnos de aproximadamente dos mil millones de pesos» (Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago en *El Mercurio*, 25 de septiembre de 2011).

Complementado estas opiniones, la reciente encuesta a jóvenes aplicada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales arroja resultados interesantes para definir el perfil y el comportamiento de los jóvenes movilizados. En efecto, de los jóvenes encuestados (entre 18 y 29 años), el 92 % está de acuerdo con las demandas que los estudiantes han planteado al Gobierno, mientras que en los adultos el acuerdo llega a 84 %. En relación a los medios empleados para comunicarse, el 86 % de los jóvenes está registrado en Facebook. Resalta su interés por estar informados y la utilización de todos los medios de que disponen para ello: televisión, 98 %; radio, 72 %; diarios impresos, 70 %; sitios de noticias en internet, 66 %; y redes sociales como Facebook o Twitter, 68 %.

«Si bien Facebook es el medio social online más utilizados por los jóvenes en Chile (86 % dice estar registrado), es interesante observar de qué manera este espacio se ha convertido en un centro de actividades de socialización, expresión y generación de contenidos. Tanto para contactar amigos (97 %), chatear (92 %), subir fotos (86 %), videos (53 %), y enlaces (72 %), como para expresar opiniones sobre temas políticos (58 %), los jóvenes chilenos –al igual que sus pares de otros países– utilizan Facebook para compartir con otros y complementar su vida social» (Scherman y Arriagada en *Qué Pasa*, 16 de septiembre de 2011).

Se trata de una *generación que confía en sí misma*, aunque no necesariamente en el resto. En efecto, el 79 % de los encuestados cree que tendrá una mejor situación económica que sus padres y, al mismo tiempo, el 87 % piensa que sus hijos llegarán a tener una mejor situación que ellos mismos. Por cierto que este optimismo es mayor en los sectores sociales más altos, tendiendo a disminuir en la medida que se baja en la escala social.

Los jóvenes movilizados pueden confluír con otras fuerzas sociales para así contribuir a crear un orden social más justo y democrático. Su fuerza social y convicción pueden obligar al Gobierno a negociar y finalmente a hacer concesiones importantes en pro de la educación pública, su gratuidad y calidad.

«El inicio de este diálogo no condiciona nuestra forma de movilización. El regreso a nuestras actividades académicas dependerá de la voluntad que el Gobierno tenga para responder efectivamente a las demandas del movimiento y, a su vez, las determinaciones que cada comunidad educativa decida en su espacio de movimiento estudiantil de manera autónoma» (Camila Vallejo en *La Tercera*, 28 de septiembre de 2011).

El diálogo con un Gobierno conservador, que no atiende demandas ciudadanas y cuyas orientaciones políticas disienten –en lo central– con las de los movilizados, será muy difícil y conflictivo, si es que se llega producir de verdad. De hecho, en los inicios del efímero diálogo (duró dos encuentros), cuando los estudiantes habían logrado que el Gobierno aceptara empezar a discutir, como primer punto, el de la gratuidad de la educación, la Mesa de Diálogo con el ministro de Educación se rompió abruptamente, como si en realidad nunca hubiese existido interés en mantenerla. El Gobierno optó por ganar tiempo al trasladar el problema al Parlamento y presentar el Presupuesto 2012 (finalmente aprobado según propuesta oficial) que persiste en la estrategia neoliberal de subsidiar la demanda, es decir, entregar becas y créditos –esta vez con bajos intereses (2 %), que obliga al Estado a compensar con recursos extra a la banca privada– que se entregan a los estudiantes con la posibilidad de que ellos elijan el centro universitario donde estudiarán. Esta estrategia favorece claramente a las universidades privadas (que no están en conflicto y funcionan normalmente) que persiguen el lucro y perjudica a las universidades públicas, fuertemente endeudadas y dependientes del apoyo del Estado. En otras palabras, el incremento presupuestario (7,2 %) anunciado por el Gobierno para la educación no se traduce en nuevos recursos para las universidades públicas del Consejo de Rectores, cuyos estudiantes se encuentran movilizados. Paradojalmen-

te, el movimiento estudiantil, de no lograr avances significativos en la gratuidad y en el incremento del aporte basal a las universidades públicas, podría tener un efecto perverso: profundizar la privatización del sistema de educación superior, lo que los estudiantes y la sociedad mayoritariamente rechazan.

El fracaso del diálogo, especie de profecía autocumplida, agudiza el conflicto. Los estudiantes responden con nuevas y aún más masivas movilizaciones, cuando se esperaba que éstas se debilitaran tras casi seis meses de protestas callejeras. El Gobierno endurece su postura procurando restablecer el orden con mayores medidas coercitivas, anunciando un proyecto de ley que sanciona con cárcel la toma de establecimientos educacionales, saqueos y otras acciones. Ello es interpretado por los estudiantes y la oposición como un intento de criminalizar las movilizaciones. La prolongación y profundización del conflicto, permite que grupos violentistas minoritarios –encapuchados de desconocida procedencia– ganen terreno y produzcan desmanes y destrozos públicos.

El conflicto persistirá por largo tiempo. Probablemente se sumen nuevos problemas inherentes al modelo neoliberal, como la privatización de la salud y del sistema de pensiones y, en general, el comportamiento empresarial e institucional disfuncional a los anhelos y necesidades reales de la población, especialmente de la más vulnerable. La inexistencia de una oposición bien organizada y clara en sus posiciones frente al conflicto (prevalece aún el síndrome de la derrota electoral de la Concertación), agrava la situación de desgobierno que se empieza a observar y sentir en el país.

La oposición política, los partidos de la Concertación, cargan con el sentimiento de culpa de no haber resuelto el problema de la gratuidad y calidad de la educación y profundización de la democracia, cuestión que los estudiantes movilizados le critican a viva voz. La política, la buena política, aquella cercana, honesta, transparente y que escucha a los ciudadanos, resulta hoy indispensable y urgente para resolver los problemas esenciales, de la magnitud e importancia de los planteados por los estudiantes movilizados. Lamentablemente, esta política está aún ausente del actual escenario político-social, lo que sin duda dificulta la salida a la crisis social (educacional) que ahora se torna política.

En estas condiciones, políticamente precarias, resulta difícil cam-

biar la sociedad y su modelo neoliberal. A pesar de ello los estudiantes han logrado mucho, al colocar en el centro del debate nacional la gratuidad y calidad de la educación pública. Si se mantienen unidos y movilizados pacíficamente y, contando con el apoyo de la población, podrían avanzar en sus nobles propósitos. Para ello los dirigentes buscan ampliar su base de apoyo social mediante alianzas con trabajadores y apelando a la conciencia internacional. Su gira a Europa para explicar sus demandas y buscar mediaciones con representantes de la OCDE y UNESCO obedeció a esta nueva estrategia.

Finalmente, los partidos de la oposición (en general bastante ausente en el conflicto), representados en el Congreso (la Concertación, Partido Comunista, el MAS del senador Alejandro Navarro y otros), se pusieron de acuerdo y presentaron, a fines de noviembre de 2011, un documento de ocho puntos pro reforma educacional (incluye por ejemplo gratuidad hasta el séptimo decil de los estudiantes más pobres, desmunicipalización de la enseñanza media, entre otros temas) para negociar con los partidos de Gobierno en el Congreso. Buscaban, sin garantía de éxito, poner fin al conflicto estudiantil, tratando de obligar al Ejecutivo a hacer concesiones, en el último minuto, en materia de financiamiento del sistema educacional. La ocasión se relacionaba con la discusión del Presupuesto de la Nación para el 2012. El Gobierno, firme en su ideología de inspiración neoliberal, busca, sin embargo, avanzar en la resolución del cada día más complejo conflicto estudiantil que amenaza prolongarse en el tiempo. Los estudiantes, agrupados en la CONFECH, reunida en la ciudad de Chillán, rechazaron los planteamientos de la oposición y exigieron ser considerados en la negociación, si bien la idea de negociar los divide fuertemente entre aquellos más pragmáticos y los antiinstitucionales, representados, sobre todo, en las regiones que se sienten discriminados por el centro metropolitano.

Por su parte, la oposición no tuvo éxito en la discusión del Presupuesto nacional en el Parlamento. Prácticamente no hubo diálogo ni negociación. Tampoco el Gobierno hizo mayores concesiones a los estudiantes ni a la oposición. Logró aprobar el presupuesto 2012 mediante compromisos (promesas de apoyo a proyectos en sus respectivos distritos) con tres parlamentarios independientes. Por cierto, el tema de fondo, la gratuidad de la educación pública de

calidad, no se supera con la aprobación de las partidas educacionales del presupuesto.

En el intertanto, los estudiantes cambiaron sus directivas mediante procesos eleccionarios, proyectando sus movilizaciones en una segunda fase de lucha que, con nuevos temas y formas de protesta, seguramente continuarán hasta las próximas elecciones presidenciales de 2013.

Transcurridos prácticamente siete meses de movilizaciones, las universidades tradicionales pertenecientes al CRUCH lograron reanudar sus actividades académicas correspondientes al 2011, traspasando el peligro de la pérdida del semestre con la consiguiente pérdida económica y la posible disminución de su contingente estudiantil. El Ministerio de Educación ejerció fuertes presiones a las universidades que reciben aportes estatales, condicionados al inicio de las clases. En la mayoría de ellas sus autoridades emplearon la fuerza pública para desalojar los planteles y obligar a los estudiantes a retomar sus estudios. Estas medidas fueron fuertemente condicionadas por la precaria situación económica de las instituciones académicas. En algunos casos los estudiantes comprendieron esta delicada situación y apoyaron la vuelta a clases, organizando consultas entre los estudiantes.

La Universidad de Concepción fue de las pocas instituciones que logró reiniciar sus actividades académicas sin hacer uso de la fuerza pública, priorizando durante todo el conflicto el buen entendimiento con los estudiantes a través del diálogo y el respaldo a sus demandas.

Con el término de la discusión presupuestaria en el Parlamento y la reanudación de las actividades académicas se cierra un ciclo de las movilizaciones estudiantiles, que requiere de un análisis crítico. Para ello los estudiantes preparaban un congreso a realizar a comienzos de 2012. Camila Vallejo adelanta un balance preliminar:

«Este año se partió de una reivindicación gremial que, consecuentemente, apuntaba a una más política: cuestionar un modelo de mercado de la educación, pero que es parte de uno mayor, un estado neoliberal que establece una lógica subsidiaria, focalización del gasto social, no respeto a los derechos del ser humano y la relegación de estos al mercado. Empezamos con la educación y creemos que lo que estamos colocando sobre la mesa es estructural. Ante demandas estructurales se

requieren cambios profundos en el movimiento, en su orgánica a nivel social y político».

«Esto no es una cuestión etaria, no depende de una generación. Cuando damos el paso y planteamos las cosas, muchos atrás nos siguen, padres, incluso abuelos, que dicen ‘siempre he creído lo mismo pero pensé que esta cuestión no era posible volver a plantearla’. La labor de los jóvenes muchas veces es dar el primer paso. Pero no va a depender nunca de ellos. Es responsabilidad de todas las generaciones, de todos los ámbitos de organización o de sectores que están siendo parte de la sociedad civil» (*The Clinic*, 1 de diciembre de 2011).

La responsabilidad de cambiar el modelo económico, político, social y cultural que contextualiza el sistema educacional, corresponde efectivamente a todos. No resultará fácil. Los estudiantes han hecho un enorme aporte con sus movilizaciones y demandas. Han interpretado el anhelo más profundo de la sociedad chilena: de vivir en condiciones de mayor igualdad, oportunidades, justicia, respeto, solidaridad intergeneracional y democracia participativa.

El clamor por mayor igualdad y democracia se instaló fuertemente en la sociedad chilena. No está aún claro qué otros actores acompañarán a los estudiantes en esta lucha, considerando la crisis de representación por la que atraviesan los actuales referentes políticos. ¿Surgirán nuevos referentes políticos del movimiento social, como ha ocurrido en otros países? Esta posibilidad aún no se vislumbra, pero la dialéctica propia del movimiento podría encauzarse, en el medio plazo, en ese sentido. Tampoco se puede excluir, como también lo enseñan otras experiencias, como la argentina, que los viejos referentes se renueven y se entrecrucen con los nuevos. Las sociedades y sus instituciones, cuando experimenten crisis como la chilena, no se renuevan en forma abrupta. Lo que sí está claro es que la sociedad chilena y sus instituciones ya no serán lo mismo que fueron en el pasado cercano. Los cambios ya se han empezado a producir y seguirán en los próximos años, vinculados a la educación pública gratuita de calidad y la democratización de otros servicios y bienes públicos, hoy privatizados.

Los estudiantes solos difícilmente podrán cambiar el modelo de economía y sociedad con cerca de 40 años de implantación y heren-

cias coloniales. Necesitan aliados de la sociedad civil, trabajadores organizados, profesionales, organizaciones políticas, solidaridad internacional, redes sociales, movimientos sociales y ciudadanos dispuestos a contribuir a crear un orden social más justo, inclusivo, democrático y sustentable, que respete los derechos de las personas y la naturaleza.

Las movilizaciones y ocupación del espacio público constituyen una nueva forma de construir sociedad y de ser ciudadano local y global en el siglo XXI.

VII. EPÍLOGO: BÚSQUEDA DE ALIADOS Y PROPUESTAS PARA EL CAMBIO

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SE ENCUENTRA en pausa, pero no tiene ni tendrá fin. Había que retomar las clases para no perder el año y los beneficios de becas y créditos. Para ello era necesario entregar las dependencias de las universidades y los liceos. Algo nada fácil, sobre todo para los grupos de estudiantes, cada vez menos, ya habituados a la rutina de la ocupación, muchas veces incluso sin mayor comunicación con los acontecimientos callejeros de los manifestantes ni con el exterior, paradójicamente cada vez más masivos, a pesar del tiempo transcurrido, más de siete meses de ocupaciones y movilizaciones.

El 2011 fue un año increíble de movilizaciones y cuestionamientos al modelo de economía y sociedad neoliberal. Cuestionamiento a lo que ya se conoce y se ha hecho popular como la «*sociedad de los abusos*», que debe ser cambiada para bien de la mayoría. Todo el mundo habla de Chile, de las hazañas de sus líderes estudiantiles carismáticos, los que ahora viajan para contar sus historias y reflexionan sobre su futuro.

¿Qué quedará de las movilizaciones? ¿Qué vendrá el 2012, se preguntan muchos? ¿Lo mismo que el 2011, peor o mejor? ¿Nuevas estrategias y acciones? Estos temas se plantean en las universidades, no sólo por curiosidad, sino para saber cómo planificar las actividades académicas. En realidad, el escepticismo domina la escena universitaria y, en parte, también la política, la que el 2011 no tuvo respuestas claras, ocupada como estaba, de su propia crisis interna de coherencia y articulación y externa, de legitimidad, aún no superadas.

El escepticismo dice relación con la frustración socialmente aprendida de los movimientos sociales. En la década de los ochenta

hubo grandes movilizaciones sociales para poner fin a la dictadura. El movimiento logró derrotar a la dictadura en el plebiscito de 1989 que, finalmente, permitió iniciar la larga transición a la democracia. Pero, luego, la transición la hicieron los partidos políticos, sin la participación de los movimientos ni organizaciones sociales. Hoy, más de treinta años de aquello, los ciudadanos y sus organizaciones siguen aún al margen de las grandes decisiones.

El Gobierno no está dispuesto a realizar grandes cambios en la educación. Tampoco a aportar recursos económicos importantes, que realmente cubran las necesidades fundamentales de la enseñanza básica, media y universitaria. El Gobierno no reconoce en el Estado la responsabilidad fundamental de proveer un sistema de educación pública gratuita y de calidad, como lo establece la UNESCO y la OCDE.

El Gobierno finalizó el 2011 con un bajo nivel de aprobación popular. En la Encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, publicada el 29 de diciembre de 2011, se dan a conocer algunos datos interesantes sobre el malestar en la sociedad chilena. Así, por ejemplo, se concluye que la ciudadanía desconfía de las instituciones políticas. Un 77 % de los encuestados dice tenerle «poca o nada confianza» al Gobierno. El Congreso cuenta con respaldo aún menor: sólo un 13 % le tiene «mucho y bastante confianza». El 88 % de los sectores medios desconfía del Poder Legislativo. Sin embargo, los partidos políticos son las instituciones con menor respaldo ciudadano: un 92 % dice tenerles «poca y nada» confianza. Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 24 años desconfían fuertemente de las instituciones: de las Fuerzas Armadas (49 %), de los partidos políticos (92 %), de la televisión (73 %), de los sindicatos (71 %), de Carabineros (55 %), de municipalidades (74 %), de las empresas (79 %), del Congreso (86 %), y del Gobierno (81 %) (Waldo Díaz y Rocío Montes, *La Tercera*, pp. 10-12, 14 de enero 2012).

La misma encuesta subraya que el Presidente Sebastián Piñera marcó el nivel más bajo de popularidad de un Presidente en los últimos 20 años. En efecto, la adhesión al Presidente cayó a un 23 %, tres puntos menos que en el sondeo anterior, realizado entre junio y julio de 2011. En el mismo periodo el rechazo al Jefe de Estado subió del 53 al 62 %. Por su parte, la aprobación de la Concerta-

ción (partidos de oposición), cayó de un 17 % a un 16 %. El estudio muestra también una deficiente evaluación de los atributos propios de un Gobierno. Así, por ejemplo, un 73 % de los entrevistados cree que la actual administración ha actuado «con debilidad» frente a presiones de grupos, instituciones y personas. Un 72 % de los encuestados estima que el Ejecutivo ha actuado «sin destreza ni habilidades» frente a los actores sociales, mientras que un 69 % dice que el Presidente Piñera «no le da confianza». El 67 % considera que el Gobierno lo ha hecho «mal o muy mal» en Educación. Como los personajes mejor evaluados, la encuesta destaca a la ex Presidenta Michelle Bachelet con un 82 % de aprobación y al actual ministro de Obras Públicas Laurence Golborne, con un 66 % de aprobación. Por su parte, Camila Vallejo, líder estudiantil, aparece con un 44 % de aprobación (Marcelo Pinto, *El Mercurio*, 30 de diciembre 2011, pp. 2-4, Cuerpo C). Justamente esta enorme popularidad hace que el nombre de Michelle Bachelet aparezca con frecuencia, no sólo en las encuestas, sino también en los discursos de importantes sectores de la oposición (Concertación) como posible candidata a la presidencia de la República en las elecciones del 2013. Ella, distanciada de la política contingente nacional, aún no se pronuncia, pero se deja querer, en medio de la incertidumbre política que reina en la Concertación.

Los resultados de esta encuesta sólo vienen a confirmar el estado de malestar que predomina en la sociedad chilena, especialmente en los sectores más vulnerables. La encuesta sostiene que los niveles de indignación, enojo, preocupación y desesperanza por la situación en que viven, se manifiesta especialmente en los pobres, los mayores de 35 años y en la población rural. En relación al sistema político, la encuesta refleja que el 60 % cree que el sistema electoral, «en lo esencial, debiera cambiarse». Se refiere, evidentemente, al sistema binominal, criticado por ser antidemocrático, y debatido fuertemente entre el Gobierno y la oposición en el último tiempo. El *binominalismo* representa un sistema electoral que reproduce en el poder a una casta de dirigentes sin mayor legitimidad social, incluso algunos de ellos tributarios de la dictadura, que nunca han realizado siquiera una mínima autocrítica por el papel que jugaron en aquella oscura parte de la historia del país. Representa la contradicción entre los

que deciden y se oponen a los cambios y la mayoría de la sociedad que añora y exige cambios, como el movimiento estudiantil.

En verdad, estos datos son alarmantes, señalan el *bloqueo*, el profundo desencuentro y desencanto en que vive la sociedad chilena. Al respecto, Ricardo Lagos, ex Presidente de la República, sostenía recientemente que «Chile requiere un nuevo entendimiento político y social»:

«Cuando uno ve estos resultados, cuando se ve que el Gobierno sigue cayendo, y también la Concertación, eso obliga a la necesidad de un entendimiento amplio de la llamada –aunque no me gusta ese concepto– ‘clase política’. Hay que dar cuenta de eso. Más del 60 % de los encuestados dice que hay que derogar el binominal. Eso me da la razón de que hay un problema. Chile necesita un nuevo entendimiento político y social.

«Creo que es muy importante el diagnóstico de lo que pasó este año, así uno puede tener las respuestas. Y me temo que muchos no están sacando el diagnóstico correcto. Algunos creen que lo que pasó este año fue una fiesta de los estudiantes. Y no. Lo de los estudiantes es muy importante, pero es la punta del iceberg. Las marchas más exitosas de los estudiantes fueron los sábados y los domingos cuando iban con sus padres y sus abuelos...

«Lo que pasó este año fue una toma de conciencia de la ciudadanía de que el sistema político e institucional que ha funcionado desde el año 90 concluyó. Ese sistema funcionó durante 8 años con un comandante en jefe que se llamó Augusto Pinochet. Funcionó durante 16 años con senadores designados que hicieron que la derecha tuviera mayoría en el Congreso. Y, por lo tanto, más las leyes de quórum especial quiere decir que durante los últimos 20 años hay un derecho a veto de la derecha. El veto de la derecha es a lo que el país dijo ‘basta’.

«Algo dije antes de las protestas estudiantiles, afirmando que estábamos terminando un ciclo económico en donde lo importante era apuntar al ingreso por habitante para dar mejores condiciones de vida. Ahora, cuando estamos en 15 mil dólares y nos acercamos a los 20 mil dólares, lo importante es la distribución del ingreso. La diferencia de ingresos por habitante no explica por qué los indicadores de Nueva Zelanda son mejores que los de Estados Unidos. Eso es distribución

de ingresos» (Ricardo Lagos, entrevistado por Gabriel Pardo, *El Mercurio*, pp. 4-6, 31 de diciembre 2011).

En realidad una sociedad siempre debe distribuir equitativamente sus riquezas, sobre todo porque son producidas por todos. No tiene que esperar llegar a los 15 ó 20 mil dólares per capita para hacerlo. Opiniones similares circularon también respecto de la responsabilidad ambiental: primero habría que «alcanzar» desarrollo para, luego de usar una especie de derecho a destruir la naturaleza, empezar a descontaminar y proteger los recursos naturales. ¡Lógica simplemente absurda! Por el contrario, una sociedad que no tiene desde un comienzo una base igualitaria le resulta más tarde difícil lograrlo. Las clases y diferencias sociales se profundizan y «naturalizan». Los más ricos se acostumbran a sus privilegios y los pobres son socializados en la pobreza y la diferencia social. Las diferencias sociales, en sistemas construidos con grandes brechas sociales, tienden no sólo a mantenerse, sino que se amplían a otros ámbitos de la actividad y vida humana: al trabajo, educación, salud, alimentación, entorno ambiental, cultura, vestimenta, barrios, formas de comunicación, formas de vida cotidiana, redes sociales, expresiones religiosas, esperanza de vida, etc. Como ya lo hemos documentado en capítulos anteriores, la desigualdad construye nuevas desigualdades. Por lo tanto, no se trata de que Chile haya cerrado un «ciclo» económico y que ahora deba repartir las riquezas. Países como Dinamarca, con altos niveles de calidad de vida y felicidad, son altamente igualitarios.

Efectivamente, las movilizaciones estudiantiles han dejado en evidencia la necesidad de un «nuevo entendimiento político y social». En realidad, la construcción de un orden social justo y democrático requiere siempre de entendimientos políticos y sociales. De lo contrario, surgen necesariamente los abusos de los que dominan y el malestar de quienes se sienten abusados o explotados. Y, por lo tanto, surgen los conflictos que van creciendo con el tiempo. La transición a la democracia se hizo con los fuertes «amarres» institucionales que dejó Pinochet. Y los pactos que funcionaron fueron sólo políticos. Lo social estuvo ajeno a la transición. Por lo mismo que

asistimos hoy al surgimiento y despertar de la sociedad. Si la transición hubiese incluido una política de *pacto social*, no tendríamos los graves problemas de inequidad y desigualdad que movilizan a miles de estudiantes, con una amplia simpatía de la mayoría de la población. El pacto social habría requerido incluir en la reconstruir de la democracia a los trabajadores, pobladores, comunidades indígenas, mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores. El entendimiento social que nunca existió, no surge aún, pero clama ahora.

El Presidente Sebastián Piñera quiso dar una señal de «entendimiento» político e invitó a su despacho a todos los ex Presidentes a conversar. Todos concurren: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La diplomacia y la amabilidad estuvieron presentes en los entrevistados. También la franqueza. Los invitados insistieron en la necesidad de los cambios: reforma educacional, reforma tributaria para financiar la educación y reforma al sistema binominal, fueron los temas más candentes y urgentes. Sin embargo, hasta ahora nada ha sucedido en esa dirección. Por el contrario, se observa una gran desorientación en el Gobierno, con fuertes desavenencias internas en la coalición de la Alianza. La Unión Democrática Independiente (UDI), sector más conservador, se opone a las reformas políticas al sistema binominal, debido a que electoralmente le favorece en su representación en el Parlamento. Mientras que Renovación Nacional es partidario de reformarlo para mejorar su representación en el Parlamento. Recientemente firmaron incluso un Acuerdo con la Democracia Cristiana de la oposición, reafirmando su voluntad de reformar el sistema electoral, incluso el Presidencialismo. Ello provocó fuertes críticas de la UDI, logrando que el Gobierno y, en particular el Presidente Piñera, finalmente se alineara en sus posiciones anti-reforma política, la que para ellos y el Gobierno no tendría prioridad. Por su parte, la oposición – incluyendo a los comunistas representados en el Parlamento– en general quiere y busca una reforma al sistema político electoral, así como otras reformas, como la tributaria y educacional. Pero las reformas siguen esperando a que se produzca un consenso, difícil de lograr sin la presión de la sociedad civil y sus organizaciones.

El 2011 finalizó para el Gobierno con un pequeño cambio de gabinete, provocado por las movilizaciones estudiantiles. Renunció

el ministro de Educación Felipe Bulnes, luego de sus infructuosos esfuerzos por avanzar en los temas educacionales, de alta complejidad y conflictividad, pero sin hacer mayores reformas. Se va de embajador a Estados Unidos. Es reemplazado por Harald Beyer, de perfil más técnico que político, experto en educación, por muchos años investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Al parecer, esta elección del Gobierno apuntaría a «desideologizar» y despolitizar la discusión en torno a la educación, cuestión difícil de lograr en el contexto actual.

Ante la pregunta sobre la validez de la diferenciación entre las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y las privadas, Beyer respondió:

«Esa es una distinción que está obsoleta y hay que ir gradualmente moviéndose hacia un esquema distinto, en la línea de agrupar a las universidades de acuerdo a su grado de complejidad. Distinguiendo entre aquellas que cumplen altos estándares, que son complejas y graduando en función de esa complejidad hasta llegar a aquellas universidades que son puramente docentes, que también cumplen un rol pero que no producen bienes públicos en el sentido más amplio de a palabra. Eso tiene más sentido que esta división previa a 1981 o posteriores a 1981, Consejo de Rectores o no Consejo de Rectores. También creo que solo hay universidades de investigación en el Consejo de Rectores, y hay que considerar tratarlas de forma distinta y apoyarlas un poquito más de lo que se les apoya hasta ahora, porque son las que están generando mucha parte de la ciencia e investigación que se realiza en nuestro país» (Entrevista a Harald Beyer de Juan José Lyon y Cecilia Derpich, *El Mercurio*, pp. D7 a D9, Santiago, 22 de enero 2012).

Beyer emplea el concepto de universidades complejas, las que, además de realizar docencia, investigan. Reconoce que éstas –que hacen ciencia y generan conocimientos– están presentes sólo en el Consejo de Rectores y que, por el hecho de producir bienes públicos, habría que apoyarlas un «poquito» más. Y cuando se le pregunta si piensa que las movilizaciones estudiantiles habrían cambiando el panorama universitario, responde:

«Lo veo de manera más moderada porque sigue habiendo universidades líderes que casi no fueron afectadas. Lo que sucede en Chile es que el sistema universitario es muy segmentado, como en todas partes del mundo. Hay un grupo de universidades que captura de todas maneras a los mejores puntajes y luego se va produciendo una mayor dispersión en ellos. Lo novedoso es que el tramo secundario (descartando las líderes: U. Chile y U. Católica) se empieza a producir mucha mayor dispersión» (Ibidem).

«Espero que este año las manifestaciones se concentren en movilizaciones y no en tomas y paros» (Ibidem).

Al asumir el Ministerio se encuentra con una cantidad importante de tareas y desafío:

«Con una tarea tremenda. Con una serie de proyectos de ley que ya están en el Congreso, por lo que me toca mucho ir para allá. Hay un ánimo amplio de avanzar en resolver problemas. Incluso lo he notado en los parlamentarios opositores. Con desafíos inminentes, como es la carrera profesional docente, que es un gran proyecto que hay que enviar antes del 01 de marzo y trabajando a full para que sea lo mejor posible. Con una serie de desafíos de gestión interna asociados a lo que yo llamo lograr un buen equilibrio entre autonomía y control» (Ibidem).

En otra entrevista el ministro muestra una faceta más liberal, que no calza mucho con la ideología o la política conservadora que representa en general el Gobierno al que pertenece:

«Somos una sociedad muy desigual, con falta de oportunidades y sin movilidad social. Yo mismo soy la primera generación universitaria: mi padre es alemán y ni siquiera terminó la educación secundaria; mi madre es profesora normalista. Yo podría haberme quedado atrás, pero tuve la suerte de tener una beca en un buen colegio y entrar a una universidad. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para producir movilidad social y generar oportunidades. Ese es el sello que quiero darle a mi gestión» (Cony Stipicic H., *La Tercera*, pp. R 6 y R7, Santiago, 7 de enero 2012).

Le resultará muy difícil imprimir un sello de movilidad social a las políticas de educación. Ello exigiría un cambio profundo al sistema educacional, como ya lo hemos documentado y analizado extensamente en los capítulos anteriores.

El nuevo ministro enfrenta importantes problemas, aún no resueltos y, sobre todo, desafíos gigantescos en la discusión sobre el carácter público y gratuito de la educación, así como sus estándares de calidad. Inició sus actividades con un fuerte traspié, al apoyar la decisión de reemplazar el término «dictadura» por «régimen militar» en la redacción de los nuevos ejes temáticos en que se basará el currículum escolar, lo que le valió una fuerte crítica de la oposición. En todo caso, el reinicio de las movilizaciones estudiantiles, en el mes de marzo o abril, marcará y pondrá a prueba su gestión técnica.

Por su parte, los dirigentes estudiantiles se aprestan para entrar en escena, en marzo. Hubo relevo dirigencial en la mayoría de la universidades, lo que necesariamente cambia los acentos, luego de reflexionar sobre los éxitos y fracasos de las movilizaciones del 2011. Reproducimos in extenso entrevistas realizadas a los nuevos dirigentes, que reflejan bien sus opiniones políticas y las orientaciones que pretenden dar al movimiento durante el año 2012.

GABRIEL BORIC (FECH): «LAS INSTITUCIONES NO DAN EL ANCHO»

En las elecciones de la Universidad Chile, el estudiante de Derecho, proveniente de Magallanes y dirigente de Izquierda Autónoma (IA), *Gabriel Boric*, triunfó, derrotando a Camila Vallejo, quien, al obtener la segunda mayoría, se mantuvo como Vice-Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

El nuevo presidente de la FECH partió declarando que su «adversario» era el Gobierno, cuestión que obviamente disgustó al Gobierno.

«Es muy importante para el movimiento social reflexionar sobre nuestras propias acciones, porque, si somos auto-complacientes y no tenemos un análisis crítico de lo realizado, será muy difícil seguir avanzando. Aunque hubo muchos

aciertos, los peores errores cometidos el año pasado estuvieron relacionados con descuidar la alianza con otros sectores sociales, y dentro del movimiento estudiantil, con los secundarios; porque la lucha que estamos llevando a cabo es la misma. Nos dejamos llevar por la inercia y esa inercia nos condujo por caminos separados. Fue un error político, que en su momento no supimos enfrentar de la manera correcta» (Gabriel Boric, *Punto Final*, Año 46, N° 751, pp. 7 y 8, Santiago, 20 de enero al 1° de marzo 2012).

«Otro error fue fetichizar ciertas formas de movilización. Convocar a marchas todos los jueves hizo que se perdiera el sentido de esas marchas. Las formas de movilización deben ser funcionales a objetivos políticos y, por lo tanto, tiene que haber un proceso de reflexión cotidiano acerca de cuál es ese objetivo político (Ibidem).

Pregunta: ¿Qué viene ahora?

«El año pasado fuimos capaces de instalar ciertas demandas, pero nos faltó trabajar su contenido. Cuando hablamos de desmunicipalización, hay que explicar qué sistema escolar estamos buscando; cuando decimos fin del lucro, tenemos que detallar cómo llevaremos eso a cabo. Si no tenemos claridad en estos temas, terminaremos respondiendo a iniciativas ajenas, como nos sucedió al final del conflicto el año pasado, cuando delegamos en diputados y senadores toda la discusión del Presupuesto 2012» (Ibidem).

«Quedó demostrado que las instituciones no dan el ancho para resolver las demandas del mundo social. Por lo tanto, es importante que podamos construir nuestras propias propuestas y no estar a la espera de que otro lo haga» (Ibidem).

Pregunta: Ustedes están en un proceso de acercamiento al mundo popular. ¿Tienen conciencia que son parte de la elite de esta sociedad, que ha estado muy lejos del pueblo?

«Pertenece a un sector privilegiado y, por lo mismo, buscamos ampliar nuestro marco de alianzas. Por ejemplo, estamos debatiendo sobre el ingreso de las universidades

privadas a la CONFECH. Cuando uno habla de universidades privadas, se imagina la Adolfo Ibáñez, la Mayor o la Del Desarrollo; pero universidades privadas también son la de Las Américas, la Bernardo O'Higgins o la Central. A éstas asisten mayoritariamente hijos de trabajadores, que viven en carne propia las contradicciones más violentas de este modelo mercantilista de educación» (Ibidem).

«Cuando era más joven me costaba entender lo que decía Allende acerca de que la revolución no pasa por la universidad. Yo decía ¿por qué?, si en la universidad todos son tan revolucionarios. Ahora entiendo que la revolución se tiene que hacer desde el sector productivo, desde la clase trabajadora, desde los explotados, que no son los mismos que antes. Hoy el explotado no sólo anda con un casco y un martillo; también lo es el trabajador precarizado que labora para la clase rentista; puede usar cuello y corbata, y es igualmente explotado» (Ibidem).

«Tenemos que ampliarnos también hacia los pobladores, los medioambientalistas o los consumidores, porque entendemos que la pelea que estamos dando no tiene que ver sólo con la calidad de la educación, sino con la calidad de la democracia que tenemos. Esto no lo vamos a resolver este año, porque la descomposición del tejido social en Chile es muy profunda y recién empezamos a organizarnos» (Ibidem).

Pregunta: ¿Qué espera lograr?

«Estos procesos son lentos y hay que construir perspectivas políticas de largo aliento. Estamos en un proceso de recomposición de la organización social y corremos el riesgo de ser cooptados por los intereses de la elite. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables, para que al final de este año estemos orgullosos de lo que hayamos logrado» (Ibidem).

«Cada día que pasa sin transformaciones dentro del sistema educacional, significa exclusión e inequidad. Más niños que van al colegio a no aprender nada hace cundir la frustración. Hay que obtener logros concretos: Es un equilibrio difícil de conseguir, entre nuestras perspectivas de largo plazo y los logros que necesitamos a corto o mediano plazo. Eso quiere decir, por

ejemplo, que no podemos cerrarnos a negociar con el Gobierno avances concretos en materia educacional» (Ibidem).

Pregunta: En la dicotomía revolución o reforma, ¿con cuál se queda?

«En el colectivo en que milito, Izquierda Autónoma (IA), nos sentimos parte de una izquierda revolucionaria. La palabra revolución tiene ahora una carga semántica llena de nostalgia y derrota. Nosotros queremos recuperarla y volver a dotarla de sentido político. Revolución hoy no significa andar con un fusil y una mochila ni andar con ponchos escuchando al Quilapayún. Es tomar conciencia que las condiciones de vida en nuestro país son paupérrimas, debido a la explotación que lleva adelante un sistema neoliberal que solamente favorece a la elite empresarial. Nosotros apostamos a transformar esas condiciones materiales» (Ibidem).

«La revolución es un proceso permanente y tenemos que ser capaces de ir prefigurando en nuestras propias prácticas cómo nos gustaría que fuera la sociedad que buscamos. El análisis de IA tiene que ver con una crítica desgarradora a la izquierda en el siglo XX. Que, más allá de sus aportes al progreso de la Humanidad, fracasó y el proyecto que imaginó no llegó a concretarse. Los socialismos reales derivaron en totalitarismos absurdos, que no tienen nada que ver con el comunismo al cual se aspiraba. No formo parte de la beatería de izquierda que cree que estos temas no hay que discutirlos y no tengo empacho en criticar al régimen de Corea del Norte, que es a todas luces de la novela *1984* de George Orwell» (Ibidem).

«Hay que ‘reimaginar’ a la izquierda, pero ese proceso no puede derivar en que solamente trataremos de ponerle un rostro humano al capitalismo...» (Ibidem).

«Como IA sabemos que solos no somos suficiente y que hay que apostar a la unidad de la izquierda. En la CONFECH existen múltiples colectivos, fuera del PC, que hoy están separados por intrigas pequeñas y desconfianzas. Si no somos capaces de unirnos, vamos a terminar llevando agua al molino del sistema. La Unidad Popular tuvo mucho de popular y poco de unidad; tenemos que aprender de nuestra propia historia para no cometer los mismos errores» (Ibidem).

NOAM TITELMAN (FEUC): «ESTE MOVIMIENTO DEBE ABARCAR A TODOS»

El reemplazante de Giorgio Jackson en la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), *Noam Titelman*, militante del movimiento Nueva Autonomía Universitaria (NAU), es estudiante destacado de dos carreras: Ingeniería Comercial y Literatura y Lingüística.

«Queremos una reforma interna en la UC; porque es la más elitista, con los aranceles más caros del Consejo de Rectores y escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. Hay mucho que avanzar en lo que se refiere al rol público de la Universidad» (Noam Titelman, *Punto Final*, Año 46, N° 751, pp. 8 y 9, Santiago, 20 de enero al 1 de marzo 2012).

«La NAU, el colectivo del que provenimos Giorgio Jackson y yo, y al que han pertenecido las cuatro últimas directivas de la FEUC, se ha inspirado en el movimiento de 1967. Entonces la UC fue la primera en rebelarse, participar y tener un rol protagónico en las transformaciones de nuestro país. Las ideas fuerza de entonces eran universidades para todos y democratización. Universidad para todos buscaba que el acceso no estuviera vinculado al lugar de nacimiento de las personas y que el conocimiento que produjera la universidad estuviera al servicio de las grandes mayorías. Democratización, a la manera como nos organizamos como universidad, como sociedad y como república. Estas ideas siguen siendo tan fuertes hoy como antes» (Ibidem).

«En 1990 recuperamos la democracia y ahora estamos recuperando la capacidad de soñar con un cambio radical del sistema; con el aporte de nosotros, que somos jóvenes, y de algunos que tienen más edad pero que piensan como jóvenes. No podemos repetir los mismos errores de esa época. El movimiento del 67 nos permitió tener al único rector electo de la UC en toda su historia y grandes avances democratizadores; pero las fuerzas reformistas se dividieron y ganó una directiva contraria, vinculada a la derecha. Con el golpe de Estado del 73, todo lo avanzado se perdió» (Ibidem).

«Ahora somos menos ingenuos y sabemos que este movimiento debe abarcar a toda la ciudadanía e incluir reformas estructurales en nuestro sistema de enseñanza, nuestra democracia y nuestra sociedad. Hay que obligar a las autoridades políticas a hacerse cargo de estas demandas. En las universidades aparecen ideas de vanguardia, pero son espacios a los que no ingresa la mayoría del pueblo. El gran desafío radica en que estas ideas se proyecten hacia los movimientos populares a través de nuevas organizaciones políticas» (Ibidem).

Pregunta: ¿Cómo se rompe el duopolio político?

«Muchos lo han intentado y han fracasado. Mientras este duopolio no vea el peligro de perder sus posiciones de poder, defenderán el sistema político. El Gobierno se ha manejado mal y muchos en la Concertación quieren volver a hacer lo mismo, sin asumir la derrota ni recoger la crítica. Cuando se pierde, hay dos posibilidades: se cambia o se espera hasta las próximas elecciones para hacer lo mismo de antes. Mientras los últimos predominen, será difícil que la Concertación juegue todas las fichas para cambiar el binominal. En la derecha sucede lo mismo, mientras haya quienes consideran que el sistema les conviene, van a seguir defendiéndolo. Hay que remecer el barco y demostrar que este modelo no es sostenible, porque la ciudadanía tiene un descontento profundo con la forma como se está llevando a cabo la democracia» (Ibidem).

Pregunta: ¿Qué opina sobre la represión desatada contra los movimientos sociales?

«Somos enfáticos en condenar la violencia, porque la consideramos un medio inútil para nuestro movimiento y vamos a hacer todo lo posible por conseguir la paz social. Pero consideramos que la paz es, una última instancia, obra de la justicia. La lucha por la educación es también la lucha por la paz. El día que el Gobierno entienda que la mejor manera de tener paz social no es con allanamientos y Carabineros reprimiendo, será el día en que efectivamente podemos evitar estos conflictos» (Ibidem).

«Estamos preocupados por la tramitación de la ‘ley Hinzpeter’, que busca criminalizar los movimientos sociales y que va en la dirección contraria a las necesidades de un sistema democrático en el que puedan participar con éxito los distintos actores ciudadanos. El año que viene tendremos que canalizar nuestra energía en propuestas organizativas y de coordinación de una base social amplia, que incluya a muchos actores. En primer lugar, queremos sumar a la discusión a quienes no han estado participando tan activamente, como las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica» (Ibidem).

«Tenemos un sistema educacional único en el mundo: establece una discriminación perfecta, a través de escuelas municipales, particulares subvencionadas, con copago y particulares pagadas, que permiten discriminar a los estudiantes según su nivel socioeconómico. La Prueba de Selección Universitaria (PSU) no mide adecuadamente las habilidades ni predice el rendimiento que tendrán los estudiantes. Discrimina según la institución básica o secundaria a la que asistió el alumno y no según la calidad y los méritos de cada estudiante» (Ibidem).

«La clase política teme también entregar recursos al Estado para que se haga cargo del derecho social a una educación igualitaria. Mientras no rompamos con estos prejuicios, estamos condenados a mantenernos en estos continuos ajustes cosméticos de una beca más o menos, o de aumentar en un diez o veinte por ciento la subvención» (Ibidem).

Finalmente, la Federación de Estudiantes (FEC) de la Universidad de Concepción eligió a *Recaredo Gálvez*, estudiante de Ciencias Políticas –perteneciente al movimiento Avancemos– como su nuevo presidente. Gálvez fue Secretario General de la FEC anterior, bajo la presidencia del estudiante de sociología Guillermo Petersen, y se hizo conocido cuando fue detenido (acusado de presunta agresión a carabineros y luego absuelto por la justicia) y víctima de la represión policial en una de las tantas manifestaciones del 2011, concitando un gran apoyo solidario.

RECAREDO GÁLVEZ (FEC): «MÁS QUE UNA FEDERACIÓN
VAMOS A SER UN MOVIMIENTO»

«Queremos fortalecer la identidad del estudiante de la UdeC en torno a que se entienda como un actor social y que seamos capaces de recuperar una imagen dentro del espectro nacional y regional como universidad propositiva, capaz de instalar temáticas sociales... Ser un movimiento social capaz de propender hacia la generación de alternativas y propuestas, vincularnos con sindicatos, con distintas alternativas gremiales, con secundarios, gente de universidades privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales» (Recaredo Gálvez, Presidente de la FEC, entrevistado por Tania Merino Macchiavello, *El Diario de Concepción*, p. 13, Concepción, 20 de enero 2012).

Pregunta: ¿Se acaban las tomas?

«Reconocemos que las tomas son una medida de presión. Y de esa forma se utilizan cuando la movilización llega a un nivel en el que no se están obteniendo los resultados necesarios. Los plenos son los que nos van a dar la señal de cuando es el momento de ejercer esas medidas de presión. Sí vamos a tener una planificación mucho más ordenada que nos permita que estos métodos sean más efectivos» (Ibidem).

Los nuevos dirigentes son muy reflexivos, quieren aprender de lo que pasó el 2011, de los aciertos y errores del movimiento, para prepararse mejor para lo que viene el 2012 y años siguientes. También quieren aprender de la historia del país, del movimiento del 67, del que Noam Titelman se siente continuador. Su antecesor en la FEUC, Giorgio Jackson, se encuentra organizando el partido político Revolución Democrática. Boric quiere aprender de los errores históricos de la izquierda en el siglo XX para renovarla, de lo que pasó con la experiencia de la Unidad Popular. Gálvez pretende que los estudiantes se transformen en actores sociales para que se comprometan e impulsen los cambios. A todos les motiva y preocupa de la educación pública y su calidad. Se sienten comprometidos con la democracia y dispuestos a revisar las formas de las protestas del 2011, para hacerlas más eficientes al logro de las demandas. Y, lo más

importante, están conscientes que solos no lograrán mucho y que necesitan de aliados, de unirse a los estudiantes de las universidades privadas y técnicos, pero también, y especialmente, a los trabajadores. A igual que los dirigentes anteriores, saben que no lograrán todos los objetivos en forma inmediata, cual sería cambiar radicalmente el sistema educacional y el modelo de sociedad, y que lo más probable es que se avance de manera progresiva en las reformas. Del 2011 aprendieron también que ahora deben ser más *propositivos* y *no sólo movimientistas*, para impedir que al final otros decidan por ellos, como ocurrió con la discusión del Presupuesto 2012 a fines del 2011 en el Parlamento. Deben –y quieren, así lo manifiestan– reflexionar sobre las formas más adecuadas y eficientes de encauzar las movilizaciones, sin fetichizar ni abusar de algunas, como lo fueron las prolongadas tomas de dependencias que impidieron el funcionamiento de las universidades, generando conflictos incluso con los profesores que apoyaban las movilizaciones, y que finalmente se volvieron contra el movimiento. Justamente aquí resulta también pertinente la pregunta que los dirigentes actuales se hacen por la necesidad de ampliar el espectro de las alianzas.

Los dirigentes de la CONFECH debatieron una y otra vez si era o no conveniente llegar a acuerdos con la oposición parlamentaria. Finalmente el Gobierno impuso su política en el Parlamento, sin mejorar sustancialmente los recursos para la educación, incluida la universitaria. En otras palabras, perdieron la batalla coyuntural por más recursos para la educación. Ahora se preparan para procesos largos de cambios, en los que la política nuevamente deber estar presente mediante nuevos referentes que ellos mismos esperan construir, en alianza con los existentes que les den confianza. En todo caso, lo que los nuevos dirigentes piensen es importante como dato de sus perfiles políticos, otra cosa es lo que realmente suceda con la base estudiantil y social, lo que no siempre depende de lo que piensan los dirigentes. Los movimientos sociales se orientan por el curso de los acontecimientos, los que a su vez dependen de factores de carácter local, nacional e internacional.

Probablemente lo más importante de las reflexiones –y las nuevas orientaciones– que los nuevos dirigentes hacen y que represen-

tan lecciones de las movilizaciones del 2011, lo representan las preguntas por los aliados y la forma como encauzarán sus protestas y movilizaciones. Solos no serán capaces de transformar el sistema educacional y el contexto económico y político que lo acompaña y sustenta. Necesitan insoslayablemente ampliar las alianzas sociales, pensar propositivamente y planificar más a largo plazo. Estos signos marcarán probablemente las movilizaciones del 2012. Reinstalarán con mayor fuerza y profundidad los temas no resueltos del 2011, tratando de lograr éxitos parciales pero importantes en la dirección de la educación pública gratuita y de mantener los grandes temas de las transformaciones más estructurales en la perspectiva de las elecciones presidenciales del 2013.

La pregunta por los aliados no es simple. Es algo que los estudiantes movilizadados trataron en alguna medida también en el 2011, sin mayores éxitos. De la clase trabajadora, profundamente fraccionada y desorganizada, resulta difícil esperar una respuesta. Los dirigentes tradicionales, como los del Magisterio, representan sólo a un sector de los trabajadores de la educación. Como ya lo hemos documentado en capítulos anteriores, la inmensa mayoría de los trabajadores no se encuentra sindicalizada, lo que dificulta considerablemente sus posibilidades de movilización y acción, aunque pudieran estar de acuerdo con las luchas y demandas estudiantiles. No es tema del presente libro analizar el estado de la clase obrera chilena, bástenos señalar que las transformaciones estructurales, aludidas anteriormente, han modificado profundamente su morfología social: el cambio profundo de la matriz económica deconstruyó a la vieja clase obrera, a aquella que fuera actor importante de los cambios en el pasado. Le economía de exportación reemplazó a los trabajadores que laboraban con mayor valor agregado en empresas orientadas hacia el mercado interno por trabajadores, de baja cualificación y organización, que forman parte de las nuevas actividades económicas, de escaso o nulo valor agregado, que se desempeñan en la manipulación de materias primas para la exportación y en los servicios bastante extendidos. A ello se agrega los altos niveles de precarización del trabajo, provocado por los procesos generalizados de externalización y subcontratación, así como por la desregulación

de las relaciones laborales. Todos estos factores influyen fuertemente en la subjetividad de los trabajadores y su organización, obstaculizando su transformación en actor. Por cierto, existen segmentos de trabajadores bien organizados, como los de la gran minería del cobre, los portuarios o los de la salud, pero están marcados fuertemente por sus reivindicaciones particulares –por lo demás muy heterogéneas– y, sobre todo, debilitados por la falta de un referente nacional que los agrupe y represente, como sucede en otros países latinoamericanos y en los países desarrollados. Ello explica la falta de protagonismo relevante de la clase obrera chilena en las últimas décadas. Ciertamente que ella no se conformará mágicamente. No será necesario tampoco esperar un proceso histórico milagroso para que ello ocurra. Su reconstitución y protagonismo irán mejorando y ganando en intensidad en la medida que se organicen, disipen los temores de la pérdida de la fuente laboral, ganen fuerzas, unidad y aliados, precisamente como los estudiantes.

Pero los aliados pueden surgir de otros rincones, a veces de los menos pensados. Pueden surgir de la periferia del sistema, de las regiones rezagadas de la modernización. Al respecto, ya hubo un estallido regional en Magallanes que puso en jaque al Gobierno, por la carestía de la energía y el peso del centralismo. Ahora, algo similar, pero aun más radical, ocurre en Aysén. Este conflicto, de sello especial, no deja respirar al Gobierno, el que esperaba empezar «bien» el año 2012. Los habitantes de la Patagonia, poseedora de ecosistemas prístinos, de bosques nativos milenarios, únicos en el mundo, reserva mundial de agua, se rebela contra los que sus dirigentes llaman el «abandono» en que los gobiernos y el Estado chileno los han dejado (para profundizar en el tema ver: Rojas y Hansen-Rojas, 2006). En realidad, se trata de un verdadero levantamiento regional, de todos sus habitantes, los que reclaman por un trato especial, en una región lejana, con graves problemas de conectividad, aislamiento territorial y adversidad climática (frío, nieve, lluvias y vientos intensos), muy atrasada en comparación con el resto del país y, sobre todo, extremadamente cara en el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros elementos esenciales para el sustento de la vida cotidiana. Cansados de la postergación y las tramitaciones del centralismo

gubernamental, los habitantes, representados por 23 dirigentes gremiales (pescadores, comerciantes, transportistas, etc.), se unieron y decidieron tomarse carreteras y puentes con el propósito de ser escuchados e imponer once peticiones vitales a la autoridad central, al Gobierno. La principal petición se refiere a la reducción –mediante subsidio estatal– de un 20% del precio del combustible. Prácticamente paralizaron la región. Los dirigentes regionalistas reconocen en el movimiento estudiantil su inspiración y encantamiento. Interesante es el surgimiento de líderes regionales desconocidos que, repentinamente, asumen liderazgos carismáticos, como es el caso de *Iván Fuentes*, pescador, vocero del movimiento aysenino:

«La muestra de grandeza de la Patagonia ha sido el peor enemigo del gobierno».

«Claro, logramos hacer un movimiento de unidad capaz de proponer no una petición de los pescadores artesanales, ni de los campesinos por separado, sino que con el sentido humano de una partidura colectiva. Ahí están todas las propuestas. Esta es una petición de la Patagonia».

Pregunta: Pero la gente se agota y el Gobierno insiste en que desbloqueen todos los caminos.

«–Sí, pero Chile está sintiendo que es un abuso, entonces hay un gran riesgo para el mundo político. Este país, libre y próspero, que ha sido muy próspero para algunos y no tan próspero para otros, hay que arreglarlo. Hay que achicar la brecha del que está arriba y el otro que está prácticamente a ras de piso. Este tipo que está en el piso tiene que levantar un poco su estatus de vida para poder ser parte de este botín generoso que es Chile».

«–El de arriba lo único que tiene que entender es que no vive solo en la tierra, que hay un entorno que son las aves, la naturaleza, y que existen otros tipos que viven al lado de ellos, que son pobres».

«–Simplemente eso, y vas a tener un mejor entorno y mayor paz social. Porque la paz social se está deteriorando por esta brecha, donde seis o siete familias se llevan todo y el resto miramos. No somos dueños del agua. El río pasa al lado de

tu casa pero no podí regar las plantas porque otro señor tiene los derechos...»

Pregunta: «Si no hay descentralización habrán cien incendios en Chile», dijo el alcalde de Calama.

«-Es que lo que nosotros decimos es algo de sentido común: la gente se siente abandonada, a pasos de Santiago. En el norte se secan los pozos y resulta que a un kilómetro y medio más arriba hay un lago cautivo con agua de la gente que la tiene un tipo con más lucas. Son los dueños del mundo y los demás no pueden vivir. Les jodí la vida. No es así como funciona el mundo».

Pregunta: Los movimientos sociales han sido un antídoto para esta crisis...

«-Yo creo que son una inyección al mundo político, ellos tienen que sacar una humana reflexión de lo que ha pasado...»

Pregunta: Lo demostró el movimiento estudiantil el año que pasó.

«-Sí, le voy a agradecer en el alma al movimiento estudiantil, aunque sean pocos los cambios, pero para mí son importantes porque tengo hijos que son chicos y una guagua que tiene un mes y cuatro días. Ese cambio que produjeron le ha hecho tan bien a mi vida que mis hijos van a tener una oportunidad diferente».

Pregunta: Eres como la Camila Vallejo de la región.

«-No, la Camila Vallejo hizo un trabajo que te lo encargo, estoy agradecido de todos los chicos, Camila los lideró y que dios los bendiga con mucha suerte, con toda la suerte del mundo».

Pregunta: Los pescadores dieron una lucha increíble en el Puente Ibáñez, incluso sacaron a los pacos del puente. ¿Cómo se sienten?

«– Ese día fue de adrenalina pura, los viejos tenían el pecho gordo. Sentían suyo el puente y que se lo habían devuelto al pueblo, a su gente. De todas las luchas que hemos dado acá la pesca artesanal, nunca hemos perdido. No es que seamos choros, lo que pasa es que se junta mucha gente, los viejos aperran y así como están dispuestos a dar están dispuestos a recibir...»

Pregunta: Te he visto a punto de quebrarte varias veces...

«–Sabes, lo que pasa es que la gente humilde cree, necesita creer. ¿Quién soy yo? Un tipo común que todavía está postulando a casa. La gente necesita creer. Por eso digo que la política está enferma, pero que no es una enfermedad terminal porque esa gente que protesta en la calle hace política, se expresa. Lo que necesitamos es arreglar la política, que la gente vuelva a creer en ella» (Entrevista a Iván Fuentes de Claudio Pizarro, *The Clinic*, 8 de marzo, 2012, pp. 8-11).

El movimiento social aysenino negocia con el Gobierno. A igual que los estudiantes, la salida se ve difícil. Incluso aceptaron temporalmente desbloquear los caminos para poder negociar con el Gobierno. Las demandas del movimiento están bastante alejadas de lo que eventualmente podría conceder el Gobierno. El 2012 será complejo para el Gobierno en su tercer año. Se vienen otras protestas regionales, por ejemplo en Calama, en el norte minero, similares a Aysén, solo que esta localidad se encuentra en las cercanías de Antofagasta, la más importante región de la minería del cobre. Quieren también participar de las riquezas de la minería, ser incluidos. Son los pobres que producen las riquezas que se exportan y benefician a minorías que se enriquecen en el país y, en el extranjero, a multinacionales. Las regiones periféricas están también despertando, emergiendo como actores que buscan incidir en el desarrollo de sus localidades y de su gente. En esos movimientos, que salpicarán a otras regiones, los estudiantes encontrarán sus aliados naturales para seguir luchando por una educación pública y de calidad.

El Gobierno se prepara –al parecer sacando lecciones de las movilizaciones del 2011 y de las actuales– para responder a estas

demandas y acciones regionalistas con algunas concesiones, pero, sobre todo, con los instrumentos tradicionales de defensa del orden público, lo que complejizará y tensará el escenario político.

La historia y la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, por un Chile más justo y más inclusivo, seguirá su curso con la incorporación de nuevos actores, los que seguramente continuarán avanzando por la *huella histórica* trazada por tantas generaciones que han luchado por un Chile mejor desde su Independencia.

Un sociedad bloqueada es aquella que acumula desigualdades, injusticias, insatisfacciones, maltratos y malestares que atraviesan a todo el cuerpo social. El bloqueo impide el desarrollo de las personas, grupos sociales y regiones. Es un bloqueo al desarrollo de la sociedad en su conjunto y de sus territorios, el que a su vez la mantiene en el atraso, subdesarrollo y sometida a la subordinación. Por lo mismo que *desbloquear* implica liberar las energías atrapadas en sus estructuras y placas sociales sobrepuestas. La *entropía social*, entendida ecológicamente como energía social perdida por la desigualdad y la discriminación, constituye en el fondo pérdida de sociedad y comunidad. Pérdida de oportunidades de desarrollo, a través de la realización consciente, libre y activa de las personas. Esta energía acumulada como pasivo –no liberada– es inteligencia social creativa y en ebullición que, como en todo proceso social histórico de cambio, busca, mediante expresiones, presiones y nuevos discursos, abrirse caminos diversos y plurales hacia mayores espacios de emancipación humana y calidad de vida. Veremos, en el futuro cercano, cómo evoluciona este proceso, que podríamos caracterizar como de subjetivación ciudadana movilizadora en los espacios públicos y las redes sociales, en un contexto político de alta complejidad y fuertes tensiones entre el status quo neoliberal y la emergencia del ser social.

BIBLIOGRAFÍA

- Abello, C. (24 de octubre de 2011). Supremos insistieron en independencia de jueces. *El Diario de Concepción*. Concepción.
- Adorno, T. (1991). *Soziologische Exkurse*. Hamburg: Institut für Sozialforschung.
- Águila E. (Ed.) (2005). *Los desafíos del progresismo. Hacia un nuevo ciclo de la política chilena*. Santiago: Catalonia.
- Andino Maldonado, R. (20 de enero al 1 de marzo 2012). Universitarios afinan su estrategia. *Punto Final*, Año 46 N° 751, pp. 6-9, Santiago.
- Aninat, C. y Elacqua, G. (31 de enero de 2010). Elecciones 2009: el tiempo de Andrea, la vendedora de isapres, y no de la señora Juanita. *El Mercurio*. Santiago.
- Aravena, F. y Pérez, X. (10 de junio de 2006). Cómo es la generación pingüino. *El Sábado* N° 403. *El Mercurio*. Santiago.
- Argandoña, C., Araya, C. y Poblete, J. (30 de septiembre de 2011). Gratuidad será primer punto de trabajo entre Gobierno y CONFECH. Declaraciones de Camila Vallejo y Felipe Bulnes. *La Tercera*. Santiago.
- Atria, R. (2011). Chile: la débil distinción público/privado en un sistema de educación superior de modernización avanzada. En: J. J. Brunner y C. Peña (Eds.), *El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado*, 161-186. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Bachelet, M. (2005). *Programa de Gobierno 2006-2010: Estoy Contigo*. Santiago: Gobierno de Chile.
- Bastenier, M. A. (12 de agosto de 2011). Un fantasma europeo nuevo. *El País*. Madrid, 4.
- Bauman, Z. (2011). *44 cartas desde el mundo líquido*. Barcelona: Paidós.

- Beck, U. (2005). *Was zur Wahl steht*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Bengoa, J. (1999). *Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX*. Santiago: Planeta.
- Bengoa, J. (2000). *La emergencia indígena en América Latina*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
- Beyer, H. (2000). Educación y desigualdad de ingresos: una nueva mirada. *Estudios Públicos*, 77, 97-98.
- Beyer, H. (2003). Educación y oportunidades. *Capital*, 25 de mayo-5 junio.
- Blanco, M. (2009). Alain Touraine. Un intelectual torre Eiffel. *El Periodista*, 171, 17-20.
- Brunner, J. J. (20 de agosto de 2011). Educación gratis para todos es ir en contra de la igualdad. *La Tercera*. Santiago.
- Brunner, J. J. y Elacqua, G. (2003). *Informe sobre capital humano en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Adolfo Ibáñez.
- Brunner, J. J. (30 de mayo de 2003). El país no puede soportar más un número tan alto de escuelas inefectivas. *La Segunda*, Santiago.
- Cabalin, C. (2005). El oro atravesado en la garganta. *Rocinante*, 81, 17-18.
- Caño, A. (28 de octubre de 2011). El optimismo muere en EE.UU. *El País*. Madrid, 5.
- Careaga, R. (11 de julio de 2005). Manuel Castells: sin educación el modelo chileno no es sostenible. *Diario Siete*. Santiago.
- Casassus, J. (2003). *La escuela y la (des) igualdad*. Santiago: Lom.
- Casquete, J. (19 de agosto de 2011). Indignación y política de influencia. *El País*. Madrid, 23.
- Castells, M. (2005). *Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
- Castillo, C. (2005). *Gestión ambiental en Chile*. Concepción: Centro EULA, Universidad de Concepción.
- Castillo, N. (8 de octubre de 2006). El club de los millonarios se expande. *La Tercera*. Santiago.
- Centro de Encuestas La Tercera (17 de septiembre de 2011). *La Tercera*. Encuesta Aplicada a personas entre 18 y 70 años de 92 ciudades con más de 20 mil habitantes, entre el 13 y 14 de septiembre de 2011. *La Tercera*. Santiago.
- Centro de Estudios Públicos (CEP) (2011). *Encuesta*. Santiago: CEP.

- CEPAL (2009). *Panorama social de América Latina*. Santiago: Naciones Unidas.
- CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente) (2009). *Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. 2008-2012*. Santiago: Gobierno de Chile.
- Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (CAPRP) (2006). *Diagnóstico y Propuesta de Reforma Previsional. Informe Final*. Volumen I y II. Informe Ejecutivo. Santiago: Gobierno de Chile.
- Dávila, O. (2008). Participación juvenil en Chile: ¿nuevos movimientos en viejas estructuras? El movimiento estudiantil secundario en escena. En R. Bendit, M. Hahn y A. Miranda (Compiladores), *Los jóvenes y el futuro* (299-314). Buenos Aires: Prometeo.
- Derpich, C. y Pardo, G. (25 de septiembre de 2011). El duro balance de los Rectores a 136 días del inicio de las movilizaciones. Víctor Pérez (U. de Chile), Ignacio Sánchez (U. Católica), Juan Manuel Zolezzi (U. de Santiago) y Álvaro Rojas (U. de Talca)». *El Mercurio*. Santiago, 12-13.
- Díaz, W. y Montes, R. (14 de enero 2012). Los indignados, según el CEP: pobres, mayores de 35 y de sector rural. *La Tercera*, R 10-12, Santiago.
- Die Zeit* (18 de agosto de 2011). Aufstand der Jungen (Rebelión de los jóvenes). Hamburgo.
- Elola, J. (16 de octubre de 2011). «Sol ilumina medio mundo. El movimiento de los indignados se hace global». *El País*. Madrid, 10-14.
- Espinoza, G. (15 de agosto de 2011). El Gobierno no puede seguir posibilitando una crisis política. Entrevista a Camila Vallejo. *El Diario de Concepción*. Concepción.
- Espinoza, O. y González, L. E. (2011). Acceso a instituciones de educación superior públicas y privadas: el caso de Chile. En J. J. Brunner y C. Peña (Eds.), *El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado*, 277-279. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Fazio, H. (2006). *Lagos: El Presidente «Progresista» de la Concertación*. Santiago: Lom.
- Feres, M. (2009). Progresismo y movimiento sindical en Chile. En Y. Quiroga y J. Ensignia, *Chile en la Concertación (1990-2010)*.

- Una mirada crítica, balance y perspectivas (193-232)*. Santiago: Friedrich Ebert Stiftung.
- Fernández, P. (1 de diciembre de 2011). Camila Vallejo y el 2012: 'El conflicto va a seguir y va a ser mucho más agudo' (entrevista). *The Clinic*. Santiago.
- Ffrench-Davis, R. (2003). *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: Tres décadas de políticas económicas en Chile*. Santiago: J. C. Sáez.
- Ffrench-Davis, R. y Stallings, B. (Eds.) (2001). *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*. Santiago: Lom.
- Foxley, V. (2006). César Valenzuela, un secundario disidente. *Cosas*, 775, 26.
- Garretón, M. (2007). *Del post pinochetismo a la sociedad democrática*. Santiago: Arena Abierta, Debate, Random House Mondadori.
- Gil, E. (21 de septiembre de 2011). La ocupación del espacio público. *El País*. Madrid, 23-24.
- Habermas, J. (1995). *Problemas de legitimación del capitalismo tardío*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Halpern, P. (2002). *Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias*. Santiago: Planeta.
- Hopenhayn, M. (2005). *América Latina desigual y desconcentrada*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
- Hardy, C. (2002). Redefinición de las políticas sociales. En: L. Tomassini y M. Armijo, *Reforma y modernización del Estado: Experiencias y desafío (335-367)*. Santiago: Lom.
- Huneus, C. (2011). Impacto profundo. *Qué Pasa*, 2105, 34-35.
- INE (2003). *Censo 2002. Resultados. Volumen I: Población, País-Región*. Santiago: Gobierno de Chile.
- INE (2003). *Censo 2002. Resultados. Volumen II: Personas, Viviendas y Hogares, País-Región*. Santiago: Gobierno de Chile.
- INE (2003). *Censo 2002. Síntesis de Resultados*. Santiago: Gobierno de Chile.
- Jackson, G. (11 de agosto de 2011). Es la hora de tomar decisiones. *The Clinic*. Santiago.
- Jaramillo, B. (4 al 10 de junio de 2006). Réquiem por la educación. *La Nación Domingo*. Santiago.

- Knight, G. (11 de agosto de 2011). He visto el lado oculto del Reino Unido. *El País*. Madrid.
- La Nación Domingo* (9 al 15 de octubre de 2005). Andrés Velasco, vocero económico de la candidatura de Michelle Bachelet. *La Nación Domingo*. Santiago.
- Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) (1990). Santiago: Ministerio de Educación.
- Lyon, J. J. y Derpich, C. Beyer, H. (22 de enero 2012). «Espero que este año las manifestaciones se concentren en movilizaciones y no en tomas y paros» (Entrevista). *El Mercurio*, D 7-8, Santiago.
- Macari, M. (9 al 15 de octubre de 2005). Bachelet es candidata a pesar del establishment de la Concertación. Entrevista a Andrés Velasco. *La Nación Domingo*. Santiago.
- Mars, A. (6 de diciembre de 2011). La brecha entre ricos y pobres se dispara al nivel más alto en 30 años. Informe de la OCDE. *El País*. Madrid.
- Merino Macchiavelo, T. (20 de enero 2012). Recaredo Gálvez. Nuevo Presidente de la FEC: «Más que una Federación vamos a ser un movimiento». (Entrevista). *El Diario de Concepción*, p. 13, Concepción.
- Muñoz, J. (11 de agosto de 2011). No nos escuchan, solo nos reprimen. *El País*. Madrid, 4.
- Nahas, M. y Cádiz, P. (26 de septiembre de 2011). CONFECH acelera retorno al diálogo para intervenir en Ley del Presupuesto. *La Tercera*. Santiago.
- Núñez, R. (2009). Con la fuerza de las ideas: Los desafíos de la Concertación. En Y. Quiroga y J. Ensignia, Jaime, *Chile en la Concertación (1990-2010). Una mirada crítica, balance y perspectivas* (23-37). Santiago: Friedrich Ebert Stiftung.
- OCDE / CEPAL (2005). *Evaluaciones del desempeño ambiental de Chile*. Santiago: OCDE.
- OCDE / BIRD / Banco Mundial (2009). *La Educación Superior en Chile*. Parte I y Parte II. Santiago: Ministerio de Educación de Chile. ISBN 978-92-64-05414-1.
- Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) (2011). *El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad*. Santiago: UNESCO.

- Oyarce, C. (21 de agosto de 2011). Planteamiento en el Senado. Universidad de Concepción apela a su historia de servicio para apoyo estatal. Entrevista Sergio Lavanchy, Rector Universidad de Concepción. *El Sur*. Concepción.
- Palma, C. y Reyes, P. (3 de julio de 2011). El 20 % de los egresados vivirá con 1,7 % veces el sueldo mínimo. *La Tercera*. Santiago.
- Pardo, G. (31 de diciembre 2011). Ricardo Lagos tras la cita con el Presidente Piñera en La Moneda y la encuesta CEP: «Chile requiere un nuevo entendimiento político y social» (Entrevista). *El Mercurio*, Santiago.
- Peña, N. (26 de septiembre de 2011). El 60,8 % de trabajadores chilenos dice que gana menos de 250.000 pesos. Encuesta Ministerio de Salud, Dirección del Trabajo e Instituto de Seguridad Laboral. *La Tercera*. Santiago.
- Pinto, A. (1985). *Inflación. Raíces estructurales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pinto, A. (1996). *Chile un caso de desarrollo frustrado*. Santiago: Ediciones Universidad de Santiago.
- Pinto, M. (30 de diciembre 2011). CEP: Gobierno baja en todos los aspectos y crece desapego hacia el mundo político. *El Mercurio*, Santiago, pp. 2-4, Cuerpo C.
- Pisani, S. (9 de octubre de 2011). ¿Se acerca el final del «Sueño Americano»? *El Mercurio*. Santiago.
- Pizarro, C. (27 de octubre de 2011). El Gobierno ha vuelto las cosas a un estado de guerra. Entrevista a Jorge Contesse, Director del Centro de DD.HH. Universidad Diego Portales. *The Clinic*. Santiago.
- Pizarro, C. (8 de marzo de 2012). Iván Fuentes, vocero del movimiento aysenino: “La muestra de grandeza de la Patagonia ha sido el peor enemigo del Gobierno”. *The Clinic*, año 13, N° 434, Santiago, pp. 8-11.
- PNUD (2002). *Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural 2002*. Santiago: PNUD.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009). *Desarrollo Humano en Chile. La manera de hacer las cosas*. Santiago: PNUD.

- Poblete, J. (28 de septiembre de 2011). CONFECH acepta diálogo, pero extiende para a segundo semestre. Entrevista a Camila Vallejo. *La Tercera*. Santiago.
- Qué Pasa* N° 1802 (22 octubre 2005). Felipe Lamarca. Cómo podemos corregir el modelo, 10-14. Santiago.
- Quiroga, Y. y Ensignia, J. (2009). *Chile en la Concertación (1990-2010). Una mirada crítica, balance y perspectivas*. Santiago: Friedrich Ebert Stiftung.
- Quiroga, Y. (2009). De modelo ejemplar a objeto de enmiendas: El sistema de pensiones en Chile. En Y. Quiroga y J. Ensignia, Jaime, *Chile en la Concertación (1990-2010). Una mirada crítica, balance y perspectivas* (369-371). Santiago: Friedrich Ebert Stiftung.
- Rojas, J. (1986). *Die chilenischer Gewerkschaftsbewegung 1973-1984*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Rojas, J. (1998). La pobreza como depredación humana condicionada y aprendida en sociedad. Criterios de sustentabilidad social. *Atenea*, 478, 159-188.
- Rojas, J. (2002). Estados-nación en el nuevo capitalismo global: confines de la democracia, subcontratación y derechos ciudadanos. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 8, 1, 213-236.
- Rojas, J. (2006). La sociedad neoliberal. *Sociedad Hoy*, 10, 41-72.
- Rojas, J. (2011). Chile de cara al siglo XXI. Sociedad bloqueada en lo social, político y ambiental. *Revista de Sociología* 20, 125-152. ISSN 1605-8933.
- Rojas, J. y Hansen-Rojas, G. (2006). Turismo de naturaleza, desarrollo local y megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia chilena. *Sociedad Hoy* N° 11, pp. 87-108.
- Rosanvallon, P. (2007). *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial.
- Sáez Rojas, A. (16 octubre de 2005). Ojo con el tamaño. Mapa de la concentración de los sectores y sus peligros. *El Mercurio*. Santiago.
- Salazar, G. (2005). *Construcción de Estado en Chile (1800-1837)*. Santiago: Sudamericana.
- Salinas, C. y Stange, H. (2005). La universidad en estado de sitio (en-

- trevista a Felipe Melo, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile). *Rocinante*, 81, 12.
- Santibáñez, F. (2008). Los cambios climáticos globales: ¿Qué le deparan a Chile? *Le Monde Diplomatique / CEPAL. La agricultura ¿Otra víctima del cambio climático?* (75-83), Santiago: Editorial Aún Creemos En Los Sueños.
- Scherman, A. y Arriagada, A. (Esc. Periodismo UDP)–Barrera, A. y Pardo, J. (Feedback) (2011). La generación movilizada. Encuesta a Jóvenes UDP. *Qué Pasa*, 26-33. También en línea: <http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/09/1-6583-9-la-generacion-movilizada.shtml#> [Consulta: 16.12.11].
- Simonsen, E. (3 de julio de 2011). Duras críticas del Banco Mundial al crédito con aval del Estado para estudios terciarios. *La Tercera*, 10-11. Santiago.
- Sennett, R. (2003). *El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad*. Barcelona: Anagrama.
- Soto, H. (3 de diciembre de 2011). Democracia, protesta y desconfianza. Entrevista a Pierre Rosanvallon. *La Tercera*. Santiago.
- Stipicic H., C. (7 de enero 2012). Beyer en clave política: «Dejé de ser analista, pasé a ser soldado». (Entrevista). *La Tercera*, R6 y R7, Santiago.
- Thayer, L. (14 al 20 de mayo de 2006). Hay que fortalecer un sistema de seguridad social. *La Nación Domingo*. Santiago.
- Tironi, E. (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las elites*. Santiago: Grijalbo.
- Tironi, E. (2004). La estrategia de La Moneda para frenar a Lavín. *Qué Pasa*, 26, 4 al 10 junio.
- Tohá, C.; Lagos Weber, R.; Landerretche, O. y Orrego, C. (2010). La Concertación Ciudadana. *Qué Pasa*, 2025, 20-25.
- Tomassini, L. y Armijo, M. (2002). *Reforma y modernización del Estado: Experiencias y desafío*. Santiago: Lom.
- Topcu, Ö. (18 de agosto de 2011). Wir sind jetzt alle Politiker/Todos somos políticos). *Die Zeit*. Hamburgo.
- Universidad de Concepción (2011). *Universidad de Concepción. Una Institución del Sistema de Educación Superior Público, gravitante en el pasado, presente y futuro del país*. Concepción: Universidad de Concepción, 6.

BIBLIOGRAFÍA

- Universidad Diego Portales (Azócar, A.; Scherman, A.; Barrera, A y Pardo, J.) (2009). Encuesta de Participación Social de Jóvenes 2009. *Qué Pasa* 2010, 16 de octubre (26-47).
- Uthoff, A. (2001). La Reforma al Sistema de Pensiones y su impacto en el mercado de capitales. En R. Ffrench-Davis y B. Stallings (Eds.) *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (231-261). Santiago: Lom.
- Valenzuela, S. (2006). Diseños dispares, resultados diferentes y convergencias tardías. Las instituciones de bienestar social en Chile y Suecia. En J. Valenzuela, E. Tironi y T. Scully (Eds.), *El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile* (359-430). Santiago: Taurus.
- Valenzuela, J. (24 de septiembre de 2011). «Autopsia del desarraigo». Entrevista al escritor Tahar ben Jelloun. *El País*. Madrid.
- Vargas Llosa, Á. (20 de agosto de 2011). La transformación de David Cameron. *La Tercera*. Santiago.
- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009). *Desigualdad. Un análisis de la (in) felicidad colectiva*. Madrid: Turner Noema.
- Zapatta, F. (1997). *Mitos y realidades del sistema privado de Fondos de Pensiones en Chile (AFP)*. Santiago: Lom.
- Zegers, M. (2003). Los líderes chilenos se educan en diez colegios. Entrevista a Rafael Rodríguez. *Capital*, 25 de mayo-5 junio.

